

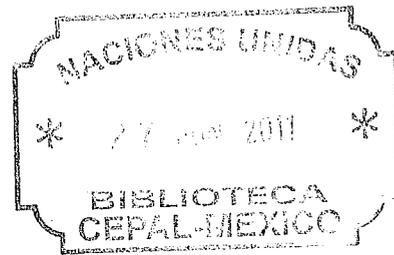
Distr.
RESTRINGIDA

LC/MEX/R.458
10 de febrero de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe



NICARAGUA: UNA ECONOMIA EN TRANSICION

INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION Y SINTESIS DE PROBLEMAS	1
1. Antecedentes	1
2. La política económica	2
3. Reconstrucción institucional	3
4. Hacia una combinación viable de estrategias económicas y sociopolíticas	4
5. Márgenes de maniobra y recomendaciones	6
6. Recapitulación conceptual	13
II. EVOLUCION HISTORICA DE LA ECONOMIA 1950-1992	15
1. El período 1950-1980	15
2. El período 1980-1990	17
a) Transformación de la economía y la gestión pública	17
b) El marco macroeconómico	18
3. El período 1990-1992	20
a) La triple transición hacia una economía de paz y de mercado con democracia	20
b) Objetivos principales del programa de Gobierno	20
c) Los logros y desafíos de la reconversión	22
III. EL MARCO MACROECONOMICO DE LA REACTIVACION	26
1. El balance oferta demanda global y las brechas de ahorro interno privado y público	30
2. El sector externo y la brecha de financiamiento	33
a) El comercio de bienes	33
b) La brecha de financiamiento externo	35
c) Restablecimiento de la productividad global	36
3. El sector social y la situación del empleo	39
a) La situación social	39
b) Evolución y perspectivas del empleo	40

IV. LOS SECTORES PRODUCTIVOS: PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y REACTIVACION	44
1. Reactivación y desarrollo de la agricultura	45
a) La producción destinada a mercados externos	45
b) La producción de abastos internos	46
c) Los recursos forestales y el medio ambiente	47
2. La reactivación industrial	48
3. Los servicios	51
4. La participación de los distintos agentes económicos	52
a) La participación en actividades agrícolas	52
b) La participación en el área industrial	54
c) La reorganización de los servicios	55
5. Capacitación y transferencia de tecnología	55
6. El financiamiento	56
<u>Anexo estadístico</u>	59

I. INTRODUCCION Y SINTESIS DE PROBLEMAS

1. Antecedentes

La sociedad y la economía nicaragüenses han atravesado en los últimos quince años por cambios y convulsiones institucionales de enorme magnitud, que tipifican un caso único en América Latina. La guerra civil de los años setenta, que se resolvió con la eliminación del régimen autoritario somocista y abrió paso al movimiento sandinista, marca apenas el inicio de esas transformaciones.

El triunfo revolucionario trajo consigo una notable ampliación de funciones y actividades económicas emprendidas directa o indirectamente mediante los auspicios estatales. Durante la década de los años ochenta alrededor del 40% de la formación del valor agregado correspondía al Estado, y el resto, todavía mayoritario, a los sectores productivos privados. El control gubernamental se extendió a actividades clave de la economía, como el comercio exterior, la banca, los recursos naturales y otros sectores productivos. Y, por razón natural, la inversión prácticamente dejó de contar con un componente privado.

Esas características de la estrategia de desarrollo del sandinismo resultaron seriamente complicadas por el manejo de la política económica y por la lucha armada, alentada por las tensiones ideológicas entre el Este y el Oeste. En tales circunstancias anormales, los desajustes económicos y el bloqueo se intensificaron hasta desembocar en una hiperinflación mayúscula (en 1988 el índice de precios creció 14,300%, el déficit fiscal llegó a 26% del producto y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos representó 3 veces el monto total de las exportaciones).

Como resultado de las elecciones de 1990, se afianzaron los procesos de democratización y pacificación y a la vez se dio un vuelco en las estrategias de desarrollo. Ahí se inicia un doble proceso de transición: pasar de una economía de guerra a otra de paz, y de un sistema económico con fuertes ingredientes de estatismo y planificación, a otro de mercado y apertura externa. En otro terreno, el país se desplaza a negar la tradición autoritaria de la mayor parte de la historia política de este siglo, para intentar la implantación de un sistema democrático plural.

2. La política económica

Junto con esa doble o triple transición se acumulan los problemas —singularmente agudos en Nicaragua— de la estabilización y la reforma estructural que ha venido acompañando la transformación económica de América Latina y Centroamérica desde los años ochenta. ^{1/}

En ese sentido, la nueva estrategia económica se enderezó a estabilizar los precios y a un cambio estructural cuyos principales elementos se refieren a la apertura externa, el adelgazamiento del sector productivo público, la reforma bancaria y el fomento a los mercados.

En todos esos frentes se ha avanzado, pero no siempre los resultados se han traducido en reanimación de la actividad económica ni en atender las demandas de una población que lleva década y media de experimentar graves retrocesos en sus estándares de vida.

Sin duda se obtuvo un éxito notable en corregir la hiperinflación hasta llegar a ritmos bastante moderados de alzas de precios (3.5% en 1992 y 25% en 1993). El déficit fiscal se redujo del 19.8% al 7.3% en el trienio 1990-1992 por aumento de ingresos y reducción de gastos, y se ha procedido a privatizar buena parte de las antiguas empresas estatales, aunque sin generar ingresos fiscales de significación.

Con todo, el ajuste macroeconómico ha quedado trunco en cuanto a que las cuentas externas señalan un serio ahondamiento de los desequilibrios (el déficit en cuenta comercial se duplica entre 1990 y 1992, pasando de 290 a 586 millones de dólares que representan el 32% del producto). Es difícil exagerar la magnitud de una brecha externa de pagos que, en tiempos de paz, seguramente excede proporcionalmente a la de cualquier otro país. Hasta ahora, flujos masivos de ayuda externa han permitido financiar esa brecha, usar al tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y validar el rápido desmantelamiento del aparato proteccionista.

Descartadas las medidas propias de las estrategias de crecimiento hacia adentro para corregir el estrangulamiento exterior, y visto que el grado alto y creciente de apertura externa convierte rápidamente en elevaciones de precios por los efectos de la devaluación, el dilema oscila entre seguir dependiendo de la cooperación internacional o provocar una deflación más intensa de la actividad

^{1/} También hay resabios de la destrucción causada por los conflictos sociales y por una sucesión de desastres naturales que hasta la fecha no han podido resanarse por entero. Véanse, CEPAL, Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad de Managua en la economía nicaragüense (E/CN.12/AC.64/2/Rev.1), 13 de enero de 1973; Nicaragua: Repercusiones económicas de los acontecimientos políticos recientes (Nota de la Secretaría) (E/CEPAL/G.1091/Rev.1), diciembre de 1979; Daños ocasionados por el huracán Joan en Nicaragua: sus efectos sobre el desarrollo económico y las condiciones de vida, y requerimientos para la rehabilitación y reconstrucción (Nota de la Secretaría) (LC/G.1544 (LC/MEX/L.94)), 17 de noviembre de 1988; Efectos económicos de la erupción del volcán Cerro Negro en Nicaragua (LC/L.686/Rev.1 (LC/MEX/L.185/Rev.1)), 20 de mayo de 1992; El maremoto de septiembre de 1992 en Nicaragua y sus efectos sobre el desarrollo (LC/L.708 (LC/MEX/L.209)), 24 de septiembre de 1992.

económica. 2/ Correlato de lo anterior es el peligroso y persistente debilitamiento del ahorro interno (-11.5% del producto en promedio, entre 1988 y 1993) y sobre todo el desahorro de origen privado, que no pudo corregir compensatoriamente la mejoría de las finanzas gubernamentales. 3/

3. Reconstrucción institucional

Explicar el éxito o el fracaso parciales de las estrategias y reformas que se vienen implantando hace necesaria la referencia a algunas especificidades del caso nicaragüense.

En primer término, el tránsito de una economía de guerra a una de paz no es cuestión que pueda atenderse con enfoques estandarizados, y menos aún cuando la nueva política emprende la construcción o reconstrucción de las instituciones propias de una economía de mercado que nunca existieron, no estuvieron bien desarrolladas o que fueron debilitadas en la fase anterior de desarrollo.

Por eso, los menores avances se perciben no tanto en el logro de los grandes equilibrios macroeconómicos, sino a escala microeconómica y sobre todo en la creación y fortalecimiento de una cultura empresarial apoyada en una organización sólida de mercados y de mecanismos jurídicos e institucionales de apoyo.

El tipo histórico de desarrollo nicaragüense y los abruptos cambios recientes en el entorno socioeconómico han incidido en la reducción del número de empresarios y técnicos nacionales e impuesto condiciones que suponen asumir riesgos especiales. Por otro lado, el tamaño de la economía, su rezago comparativo y esos mismos cambios de orientación a que ha estado sujeta originan serias imperfecciones en el funcionamiento de los mercados o que se carezca simplemente

2/ Las dudas sobre la viabilidad de sostener los montos de ayuda tan altos en el futuro se han aducido como argumento para recomendar la intensificación de las medidas de ajuste fiscal y monetario. Véase, Banco Mundial, Opciones de Política Económica en el Marco de Perspectivas de Ayuda Externa Decreciente, Managua, 1993.

3/ A conclusiones análogas ha llegado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los procesos de ajuste económico de países (19 casos) que han utilizado o vienen utilizando la Facilidad Reforzada de Ajuste (Enhanced Structural Adjustment Facility), que podría resumirse como sigue: a) se han registrado resultados positivos en abatir la inflación, subir en alguna proporción las tasas de crecimiento, elevar los volúmenes de comercio y los coeficientes de endeudamiento; b) el ajuste fiscal ha avanzado con mayor lentitud que la reforma estructural. Los obstáculos a la reducción repetitiva del gasto público y el alza en las tasas de interés resultan ser factores explicativos importantes; c) la voluntad gubernamental de reformar y ajustar es decisiva, pero las inestabilidades políticas suelen detener o revertir los avances; d) el deterioro de los términos del intercambio —como ocurre en Nicaragua— cancela progresos significativos, aun en casos donde se han efectuado esfuerzos importantes en el ajuste; e) en buena parte de los países examinados, la reforma estructural no ha podido completarse y ha resultado elusiva la consolidación de la viabilidad externa. (Véase, FMI Economic Adjustment in Low-Income Countries: Experience under the Enhanced Structural Adjustment Facility, Washington, 1993, en especial las páginas 39 a 41.)

de éstos en determinadas actividades. A título ilustrativo conviene reseñar a continuación dos casos conspicuos.

En primer lugar, las imperfecciones en el régimen de propiedad, ya sea por deficiencias en los registros de titulación o por los derechos encontrados que crearon las expropiaciones o privatizaciones han dejado fuera de las transacciones ordinarias a una fracción importante de la tierra cultivable o de las instalaciones empresariales, afectando los procesos de inversión o reconversión empresarial.

En segundo, hay un vacío institucional en muchos mercados financieros. Precisamente, los créditos a la producción en el interior del país solían otorgarse por conducto de bancos públicos (sobre todo del Banco Nacional de Desarrollo y del Banco Nicaragüense), que hoy han limitado severamente sus operaciones, como parte del programa de ajuste estructural. A su vez, la nueva banca privada todavía no tiene la experiencia, la intención de asumir los riesgos, ni la penetración organizativa fuera de Managua, como para apoyar el desarrollo de la inversión o mucho del financiamiento de corto plazo de la producción.

Entonces, no es de extrañar que haya un sinnúmero de rigideces que impiden reaccionar normalmente a la oferta en respuesta a la liberalización económica y a la apertura externa. Siempre existen tiempos diferenciales de reacción entre la oferta y la demanda frente a la reestructuración de los precios relativos con el exterior. La demanda de productos foráneos, antes restringida, se traduce de inmediato en importaciones, mientras que la transferencia de recursos hacia la creación de nuevas capacidades exportadoras madura con bastante mayor parsimonia. En el caso de Nicaragua esos efectos están separados por tiempos excepcionalmente largos, debido a las debilidades institucionales y de los propios agentes del mercado.

Diferencias semejantes —acentuadas por la timidez de los programas gubernamentales de apoyo— se observan en la adaptación competitiva de las empresas que sirven al mercado interno para acomodarse —por la vía de la reconversión y de la asimilación de tecnologías mejoradas— a un régimen más abierto de competencia internacional. De aquí la elevada tasa de cierres y quiebras que afecta singularmente a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo la debilidad del proceso privado de formación de capital.

4. Hacia una combinación viable de estrategias económicas y sociopolíticas

En consecuencia, sin la transformación microeconómica indispensable al crecimiento, en un régimen abierto a la competencia externa, los equilibrios macroeconómicos sólo pueden alcanzarse con

restricción y estancamiento que se prolongan a veces excesivamente hasta despertar insatisfacción social y pérdida de legitimidad de los gobiernos. 4/

En ello reside otra de las especificidades del caso nicaragüense. Quiérase o no, los programas de reforma estructural deberían incorporar dimensiones singulares. Así, los alicientes puros de mercado no alcanzan a compensar los riesgos excepcionales, la falta de apoyo y las debilidades estructurales del mercado y del sector empresarial, en ausencia del respaldo convergente y también excepcional —en el período de transición— del Estado. Además, es imprescindible encarar de modo sistemático proyectos encaminados a reconstruir la infraestructura física e institucional deteriorada en el conflicto bélico, y compensar las consecuentes deseconomías externas que recaen pesadamente sobre el empresario nicaragüense.

Asimismo, la reconversión de la economía a tiempos de paz no sólo radica en constreñir severamente el gasto militar, sino también en insertar a los excombatientes a la vida productiva civil. No hacerlo o hacerlo a medias entraña el desperdicio de los recursos humanos y además arriesga la reaparición de conflictos armados y desórdenes sociales, como los que comienzan a proliferar en distintas regiones del país.

Por último, debe reconocerse que la sociedad nicaragüense está exhausta después de casi dos décadas de guerra civil y de un empobrecimiento que se extiende y acentúa día a día. Entre 1980 y 1992, el ingreso por habitante ha descendido ininterrumpidamente, hasta caer en conjunto 50%; el desempleo abierto suma el 17% de la fuerza de trabajo, y el subempleo 33%, dejando marginada del mercado moderno de trabajo al 50% de la población activa. En situación de pobreza se encuentra el 70% de los nicaragüenses. La dieta alimenticia se ha deteriorado y la desnutrición aqueja al 24% de la población escolar.

Abstraer del entorno social las estrategias de estabilización y reforma económica, esto es, situar la carga del ajuste en las estructuras políticas suponiendo que son suficientemente resistentes, puede justificarse en muchos países donde el problema único y central consiste en pasar del proteccionismo a políticas de crecimiento hacia afuera. Pero practicarlos en el caso singular de Nicaragua, que apenas sale de la guerra civil y por primera vez se aleja del autoritarismo, implica comprometer el éxito mismo del cambio económico y también el de llevar a buen término la modernización política que se ensaya.

En los hechos, la vida política del país se encuentra polarizada por grupos suficientemente representativos y poderosos para cancelar todo esfuerzo que no esté sustentado en negociaciones consensuales o que intente excluir a unos u otros. El Frente Sandinista cuenta en sus filas con grupos muy numerosos de los organismos campesinos, los sindicatos obreros y el ejército; la Unión Nacional Opositora tiene el apoyo mayoritario de empresarios, importantes estratos de clases medias,

4/ El propósito principal de la reforma comercial procura eliminar el sesgo antiexportador de las políticas proteccionistas anteriores, y facilitar la reasignación de recursos en favor de la producción exportable. Sin embargo, lograr esta transferencia de capitales y capacidades empresariales resulta entorpecido por las imperfecciones de los mercados y el clima recesivo que viene prevaleciendo.

la Iglesia y algunos partidos políticos minoritarios. Al centro se ubica el gobierno, que, en principio, debiera funcionar como fiel de la balanza y tomar las iniciativas fundamentales en materia de conciliación nacional y reconstrucción económica. La administración pública busca cumplir esas funciones, pero con frecuencia queda abrumada por demandas excesivas y contradictorias de las cúpulas políticas, así como por las de actores externos que financian proyectos y programas, asesoran o buscan promover sus intereses en el país.

También el ensayo de cancelar la tradición autoritaria en la organización de las decisiones exige tiempo para crear los valores alternos del debate constructivo, del otorgamiento de concesiones recíprocas entre los partidos políticos o los grupos sociales, y de la práctica de configurar soluciones consensuales, donde no haya un solo actor aplastantemente victorioso. En más de un sentido, crear las instituciones de la democracia plural supone transitar por un período en que las actitudes contestarias predominen, dificultando la concreción de los acuerdos de alcance nacional.

Pero Nicaragua no dispone de mucho tiempo en lo que toca a prevenir la ingobernabilidad social. La quiebra o paralización de las empresas, la difusión de la pobreza y la multiplicación de los secuestros, encuentros armados y asaltos, debilitan al gobierno en los frentes económico y político, y conducen a endurecer las posiciones extremas de los diversos grupos políticos organizados. Romper el *impasse* depende de que el gobierno tome la iniciativa tanto en definir un acuerdo político nacional, como en impulsar con autonomía estrategias económicas que, a la vez de hacer avanzar los ajustes indispensables, atiendan a las demandas sentidas y más urgentes de la población o de los sectores productivos. ^{5/} Más que alterar la dirección básica de las políticas, habría que modularlas en el tiempo, reducir al mínimo los costos sociales y buscar una mezcla más equilibrada de metas socioeconómicas, hasta hacerlas compatibles con la constelación de restricciones y fuerzas reales del país.

5. Márgenes de maniobra y recomendaciones

No todos son problemas y escollos. Hay también circunstancias favorables que en principio facilitarían cumplir con la reforma económica, revitalizar el proceso de desarrollo y fortalecer la democratización de las instituciones políticas, erradicando la tradición autoritaria del país.

Si bien entre las cúpulas políticas parece haber diferencias abismales, en los hechos se plantean posiciones comunes, armonizables en una serie de cuestiones de primera importancia. Por un lado, se afirma y extiende la convicción de que sin acuerdos de conciliación política, se produciría una parálisis de alcance nacional, perjudicial a todos. Eso explica los acercamientos entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Unión Nacional Opositora y el gobierno para negociar un pacto

^{5/} Véase, CEPAL, *Transformación productiva con equidad* (LC/G.1061 (SES.23/4), Santiago de Chile, marzo de 1990.

de esa naturaleza, que se ha intentado realizar directamente —y no sin riesgos de gobernabilidad— entre los dos primeros movimientos políticos. 6/

Por otra parte, está el hecho significativo de que entre los grupos de base de las organizaciones políticas afloran múltiples demandas y planteamientos análogos hacia sus dirigencias políticas y hacia el gobierno que, de no atenderse, los deslegitimarían. En ese sentido se percibe hoy un clamor general en favor de la reafirmación de la paz, de la democracia y de la multiplicación de las fuentes de trabajo; de fortalecer a la economía empresarial de mercado; de regularizar el reparto de tierras y esclarecer los derechos de propiedad para despejar los conflictos de interés que se vienen suscitando; de instaurar programas ampliados de empleo sobre todo en beneficio de los excombatientes; de alentar la producción con apoyos destinados a normalizar la canalización del crédito, reducir las tasas de interés o prestar asistencia técnica; de proteger prudentemente a la pequeña y mediana empresa y a los campesinos de la apertura abrupta de los mercados y de la importación de productos subsidiados del exterior, y de alentar deliberadamente la formación de nuevas ventajas comparativas, compensando las desventajas externas que enfrentan los nuevos exportadores.

Por consiguiente, en el dominio de la política, pese a los desacuerdos y al aparente debilitamiento del gobierno, hay bases consensuales sólidas que permitirían formar una alianza programática en favor de la conciliación nacional y el desarrollo.

Por lo que respecta a la reactivación económica, las restricciones parecen severas, singularmente ante el riesgo de desatar nuevamente presiones inflacionarias en espiral, con reservas internacionales casi agotadas. Sin embargo, también aquí hay márgenes apreciables de maniobra susceptibles de aprovecharse con cambios relativamente menores en la selección y en la orientación de los instrumentos de política económica.

Desde luego, tendría que seguir restringiéndose la expansión monetaria primaria y profundizándose el saneamiento de las finanzas públicas. En contraste, habría que poner mucho mayor énfasis en contener el ensanchamiento ya insostenible del desequilibrio de pagos y la filtración inmoderada de divisas al exterior; se justificaría incluso, ante la emergencia, reducir el paso de las

6/ En reciente Declaración Conjunta del Frente Sandinista y de la Unión Opositora se anotan las siguientes coincidencias : "a) El Plan Económico del Gobierno ha fracasado, lo que hace necesario un nuevo Plan Integral que estimule la producción, la inversión, facilite el crédito y genere empleo...; b) para el cumplimiento exitoso del nuevo plan, se requiere de estabilidad política y un marco jurídico adecuado que garantice la estabilidad ciudadana y la seguridad de la propiedad; c) cualquier acuerdo con los organismos financieros internacionales que traiga más desempleo, restricción de los servicios sociales y del crédito productivo, no es viable para Nicaragua. Los recursos externos deben ser priorizados para la reactivación económica más que para el pago del servicio de la deuda externa." Además, ambos movimientos políticos se comprometen a promover el desarme y desterrar la violencia; someter a las Fuerzas Armadas al control civil y a las capacidades económicas del país, conforme a normas constitucionales y leyes secundarias que se emitirían al efecto con su respaldo político.

políticas de liberalización de mercados y usar algunos instrumentos que podrían calificarse de heterodoxos.

Paradójicamente, un primer margen de maniobra está constituido por los aportes sustantivos de la cooperación externa que se filtran al exterior, en importaciones de bienes de consumo, desperdiciándose en su mayor parte al no resolver a fondo ningún estrangulamiento real de la economía.

Conforme a cifras de la balanza de pagos, el flujo neto de capitales en el período 1989-1992 ascendió en promedio anual a 766 millones de dólares y las transferencias unilaterales oficiales casi a 400 millones, esto es, a más de dos veces en el primer caso y a más de una vez, en el segundo, los ingresos medios anuales por exportaciones. Por más que una parte de la ayuda internacional sea en especie o esté atada, el problema ya no reside en su cuantía, sino en la recirculación hacia afuera de los flujos de fondos, sea para hacer posible una apertura externa demasiado rápida o por la insuficiencia de los programas de reactivación y reconversión de la producción doméstica, o de fomento de nuevos rubros de exportación. Déficit comerciales acercándose al doble de las exportaciones acaso sean explicables en situaciones de conflicto armado generalizado, pero en tiempos de paz resultan claramente indicativos de graves problemas económicos en gestación. Del mismo modo, la utilización masiva del ahorro externo está llevando a acrecentar desmesuradamente el servicio de la deuda (en 1994, los pagos de esa índole se estiman en cerca de 260 millones de dólares, cantidad semejante a la del conjunto de las exportaciones).

La situación descrita genera un nuevo círculo vicioso: el aumento intensísimo del endeudamiento externo y de su servicio, sin contrapartida de crecimiento. En la actualidad, la deuda nicaragüense excede los 10,000 millones de dólares, cuyo servicio efectivamente cubierto o pospuesto, pero consolidado, casi alcanza al ingreso total por ventas al exterior. Puesto en términos comparativos, el país resulta ser uno de los más endeudados del mundo, ya sea que se mida con relación al producto, los ingresos de la balanza de pagos o cualquier otro indicador. Seguir por ese camino llevará casi seguramente a una crisis financiera y de pagos que sumiría a la nación en un nuevo ciclo de inflación y depresión con inestabilidad social.

Hay, en consecuencia, una situación de emergencia que exige la adopción de medidas correctivas de carácter excepcional. Frente a la debilidad de los incentivos a la inversión o los largos períodos de maduración de la diversificación de exportaciones, la reactivación de la producción, usando y mejorando las capacidades instaladas, es la salida más expedita para reducir importaciones, acrecentar ventas externas de productos tradicionales, y elevar el grado de ocupación de los recursos humanos y materiales. Adviértase que las compras de bienes de consumo en el exterior casi se triplicaron en el período 1989-1992, en tanto que, con excepción de los combustibles, prácticamente se estancaron las adquisiciones de bienes vinculados a la producción, sean insumos o bienes de capital.

El punto de partida tendría que consistir en la restricción deliberada de las importaciones de bienes de consumo, sobre todo los duraderos y de lujo, pero también aquellos que más desplacen a la producción campesina y de la pequeña o mediana empresa. Los instrumentos de política económica podrían variar. Un primer paso podría consistir en la implantación o elevación de los gravámenes al consumo, combinados con bandas de precios a las compras de productos

agropecuarios y la restricción crediticia al comercio de importación de bienes de consumo. Si se tendiese a agravar el estrangulamiento externo podría llegarse hasta utilizar las cláusulas de salvaguarda del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (y las ya convenidas en torno al intercambio regional) que permitan la fijación transitoria de cuotas, permisos de importación o aranceles. De modo alternativo, cabría recurrir a la depreciación real de la moneda; pero en ese evento, frente a la experiencia reciente, la única salida a la inflación consistiría en la concertación de un pacto que distribuyese los costos del ajuste entre todos los estratos de la población de un modo políticamente viable y que no cancelase el objetivo de la reactivación económica.

La selección de las vías más expeditas para cerrar el desequilibrio fundamental de pagos depende, en todo caso, de la posibilidad de alcanzar acuerdos participativos internos que, a la vez, acomoden las realidades y exigencias de los entornos regional e internacional. Ciertamente, Nicaragua no podría regresar al callejón sin salida del proteccionismo; pero sí requiere de flexibilidad en los tiempos del ajuste a fin de no caer en el riesgo inminente de la ingobernabilidad social.

Moderar las compras al exterior no sería suficiente. Al mismo tiempo habría que lanzar programas microeconómicos concertados de aliento a la producción. Un primer campo de altísima prelación se refiere a la diversificación de exportaciones, a la creación de nuevas ventajas comparativas, a la identificación de nichos de inserción en los mercados mundiales. El crecimiento de Nicaragua ya no puede sustentarse en la exportación de productos primarios que han agotado buena parte de sus propiedades dinámicas. También se trataría de dar ocupación a los excombatientes, usar las capacidades instaladas para acrecentar y fortalecer la oferta interna de productos agropecuarios y de manufacturas de consumo.

Hay rigideces, pero también la circunstancia favorable de la alta velocidad de reacción de la oferta, dado el período relativamente corto de los ciclos de cultivo en una economía predominantemente agrícola. Pieza clave en ese esfuerzo sería flexibilizar el uso de los recursos del crédito interno y movilizar fondos no utilizados todavía, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras fuentes.

La cooperación externa no siempre ha podido aprovecharse a plenitud, ni canalizarse a la reconstrucción de la infraestructura o de las capacidades productivas, o a fortalecer las capas empresariales nacionales. Por eso, dentro de los límites asequibles convendría negociar algunos cambios en su orientación, a sabiendas de que la reforma económica y democrática de Nicaragua exigiría, en cualquier caso, la contribución internacional durante tiempos prolongados.

En primer término, acaso fuese dable reducir las donaciones en especie, singularmente las que compiten con la producción nacional, y sustituirlas por contribuciones de libre disposición o por bienes escasos en los mercados nicaragüenses. Por otra parte, podría resultar ventajoso aprovechar el proceso de privatizaciones a fin de formar *joint ventures* de capital mixto, donde se incorporasen recursos de la cooperación externa, no sólo en fondos de inversión, sino también en tecnología y en cuerpos empresariales escasos en el país.

Es posible que las restricciones a las compras en el exterior tengan alguna repercusión inflacionaria en el corto plazo, como la tendría, y quizás de modo más inmediato y general, la

depreciación de la paridad monetaria. Con todo, ello parecería preferible —dentro de márgenes razonables— a la alternativa de ajustar las cuentas externas por la vía de acentuar la recesión económica, con el peligro de magnificar la inestabilidad social y de crear un clima poco propicio a la formación de capital.

Al respecto debe advertirse que la brecha de pagos alcanza tal magnitud que difícilmente podría subsanarse en tiempos breves mediante el desarrollo de nuevas exportaciones, dado el debilitamiento de las ventas de productos tradicionales y el clima poco propicio a la concreción de inversiones privadas innovadoras. Del mismo modo, habría que crear otro compás de espera a fin de evitar que los flujos del financiamiento externo se disipen en pagos a factores. En consecuencia, convendría iniciar otro ciclo de negociaciones en el Club de París y en otros foros, para adecuar el servicio de la deuda a los flujos reales de divisas, sin causar nuevos enfrentamientos con la comunidad financiera internacional.

Hasta ahora, la comunidad internacional ha apoyado con extrema generosidad el proceso de cambio en Nicaragua. Es responsabilidad interna utilizar de manera óptima esos márgenes de maniobra para hacer viable de nuevo un proceso de desarrollo sostenido y lograr poco a poco la autosuficiencia financiera nacional. Importa, por tanto, asegurar que los recursos no se recirculen simplemente al exterior, sin generar efectos positivos internos, sin sacar al país de la depresión o el atraso productivo. Hasta hoy, sus flujos financieros han servido para cerrar la brecha comercial, pero de modo creciente en el futuro apenas bastarán al propósito de servir una deuda con crecimiento explosivo.

Otro margen de maniobra en cuanto a hacer factible la reactivación económica se encuentra en la capacidad financiera de las instituciones bancarias nacionales; hasta ahora no se las ha usado a plenitud y la liberalización crediticia ha conducido en una primera etapa a concentrar los apoyos en las grandes empresas y en actividades que, lejos de resolver los estrangulamientos productivos del país, tienden a agravarlos.

En 1991, el sector agrícola —no ganadero— absorbió el 25% del crédito neto de la banca, y las manufacturas, el 36%, mientras que el comercio se benefició con el 4%. En el siguiente ejercicio comenzaron a alterarse dramáticamente esas proporciones, cuando el comercio recibió el 29% de los préstamos y la industria sólo el 6%, además de que los montos netos canalizados cayeron en términos reales y nominales. Más aún; en los cinco primeros meses de 1993, los flujos netos de financiamiento a la agricultura resultaron negativos, en tanto que los canalizados al comercio representaron el 74% del total.

En otra perspectiva, la banca no ha estado colocando plenamente los recursos captados, como se pone de manifiesto en el mantenimiento de liquidez excesiva y encajes excedentes sobre los porcentajes marcados por las regulaciones oficiales. Aquí subsisten escollos de distinto tipo, algunos de carácter estructural y otros de inadecuación de las políticas vigentes. Entre estos últimos, se cuenta la naturaleza diferencial de las reglas que norman a los distintos tipos de depósito. Hay depósitos en córdobas, depósitos con mantenimiento de valor o depósitos denominados en moneda extranjera, que obligan a los banqueros a subdividir por igual la composición de los préstamos, a fin de mantener en equilibrio los riesgos entre pasivos y activos bancarios, dificultando la colocación

expedita de los recursos y empujando hacia arriba los costos de la intermediación y las tasas activas de interés.

Asimismo, crisis económica, desórdenes en algunas zonas productivas, reorientaciones abruptas de las políticas económicas, vienen determinando la acumulación de carteras vencidas, sobre todo en la banca estatal. Prácticas anteriores, en el sentido de cancelar con cierta facilidad esos créditos a cargo del erario o de prestar con tasas activas de signo negativo —subsidios—, han generado hábitos financieros inconvenientes de algunos usuarios de la banca. A falta de medidas correctivas, los altos riesgos producen el encarecimiento del crédito, por encima de las restricciones de carácter macroeconómico y de su distribución sesgada, que se acentúa ante la dificultad de disponer de garantías reales, asentadas en regímenes transparentes de propiedad.

Por otro lado, como se mencionó, la reforma del sistema financiero no ha logrado completarse. La banca privada está asentada en Managua, pero no presta servicios en otras localidades, circunstancia especialmente restrictiva en un país fundamentalmente agrícola y ganadero. Eso mismo torna cuestionable, por lo menos transitoriamente, transformar a las instituciones financieras estatales —sobre todo las de desarrollo—, en banca de segundo piso, ante la inexistencia de servicios bancarios de primer piso en la mayoría de los centros de actividad económica. En esta materia hay, como en el caso de la balanza de pagos, cierta oposición entre los objetivos de corto plazo y las metas de reforma estructural que sólo pueden resolverse volviendo a sincronizar ambas estrategias. 7/

Aparte de la conciliación de las acciones de corto y largo plazo, aprovechar los márgenes de maniobra del sector financiero nacional para alentar la producción sin recurrir a expedientes inflacionarios —como la emisión inorgánica del Banco Central— exigiría acciones convergentes en varios frentes.

En primer término, es aconsejable procurar una redistribución menos sesgada del crédito. Con los mismos montos globales habría que acrecentar los recursos que se canalizan a la agricultura y la industria, mientras que se restringen los que están financiando al comercio y las importaciones. Del mismo modo, habría que favorecer a los pequeños y medianos productores, a las actividades exportadoras, a los proyectos de reconversión o modernización de las empresas, y a la formación de capital.

7/ Los objetivos de estabilización macroeconómica llevan a usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, pero su combinación con la reforma del proteccionismo, al procurar la apertura inmediata de mercados, produce un auge de importaciones que agrava el déficit de pagos, y a la postre genera un nuevo ciclo de devaluación-inflación o de ajuste recesivo. Aquí la reforma liberalizadora del sector financiero implica fomentar la banca privada y reducir el radio de acción de la pública, pero ello tiende a crear un *impasse* temporal en los alcances de las funciones crediticias y distorsiones en su distribución, contrarios a los objetivos de reactivación productiva por moderados que sean. Esto, a su vez, tiende a elevar las carteras vencidas y las tasas de interés, causando nuevos entorpecimientos a la producción y la inversión.

Entre los instrumentos de política a utilizar se encuentran el uso de encájes y redescuentos diferenciales, la fijación de cajones crediticios a la banca, o la regulación de las tasas de interés. Ello parece doblemente indispensable mientras se eliminan las imperfecciones y se normaliza el funcionamiento de los mercados financieros o se asientan las reformas estructurales del propio sector financiero.

Mecanismos análogos, junto con algunos incentivos y cambios regulatorios, habría que emplear a fin de aprovechar más plenamente la capacidad financiera ociosa de la banca privada, la cobertura geográfica de servicios de la banca estatal, así como el uso expedito de recursos ya contratados en el exterior (Banco Interamericano de Desarrollo).

El tratamiento al problema de la cartera vencida o morosa, además de atenderse por los medios usuales de la formación de reservas de castigo, o la reestructuración de los préstamos a las empresas con viabilidad económica, requiere del afinamiento de las prácticas de análisis del crédito y del establecimiento de mecanismos institucionales y jurídicos que refuercen las garantías y disminuyan los riesgos. Entre ellos, la normalización del régimen de propiedad constituiría un avance insoslayable.

Tan importante como lo anterior sería promover decididamente el fortalecimiento o la formación de organismos auxiliares de intermediación financiera y de programas especiales que hagan corresponsables de la recuperación a los propios beneficiarios del crédito. Al respecto, no sólo habría que usar más intensamente la red disponible de los bancos con conocimiento directo de los acreditados, sino además promover o aprovechar a las cooperativas, las uniones de crédito o a organismos no gubernamentales, con el doble propósito de ganar su colaboración interesada e implantar normas y hábitos más estrictos de comportamiento en los procesos del financiamiento bancario. Con propósitos análogos se justificaría implantar programas de ahorro-préstamo en favor de los pequeños y medianos productores, ^{8/} cuya ventaja adicional sería contribuir gradualmente al ensanchamiento de la masa de recursos susceptibles de ser aprovechados productivamente y reducir los excesos de absorción de la economía.

En conclusión, el margen de acción de la economía y de la política económica nicaragüense es sumamente estrecho. Hay un entrecruzamiento de dilemas políticos y económicos que se interaccionan y que sería contraproducente ignorar, como son la ortodoxia económica y la conciliación política. Debe seguirse cimentando la paz, la estabilidad de precios, ahondar la reforma estructural, y a la par iniciar la reconstrucción física e institucional de una economía de mercado. Más aún, es necesario combinar con fórmulas aceptables políticamente, objetivos de corto y largo plazos de orden social y económico, así como atender las secuelas no cicatrizadas del conflicto bélico. Las especificidades de Nicaragua hacen inoperante o al menos sumamente riesgoso en la situación actual recobrar los equilibrios macroeconómicos mediante programas recesivos de ajuste. Habrá que ensayar esquemas mejor combinados de metas —aunque tome más tiempo completarlos—

^{8/} Dada la limitada capacidad de ahorro de los empresarios de esos estratos, cabría organizar proyectos piloto alimentados inicialmente con recursos de la cooperación externa, para ampliarlos posteriormente sobre la base de la experiencia recogida y del incremento de la capacidad de ahorro de los beneficiarios.

que pongan la reactivación económica y al ajuste expansivo al servicio de la estabilización política y de la reconstrucción institucional.

Existen, no obstante esas enormes dificultades, márgenes de maniobra que permitirían alcanzar resultados positivos, aunque no espectaculares, a partir de los cuales se afianzarían los procesos paralelos del desarrollo sostenido y modernización democrática. Frente a esas metas, que son a mayor abundamiento instrumentales en mantener el orden y la gobernabilidad sociales, los planteamientos puramente económicos o puramente políticos, acaso resultasen insuficientes, cuando no francamente perjudiciales. La condición esencial, irremplazable de partida, consistiría entonces en configurar un pacto consensual de conciliación nacional, que una y galvanice las energías de todos los grupos sociales en torno a la reactivación económica y al perfeccionamiento de un sistema político abierto y plural.

6. Recapitulación conceptual

El arranque de una estrategia de reactivación económica reconocería como solución de principio el logro de un pacto de orden político-económico, que sirviese de plataforma firme de lanzamiento de un conjunto de políticas concertadas macro y microeconómicas de corto, mediano y largo plazos.

Un primer conjunto de acciones estaría asociado a la reconstrucción de las instituciones de apoyo a los mercados: remodelación y normalización del régimen de propiedad; reconstrucción del sistema financiero nacional; reducción compensadora de los riesgos y costos de transacción anormales que limitan la actividad económica, en especial la de formación de capital.

En segundo término, estarían prelación directa o indirectamente relacionadas con la pacificación y los trabajos de reconstrucción de los daños causados por los conflictos bélicos a la infraestructura o a la planta productiva nacional. La reparación de los diversos sistemas de comunicaciones y el empleo de excombatientes tipifican el modelo de programas a desarrollar en este campo.

En tercer lugar, parecen justificarse acciones destinadas a hacer compatibles los objetivos de regulación ordenada del doble proceso de transición (pacificación y reorganización económica en torno al mercado), con los de la estabilización y la reforma económica que se implantan en Centroamérica y América Latina. Se buscaría en esencia reconocer los **trade offs** reales entre metas y, sin renunciar a ninguna de ellas, habría que modular su cumplimiento en el tiempo. Así, por ejemplo, la restricción a las importaciones —con los mecanismos ya mencionados—, con la finalidad de atenuar los agudos desequilibrios externos y lograr avances en la reactivación económica, posiblemente conduzcan a condicionar en alguna medida la lucha antiinflacionaria o la instrumentación de la reforma aperturista de mercados. De manera análoga, la reasignación de las disponibilidades del crédito, acaso aplase en cierto grado la liberalización financiera, pero sería la única vía segura de apoyar la producción y de contribuir a las ampliaciones del mercado de trabajo, consecuentes con el afianzamiento de la paz y de la gobernabilidad social. Lanzar programas agresivos de fomento a exportaciones no tradicionales o dirigidos a la modernización de las capacidades instaladas es posible que acarree alguna interferencia al funcionamiento irrestricto de los mercados, pero hay justificantes en la debilidad de las capas empresariales y de sus recursos, lo cual

bien podría ocasionar costos excesivos en el proceso, a veces destructivo, de ajuste súbito de las empresas a regímenes abiertos de competencia.

Por consiguiente, el dilema central de armonización de políticas no se registra en el interior de la esfera económica ni en el de la esfera política, sino entre ambas. Esto es, entre exigencias de reordenamiento económico que demandan de más ajuste social si se han de satisfacer con prontitud, y exigencias de orden social que en caso de satisfacerse abruptamente podrían inducir otra crisis económica, o bien de no atenderse conducirían a la ingobernabilidad o al conflicto abierto.

Resulta entonces ocioso subrayar que el tratamiento del caso nicaragüense parece sustentarse en combinaciones de estrategias sobre las cuales no se dispone de experiencias decantadas, ni de planteamientos técnicos depurados, tanto en el dominio de la economía, como en el de la ciencia política.

Desde luego, una economía de mercado difícilmente podría desenvolverse con normalidad sin una constelación de instituciones, normas y comportamientos sociales que aseguren su viabilidad; como tampoco en circunstancias de vacío político o de su equivalente, la confrontación paralizante de enfoques y planteamientos extremos. Más allá de la reconstrucción de los daños causados por los enfrentamientos bélicos, Nicaragua encara la tarea de reconstruir simultáneamente sus sistemas económico y político. Hacer abstracción de esas circunstancias especiales, implantar sin mayor rediseño las políticas de reforma económica que prevalecen en América Latina —como ya se constata—, en vez de fortalecer, obstaculiza a la economía nacional de mercado o, en el mejor de los casos, somete a la sociedad a procesos de crónicos ajustes recesivos, devastadores de la necesaria modernización democrática. Por consiguiente, el objetivo central de hacer surgir una economía estable dinámica, competitiva en lo interno y lo internacional, ha de transitar a fortiori por una etapa reconstructiva, donde no caben recetas estandarizadas de política económica. Quiérase o no, los supuestos de la reforma latinoamericana en el sentido de que hay una economía en marcha que sólo debe reorientarse, no se dan en el caso nicaragüense.

No basta, en consecuencia, dejar librado el crecimiento a las fuerzas de mercado. En la actualidad, la debilidad de esas fuerzas sin el apoyo estatal concertado serían insuficientes al propósito de recuperar la capacidad de alcanzar el desarrollo sostenido. Por lo demás, la reconstrucción de la economía de mercado y de los sistemas políticos no podría lograrse súbitamente. Durante largo tiempo los agentes productivos tendrán que trabajar en condiciones menos favorables, con mayores incertidumbres de lo que es normal en otras latitudes, haciendo insoslayable la vinculación orgánica de la sociedad civil con el sector público.

II. EVOLUCION HISTORICA DE LA ECONOMIA 1950-1992

1. El período 1950-1980

En Nicaragua la economía de la posguerra presentó alto dinamismo hasta mediados de los años setenta. El producto interno bruto creció a tasas de 5.3% entre 1950 y 1960; 6.9% entre 1960 y 1970, y 5.1% entre 1970 y 1975 (véase el cuadro 1 y los gráficos que aparecen al final de este capítulo). Fue importante el desarrollo de la agricultura, que presentó incrementos promedios anuales de 3% entre 1950 y 1960, 6.2% en la década de los sesenta y 4.9% en el primer lustro de los setenta. Es aún mayor el dinamismo de la industria manufacturera y el de la construcción, así como el de los servicios básicos (véase el cuadro 3).

En todo ello ejercen un influjo considerable las condiciones alentadoras del sector externo, que propiciaron el aumento de la producción agrícola destinada a los mercados internacionales y también el de la industria manufacturera, que inicialmente recibió el impulso de las empresas agroexportadoras y, en los años sesenta, del proceso de integración de los países centroamericanos. Mediante el libre comercio, el arancel común y la asistencia técnica y financiera de instituciones regionales, el país amplió la capacidad productiva de algunas ramas industriales, como la metalmecánica, la química y la textil, entre otras.

Al incrementarse la producción de estos dos sectores, las exportaciones se expandieron notoriamente. Aumentaron 7.6% entre 1950 y 1960; 10.4% entre 1960 y 1970 y 15.9% de 1970 a 1975 (véase nuevamente el cuadro 1). Los rubros de mayor peso fueron el algodón, el café, la caña de azúcar, la carne, el camarón y la langosta, entre los productos primarios colocados en terceros países, y leche en polvo, plástico, textiles y agroquímicos entre los destinados al Mercado Común Centroamericano (MCCA).

A su vez, el crecimiento de la producción agrícola y manufacturera influyó en el desarrollo de la construcción y de los servicios. El transporte, el comercio y la banca se expandieron, teniendo como principal punto de apoyo el impulso de la economía exportadora. Además, la inversión pública pasó de 1.4% del PIB en 1950 a más de 4% a fines de los años sesenta. El crecimiento orientado hacia el exterior y políticas fiscales balanceadas permitieron asegurar tasas de ahorro interno por encima de 16% a lo largo del período, mantener la inflación al nivel internacional y la tasa de subempleo laboral por abajo de 15%, así como limitar el endeudamiento externo a un máximo razonable de 600 millones de dólares en 1975 (el pago por servicio de la deuda pública externa no representaba más del 5% del valor de las exportaciones de bienes y servicios).

En el desarrollo agroexportador y manufacturero jugó un papel de primera importancia el impulso de varias instituciones gubernamentales. El Banco Nacional de Nicaragua, por medio de programas financieros y de asistencia técnica, posibilitó el desarrollo de la producción de café, y promovió nuevos rubros de exportación: algodón, azúcar y carne. El Instituto de Fomento Nacional participó directamente en inversiones conjuntas con empresarios nacionales y extranjeros y, en esos y otros proyectos, aportó tecnología, financiamiento y asistencia administrativa, haciendo viable la creación de empresas industriales importantes y la formación de capas empresariales y de técnicos.

El modelo desarrollado denotó, sin embargo, alta dependencia de la exportación de productos primarios poco diversificados y la importación de artículos esenciales, como bienes de capital e insumos. En el sector agrícola no se intensificó el proceso de diversificación y se marginó la producción de granos básicos. La industrialización, iniciada con la creación del Mercado Común Centroamericano, impulsó la fabricación de bienes de consumo y de algunos intermedios, pero no alcanzó la madurez para generar polos alternos de desarrollo, compensadores de las fluctuaciones propias de los mercados internacionales de materias primas. ^{9/} Aquí debe recordarse que el desarrollo manufacturero en Nicaragua se inicia más tardíamente que en la mayor parte de los países centroamericanos, y estuvo enfocado primordialmente a integrarse con las actividades agropecuarias. Además, la crisis integracionista que empezó a perfilarse en la década de los setenta se profundizó después con la polarización política de la región y el deterioro de los sectores externos de Centroamérica. El alto grado de apertura de la economía de Nicaragua (el comercio exterior representaba más del 50% del PIB en los años setenta), la tornó especialmente vulnerable a acontecimientos que en buena medida quedaban fuera del control nacional.

En Nicaragua se dio un marcado proceso de concentración del ingreso que llevó a conformar una sociedad desigual. A comienzos de la década de los sesenta se realizaron distintas inversiones de carácter social, como la construcción de viviendas, la ampliación de los servicios de agua potable o alcantarillado, y se estableció el seguro social; con todo, fue insuficiente para corregir la pobreza y atenuar las presiones sociales en ascenso. Aproximadamente un 62% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, el consumo nutricional llegó a ser inferior casi en un tercio a los niveles recomendados internacionalmente. Los índices de salud fueron los más bajos de América Latina; la tasa de analfabetismo, la mayor de los países centroamericanos; y el grueso de las zonas rurales carecía de escuelas y de vivienda. ^{10/}

Al inicio del período, el 68% de los campesinos no contaba con tierras y su concentración alcanzaba cifras dramáticas. Según la encuesta agropecuaria de 1952, el 65% de los campesinos con fincas menores de 7 hectáreas disponía tan sólo del 3.5% de las tierras cultivadas. En el otro extremo, los grandes productores, con el 1% de las fincas, concentraban el 40% de las tierras. Entre 1953 y 1979, se repartieron 7,000 hectáreas que beneficiaron a menos de 4,000 personas, esto es, al 3% del campesinado. El 40% de la población económicamente activa en zonas rurales correspondía a semiproletarios o minifundistas, quienes sobrevivían en condiciones de subsistencia y empleo inestable, migrando en busca de trabajo asalariado durante algunos meses del año. Tierras marginales, mediería, tecnologías rústicas y precios bajos de los granos fueron factores que empobrecieron al campesino y que se hallan en la raíz de la inestabilidad e ingobernabilidad de la sociedad nicaragüense.

A medida que se avanza en la década de los setenta, los equilibrios macroeconómicos se deterioraban, y en forma paralela se reducía el ahorro interno y aumentaba el déficit fiscal. El hecho de no haberse realizado esfuerzos diversificadores de la agricultura ni haberse afianzado polos más

^{9/} Las exportaciones al Mercado Común alcanzaron una cifra récord de 146 millones de dólares en 1978, para caer ininterrumpidamente a 24 millones en 1985.

^{10/} Véase, CEPAL, Centroamérica: Notas sobre la situación de la pobreza y políticas sociales (LC/MEX/L.155), junio de 1991.

amplios de crecimiento en las manufacturas, abrió la puerta a la crisis generada por la caída de los precios internacionales de los principales cultivos de exportación y el incremento de los valores unitarios de las importaciones (más intensos en el caso de los hidrocarburos y los insumos agropecuarios). A lo anterior se añadieron, por un lado, los efectos del terremoto de 1972, el cual acrecentó el endeudamiento externo al requerirse recursos para la reconstrucción de Managua y, por otro, el conflicto civil recrudecido entre 1976 y 1979. ^{11/}

Entre 1975 y 1980 el producto interno bruto cayó 4.2%, el agrícola 4.7%, el de la industria manufacturera 0.9%; es importante también la contracción en el sector de los servicios (véase nuevamente el cuadro 3). En cuanto al sector externo, las exportaciones sólo aumentaron 2% en promedio anual, mientras que las importaciones, 9%. Así, el déficit de la cuenta corriente llegó a 534 millones de dólares en 1980. Las necesidades de ahorro externo para financiar la inversión y mantener el consumo se materializaron en un acrecentamiento de la deuda externa a un ritmo anual superior a 25% entre 1972 y 1980, año en el que totaliza 1,825 millones de dólares (véase de nuevo el cuadro 1).

Si bien esta crisis se dejó sentir en toda América Latina, en Nicaragua se acentuó por los efectos de los enfrentamientos armados que culminaron en el triunfo del movimiento revolucionario en 1979.

2. El período 1980-1990

a) Transformación de la economía y la gestión pública

La llegada al poder del gobierno sandinista trajo como consecuencia profundos cambios estructurales y sociales. En principio, se buscó establecer las bases de un desarrollo más equitativo en el ámbito de una economía mixta de creciente participación estatal. Se nacionalizó la banca, el comercio exterior y las empresas industriales importantes; además, se instrumentaron medidas que cambiaron el régimen de la tenencia de la tierra, y se modificaron varios aspectos de la política agropecuaria, como el crédito y los precios de garantía. Se promulgaron leyes tendientes a organizar a los campesinos y pequeños productores, lográndose la formación de cooperativas de distinta naturaleza. También se adoptaron políticas en materia de salud y educación y otros campos que promovían la equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.

En el tránsito hacia una economía mixta de amplia participación del Estado en la economía, pronto surgieron los obstáculos usuales en tales procesos de cambio. Se produjo de inmediato la fuga de capitales y la emigración de empresarios, técnicos y administradores, lo que limitó la capacidad de gestión empresarial y gubernamental, y las posibilidades reales de instrumentar proyectos de desarrollo.

^{11/} Véase, CEPAL, Informe sobre los daños, op. cit. y Nicaragua, repercusiones económicas, op. cit.

El gobierno creó instituciones públicas para administrar las empresas confiscadas y las de reciente creación —mediante la nacionalización del comercio exterior—, así como parte de la industria y el sector financiero. En la industria se estableció el Área Propiedad del Pueblo (APP), que centralizó la administración de las empresas nacionalizadas. En el sector agrícola se establecieron empresas estatales de carácter productivo y cooperativas de pequeños productores beneficiarios de la reforma agraria, así como empresas de servicios encargadas de los abastecimientos de insumos importados al sector estatal, a las cooperativas y al sector privado. Se fundaron empresas de comercio exterior que monopolizaron las ventas y las compras de los rubros tradicionales de exportación, así como de los granos básicos dentro del país, además de controlar una parte importante de los insumos agrícolas.

En pocos casos esas empresas lograron un grado razonable de eficiencia. La carencia de técnicos y administradores dificultó la gestión productiva, comercial y financiera. De mayor incidencia fueron el bloqueo económico y el conflicto armado, que obstaculizaron el abasto de insumos, las colocaciones de la producción en el exterior y provocaron el abandono de la producción y de los suministros de aperos y bienes de consumo en las zonas rurales. Los dilemas en el manejo macroeconómico y en el financiamiento del conflicto bélico debilitaron la administración de las empresas públicas, retrasaron la regularización de la entrega de tierras y desalentaron a la producción primaria. En particular, surgieron serias deficiencias en el manejo cambiario y crediticio, de los precios y los abastecimientos a los sectores productivos.

Las instituciones gubernamentales encargadas de la comercialización de los productos primarios pagaban a los productores a precios fijos en moneda nacional. Pero las empresas distribuidoras de insumos —en su mayoría importados— no tuvieron la capacidad de abastecer a todos los sectores. En consecuencia, los productores se veían obligados a adquirirlos en el mercado paralelo, a precios sustancialmente más altos. La desventajosa relación entre los precios de venta y de compra determinó pérdidas frecuentes a los productores agrícolas o industriales. La respuesta del sector privado, así como de los pequeños productores y cooperativas beneficiarias de la reforma agraria, consistió en reducir actividades, y en el Área de Propiedad del Pueblo debieron acrecentarse los subsidios, con la consiguiente aceleración del proceso inflacionario y su repercusión desfavorable sobre la eficiencia productiva.

b) El marco macroeconómico

Como ya se indicó, desde 1979 se inició un proceso de cambio radical de la estructura productiva. El Estado se convertiría en el eje del crecimiento, y el control gubernamental del comercio exterior y del sistema financiero permitiría la captación de excedentes que se reinvertirían. El sector público aumentó de tamaño relativo; así, en la formación de capital fijo de 1988, la inversión pública llegó a representar el 23.8% del PIB, mientras que la privada sólo el 4.3% (véase el cuadro 4). En el sector externo, por decisión propia o debido al bloqueo externo, se alteraron los vínculos comerciales con el exterior, mientras que las exportaciones decaían y se concentraban en pocos productos.

Los desequilibrios macroeconómicos, ya notables a fines del período anterior —en 1988 el déficit fiscal fue equivalente al valor total de las exportaciones (18% del PIB) y la brecha comercial,

al doble de éstas—, fueron cubiertos con relativa facilidad mediante préstamos y ayuda externa entre 1980 y 1983. La reanudación del conflicto armado, la interrupción de las vinculaciones comerciales con los Estados Unidos, el debilitamiento de los cuadros técnicos y administrativos de empresas y gobierno, explican la debilidad de las políticas enderezadas a subsanar los problemas macroeconómicos. ^{12/} Después, las erogaciones de defensa asociadas a la intensificación del conflicto bélico resultaron incompatibles con las medidas de desarrollo socioeconómico y precipitaron el cambio de las políticas hacia una prolongada fase de administración de la crisis (de 1983 en adelante). El incremento de la demanda interna (especialmente la pública) no encontró respuesta en la producción ni en las importaciones, que se restringieron al mínimo, sobre todo las de bienes de consumo.

Entre 1984 y 1988 surgieron enormes desajustes macroeconómicos: el déficit del sector público no financiero alcanzó el 21% del producto y se financió con emisión de dinero inorgánico. La espiral inflacionaria se originó en las crecientes limitaciones de la oferta, del gasto público acelerado por la lucha armada y de los desincentivos creados por las políticas cambiaria y de comercialización externa. El alza de precios fue en ascenso y, desde 1985, adquirió las características destructivas de la hiperinflación.

Entre 1980 y 1990, el producto interno bruto se contrajo 1.5% promedio anual presentando cifras negativas, tanto en los sectores productivos como en los de servicios (véase nuevamente el cuadro 3). El valor corriente de las exportaciones disminuyó a razón del 2.3% en promedio anual durante la década. El saldo del comercio de bienes y servicios registró un déficit de 290 millones de dólares en 1990, año en el cual los precios al consumidor se incrementaron 13,500%, mientras que el producto por habitante cayó de un índice de 100 en 1980 a 66 en 1990, con bajas casi generalizadas de la productividad. Los problemas de la producción repercutieron en el empleo. La tasa de subutilización laboral alcanzó la cifra de 45% en 1990 (véase nuevamente el cuadro 1).

En resumen, al finalizar la década de los ochenta, el estado de la macroeconomía era crítico: parálisis económica, insolvencia financiera, desmonetización interna, alto desempleo y agotamiento de los márgenes de maniobra de las políticas gubernamentales.

^{12/} Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 1986, Nicaragua (LC/MEX/L.54), septiembre de 1987.

3. El período 1990-1992

a) La triple transición hacia una economía de paz y de mercado con democracia

Después de 10 años de guerra, se organizaron elecciones en las cuales triunfó la Unión Nacional Opositora, cuyo éxito inicial puede asociarse al deseo generalizado de la población de pacificar el país. Pronto se inicia la reincorporación de la población beligerante a las actividades productivas, proceso que, sin embargo, no ha procedido con la rapidez deseable, ni ha podido finiquitarse todavía. De otro lado, la estrategia económica se encaminó hacia la estabilización y al logro de reformas semejantes a la de los países de América Latina.

La situación de Nicaragua se diferencia de la de los países de Europa del Este ya que se trata de una doble transición: de una economía de guerra a una de paz, y de una economía semisocializada a una economía liberal. Además, el grado de polarización sociopolítica es todavía grande, y limitativo de la capacidad gubernamental de atender las verdaderas necesidades de la sociedad civil. La fragilidad del tejido económico, social y político explica en gran parte las dificultades encontradas en la ejecución del programa de ajuste y reactivación económica.

b) Objetivos principales del programa de Gobierno

El Gobierno electo en febrero de 1990 sustenta un programa económico de concepción radicalmente diferente al régimen anterior. Se promueve al sector privado como motor de la economía y se restringen las funciones estatales a un papel subsidiario (Estado facilitador). Sin embargo, el programa tiene algunos puntos de continuidad con el modelo anterior, sobre todo en el fomento de la pequeña empresa rural y urbana y la consolidación de la reforma agraria.

La firma de los acuerdos de transición (marzo de 1990), permitió conformar un esquema de cogobierno entre el Ejecutivo, el Ejército y la Asamblea Nacional, en busca de la estabilización política y social del país para emprender el programa de ajuste económico sobre mejores bases. Los primeros componentes del programa estuvieron referidos a la revisión de las confiscaciones y expropiaciones, y a la reorganización de las empresas públicas. A comienzos de mayo de 1990 se creó un mecanismo de revisión de las expropiaciones para indemnizar a las personas injustamente privadas de sus propiedades (devolución de activos o emisión de un título valor canjeable por otros activos estatales en proceso de privatización). Al mismo tiempo, se creó la Junta General de Corporaciones Nacionales del Área Pública (CORNAP), con objeto de privatizar cerca de 275 empresas públicas, previa reorganización y saneamiento financiero. Además, a fin de fomentar a la pequeña empresa, se estableció un programa de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas privatizadas.

Con esas acciones, el nuevo gobierno nicaragüense inició un triple intento de remodelación de la economía. De un lado, busca recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos; de otro lado, impulsar la reforma económica de orden estructural (privatización, desregulación, apertura externa, creación de las instituciones del mercado); y en otra vertiente procede a la reconversión económica a tiempos de paz (incorporación de los excombatientes a la vida civil, reducción del ejército). Se

comprende, por tanto, lo ambicioso de las metas y las dificultades intrínsecas para llevar adelante un programa de esa complejidad. Las metas reconocen entre sí múltiples **trade offs**; y a mayor abundamiento, el sistema político apenas contaba con experiencias limitadas para dirigir al país simultáneamente hacia la modernización democrática.

En segundo término, a escala macroeconómica se concentraron los esfuerzos en combatir la hiperinflación y recuperar la estabilidad de precios, a la par que se desregulaba el sistema financiero. Al respecto se emprendieron reformas dirigidas a impedir la validación de las presiones inflacionarias futuras; se descentralizó el manejo de los cuatro bancos estatales, se autorizó la actividad de casas de cambio y se expidieron licencias de funcionamiento a instituciones financieras privadas.

El plan de estabilización se articuló con el saneamiento en profundidad de las finanzas públicas, con la creación de una nueva moneda, el córdoba oro, y con la fijación de topes al crédito del sector público. Paralelamente a la introducción del córdoba oro, convertible a una paridad de 1 a 1 con el dólar, se pretendía reducir el déficit gubernamental a 5% del PIB. Además, se instrumentó una reforma tributaria, con el objetivo de simplificar el régimen tributario y ampliar la base fiscal. Sus elementos sobresalientes fueron: el pago de todos los impuestos en córdobas oro, la reducción de las exenciones, la rebaja de la tasa máxima del impuesto de la renta al 32%, el establecimiento de un nuevo sistema de retención del impuesto a la renta, la generalización del impuesto a las ventas (IVA) al 15%, la simplificación del régimen aduanero y la reducción del arancel máximo al 20%.

En reconocimiento de esos **trade offs** entre metas económicas, sociales y políticas, el gobierno emprendió algunas acciones especiales. En particular, a fin de atenuar los efectos negativos del ajuste con la equidad y la justicia social, se creó el Fondo de Inversión Social de Emergencia y se impulsaron programas de reasentamiento de excombatientes y refugiados.

Adviértase cómo esas tensiones entre metas ocasionaron algunos problemas y en otros casos obligaron a poner en marcha programas. Tómese un caso concreto: en pro de la liberalización financiera, no se establecieron topes de cartera en la asignación de crédito al sector privado, lo que ocasionó una fuerte expansión monetaria. A esa expansión se agregaron los efectos del reajuste de tarifas públicas y del precio de los combustibles, que reavivaron las tensiones inflacionarias. Las condiciones políticas tampoco fueron propicias para ejecutar planes drásticos de reducción del gasto fiscal; las huelgas que se suscitaron pusieron en tela de juicio la credibilidad del plan de ajuste, sobre todo cuando las devaluaciones fueron transmitidas a los precios y el déficit del gobierno central se elevó al 20% del producto.

Por eso, en marzo de 1991 tuvo que ensayarse un nuevo plan de estabilización, contrastante con el anterior en dos puntos esenciales. Primero, se adoptaron medidas heterodoxas para romper la indización de los precios y manejar las expectativas inflacionarias. En particular, una vez ajustados los precios relativos internos durante los primeros meses del año, se congelaron las tarifas de las empresas públicas, de los hidrocarburos y de los productos de mayor peso recaudatorio (tabaco y bebidas), y se controlaron los precios de ocho productos básicos, mientras se aseguraba con importaciones el abastecimiento del mercado. El control se extendió a los salarios públicos, después de un ajuste nominal del 200%. La segunda característica consistió en asegurar respaldo suficiente de recursos externos para validar una devaluación de 400% del córdoba oro y, luego, utilizar el tipo

de cambio como ancla nominal de los precios. El apoyo de la comunidad internacional se concretó con la firma de un acuerdo *stand-by* con el FMI —que cubre el período de pago septiembre de 1991 a marzo de 1993— y con la renegociación de la deuda bilateral en el Club de París.

Además de las medidas de corte heterodoxo, las autoridades persistieron en el programa de ajuste fiscal, recortando progresivamente el número de empleados públicos civiles y militares así como el gasto de consumo. Gracias a esas medidas y al repunte de las donaciones externas, se pudo reactivar el programa de inversión pública y lograr, por primera vez en más de un decenio, un superávit fiscal (después de donaciones). Asimismo se instrumentaron varias medidas financieras complementarias. En particular, se fijaron tasas de interés reales positivas y se estableció el concepto de mantenimiento de valor de los depósitos a plazo, como protección e incentivo al ahorro nacional.

c) Los logros y desafíos de la reconversión

Los resultados de la política de estabilización y ajuste se manifestaron a partir del segundo semestre de 1991 y 1992 con una enorme desaceleración de la inflación, que pasó de casi 13,500% en diciembre de 1990 a 865% en 1991 y a menos de 4% en 1992 (véase nuevamente el cuadro 1). La prioridad otorgada a la disciplina fiscal y crediticia, y al mantenimiento del tipo de cambio nominal a la paridad fijada de 5 córdobas por dólar contribuyeron centralmente a ese resultado. El déficit antes de donaciones del sector público no financiero se redujo a la mitad —17.2% del producto en 1990 al 8.1% en 1991 y 6.1% en 1993—, pese al repunte en los gastos de capital del 2.1% al 10.7% del producto entre 1990 y 1992 (véase el cuadro 5).

La reducción del déficit fiscal y la política monetaria altamente restrictiva del financiamiento bancario al sector público, liberaron fondos en beneficio del sector privado. Sin embargo, las corrientes financieras no se orientaron hacia las actividades directamente productivas, sino que se destinaron a apoyar a los sectores comerciales y de servicio, donde los plazos de recuperación son más cortos y menos riesgosos. La escasez de fondos al sector productivo se añadió a las fallas de mercado y a las trabas estructurales heredadas de la crisis anterior, impidiendo la reactivación económica prevista en el programa de ajuste. En todo este entorno, entre 1990 y 1992 el producto interno bruto apenas se incrementó 0.1% en promedio anual, al reducirse 0.5% el de la agricultura y 1.8% la construcción. Estos fueron compensados por los aumentos de 0.5% en el sector manufacturero y de 2.7% en los servicios básicos (véase nuevamente el cuadro 3).

A pesar de la atonía de la oferta interna, la demanda doméstica creció un promedio anual de 2.2%, apoyándose en el repunte del consumo privado (15.6%) y en la validación de importantes flujos de capital externo. Entre 1991 y 1992 ingresó una ayuda superior al promedio recibido entre 1980 y 1989 (1,223 millones de dólares frente a 1,150 millones). Como consecuencia del rápido proceso de apertura de la economía y de la asignación sesgada del crédito, las importaciones de bienes aumentaron espectacularmente al elevarse 21% en 1991 y 9% en 1992, mientras que las exportaciones se reducían 18% durante esos mismos años, ante el doble efecto de la baja del volumen colocado y de la evolución adversa de los precios (véase el cuadro 6).

La generosa cooperación externa se ha recirculado al exterior sin producir mayores efectos internos: el déficit en cuenta corriente, excluyendo donaciones, pasó de 507 millones de dólares en 1990 a 834 millones en 1991 y a 1,071 millones en 1992 (véase de nuevo el cuadro 1). La acumulación de los desequilibrios externos desembocó en una devaluación del 20% de la moneda en enero de 1993, y la adopción de un sistema de **crawling-peg** del tipo de cambio de 5% anual. A principios de año, sin embargo, la situación de liquidez externa del país se agravó sustancialmente por la suspensión del acuerdo **stand-by** con el FMI y la retención de la ayuda estadounidense.

Así, en ausencia de una verdadera reactivación productiva, los indicadores del empleo se deterioraron y la tasa de subempleo global subió del 45% al 49% entre 1990 y 1992, en un ámbito general de expansión de la pobreza y de falta de servicios sociales básicos.

Gráfico 1

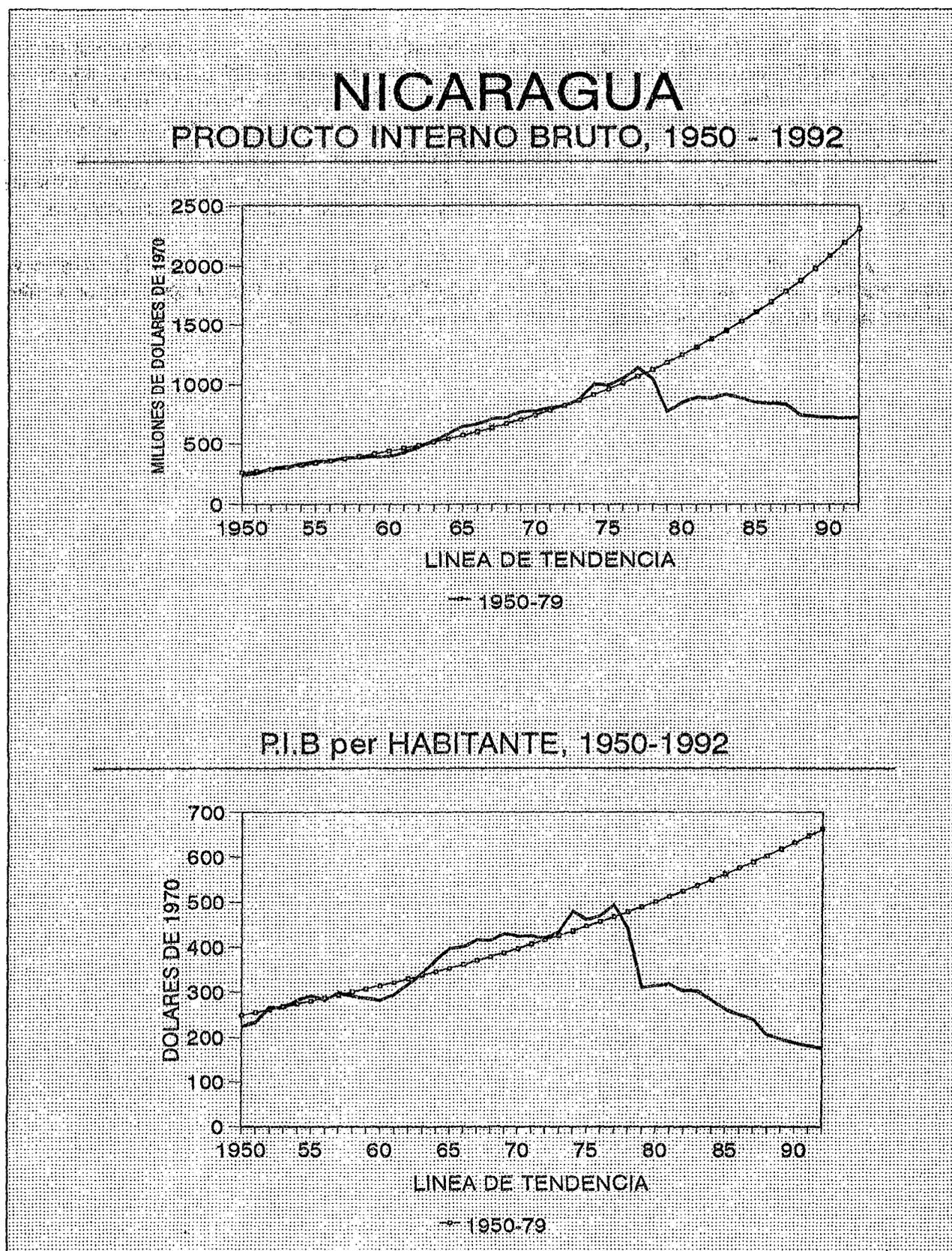
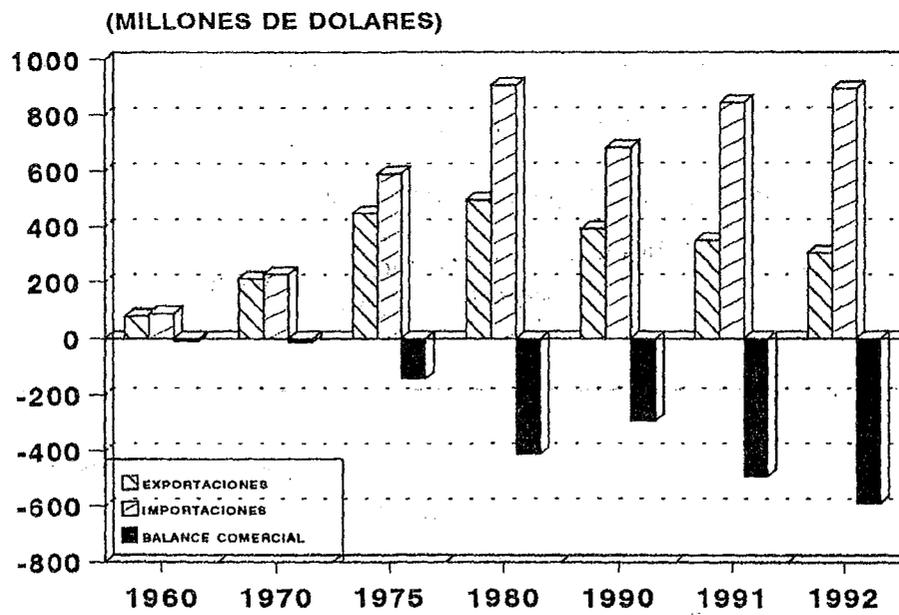


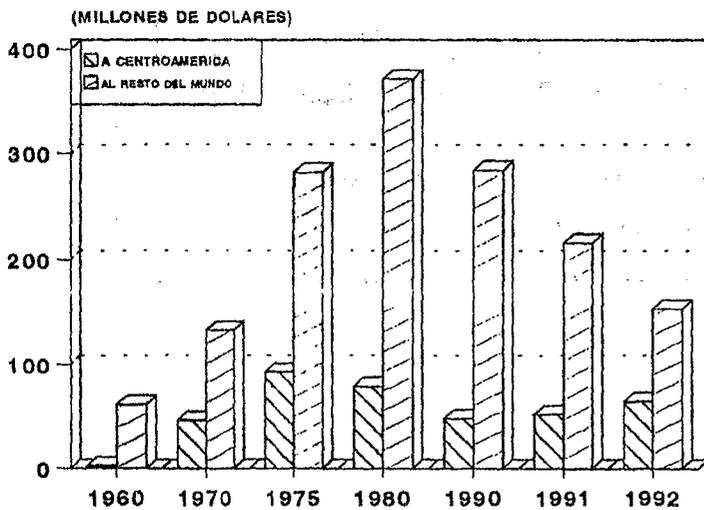
Gráfico 2

NICARAGUA, COMERCIO EXTERIOR

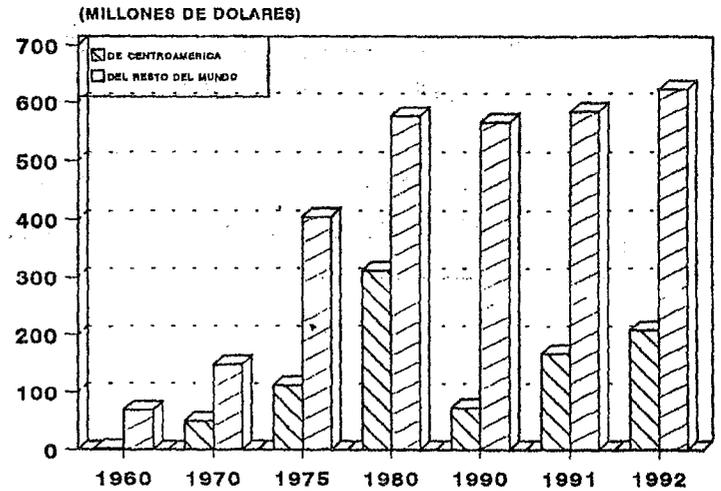
BALANCE COMERCIAL



EXPORTACIONES DE BIENES, FOB



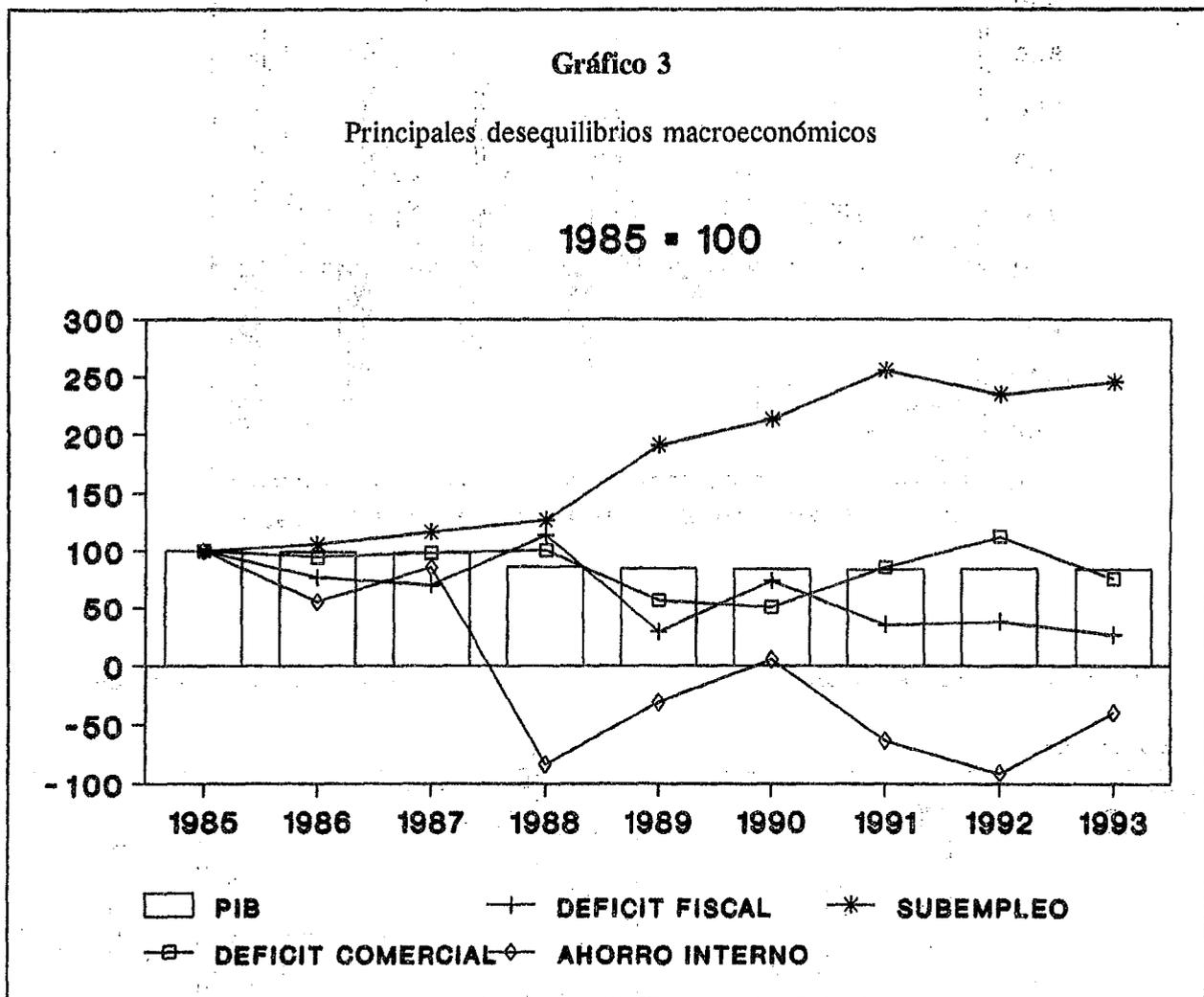
IMPORTACIONES DE BIENES, CIF



III. EL MARCO MACROECONOMICO DE LA REACTIVACION

El análisis del marco macroeconómico de los últimos años revela que, junto a logros notables en el combate a la hiperinflación, persisten cuatro brechas muy interrelacionadas: la insuficiencia del ahorro interno, el desequilibrio de las cuentas externas, el déficit fiscal y el desempleo.

La evolución de esas brechas, durante los distintos programas de estabilización y ajuste emprendidos en el país desde 1985, ha sido muy diversa; en ese sentido, destacan los adelantos logrados hasta ahora en cuanto al ajuste fiscal.



Debido a la conjunción de factores coyunturales y estructurales, la producción nacional no ha podido aprovechar el aumento de la demanda efectiva materializado con el repunte de la ayuda externa al término del conflicto bélico en 1990 (véase el capítulo IV); por lo contrario, se verificó un marcado deterioro del déficit comercial. Más preocupante todavía, desde una perspectiva de mediano plazo, es la atonía paralela de la inversión privada que acompaña la debilidad de la tasa interna de ahorro, y el aumento de la dependencia externa. En síntesis, en el corto plazo, la ampliación de la brecha externa y del desempleo es función parcial del ajuste fiscal, de la apertura externa y paradójicamente también de los mayores flujos de ayuda externa.

Ese hecho no es de sorprender, merced a la estructura particular de la economía nicaragüense y la naturaleza del programa de estabilización y ajuste estructural ya señalados. En particular, la economía formal contiene un fuerte componente estatal, tanto del Gobierno Central —cuyos gastos representaron casi el 60% del PIB en 1984—, como del resto del sector público. Así, el ajuste fiscal del lado de los gastos —que se instrumentó desde 1991— tuvo un impacto directo en la producción nacional de bienes y servicios, y principalmente en los indicadores de ocupación, dado que los empleados expulsados del sector público se reubicaron por lo general en el sector informal. ^{13/} La tasa de desempleo total aumentó también en función de la incorporación al mercado de trabajo de los numerosos contingentes de excombatientes.

Varios indicadores de naturaleza económica, política y social convergen en señalar que el ajuste fiscal, especialmente por lo que corresponde al Gobierno Central, ha llegado a sus límites. Los gastos de defensa y seguridad, que representaban el 40% del presupuesto en 1990, han bajado a 14% mientras que la carga del servicio de los intereses de la deuda subieron de cero a 13%. (Véanse los cuadros 16 y 17.) Los servicios sociales e infraestructura recibieron cierta prioridad dentro del gasto público. Mantener esa prioridad de inversión física y humana es imprescindible para el futuro de la economía. Por otro lado, a corto plazo el margen de maniobra de la recaudación fiscal es mínimo, dado los altos niveles de tributación en relación con otros países de la región. Tampoco sería deseable profundizar este ajuste, a la luz de las experiencias de otras economías en transición. En particular, la singularidad del caso nicaragüense hace cuestionable la necesidad de cerrar demasiado rápidamente la brecha fiscal, tanto desde perspectivas estrictamente de eficiencia macroeconómica ^{14/} como de estabilidad política. ^{15/}

^{13/} El impacto procíclico negativo de los esfuerzos de austeridad fiscal dificultaron aún más a las autoridades cumplir las obligaciones contraídas con las instituciones financieras internacionales; cada paso en esa dirección reducía el producto, alejando un poco la meta inicial y obligando por eso a sobreajustar.

^{14/} V. Tanzi, (1993) Fiscal Policy and the Economic Restructuring of Economies in Transition, IMF Working Paper WP/93/22: "Containing the budget deficit will not necessarily make more resources available to the private sector and may even slow down the structural reform necessary to make the transition successful."

^{15/} J. Kornai (1993), The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System, KYKLOS, vol. 46, 315-336; "The final lesson is that forceful steps taken towards financial discipline entail a risk. ... If it comes to a conflict between efficiency and the cause of democracy, I am sure that defense of the institutions of democracy is the supreme task."

Sin mencionar importantes factores extraeconómicos directamente asociados a la doble transición de una economía de guerra a una economía de paz y de cambio radical de modelo económico, ^{16/} otras variables macroeconómicas intervinieron también en la determinación de los principales resultados; las más destacadas fueron el ritmo de la apertura externa, el alza del salario real y la caída del tipo de cambio real. Tampoco se debe descartar los *trade offs*, no siempre positivos, entre el programa de estabilización, los objetivos de la reforma estructural y los de la pacificación.

Finalmente, a mediano plazo el éxito o el fracaso de los esfuerzos del país por alcanzar el crecimiento sostenido y su mejor inserción en los mercados internacionales, depende de la respuesta de los sectores productivos y sociales a las nuevas condiciones económicas creadas por el doble esfuerzo de la estabilización y del ajuste. Parte de la respuesta está sujeta a la reactivación del empleo y de la inversión privada —nacional y externa— y a la capacidad del sector financiero de movilizar el ahorro interno y canalizarlo hacia el financiamiento de los sectores productivos.

Aquí se plantea nítidamente el nudo gordiano de la interrelación entre los factores políticos y económicos. La reactivación económica facilitaría incuestionablemente la celebración de acuerdos sociales, sustentados en la legitimidad revalidada del gobierno, medida en términos de su capacidad de resolver problemas y conducir estrategias exitosas. Del mismo modo, sería incontrovertible la contribución que podría hacer la culminación de acuerdos políticos consensuales, al despejar los riesgos e incertidumbre que traban el desenvolvimiento normal de las inversiones y los negocios. Romper el círculo vicioso entraña llegar a un acuerdo simultáneo que cubra ambos extremos del problema entre sociedad civil, gobierno y partidos políticos.

Aunque en el largo plazo, la distinción entre las cuatro brechas pierde validez analítica, es probable, sin embargo, que en el intento de alcanzar los grandes equilibrios macroeconómicos, no se pueda hacer mucho del lado de la reducción del consumo público y privado. Entonces, la única salida viable está centrada en el aumento del producto. En última instancia, a la doble transición estructural de la economía nicaragüense, se añaden los retos de la transición de una fase de hiperinflación y recesión, a una fase de estabilidad con crecimiento. Completar este último tránsito supone vencer la aversión de los inversionistas al riesgo, hacerlos salir de su estrategia de *wait and see* para sumarse a la reactivación productiva. En el estado actual de la economía, eso no se puede lograr sin un respaldo fuerte y persistente de la comunidad internacional —para atenuar la percepción del riesgo cambiario— y sin altas tasas de interés para atraer y retener en el país el capital privado. Obviamente, eso se traduce en sesgos distributivos desfavorables a los sectores laborales, planteando otro *trade off* entre empleo y salarios reales.

La existencia de tres monedas —el córdoba normal, utilizado para fines de transacción, el córdoba con mantenimiento de valor, indizado con el tipo de cambio para operaciones de ahorro y préstamo, y el dólar— en el panorama monetario y financiero del país es incuestionablemente una

^{16/} El persistente estado de inseguridad de las personas y de los bienes, o la obsolescencia técnica y económica del capital productivo instalado.

ilustración de lo anterior. La indización de los depósitos es una herencia del período de hiperinflación y fue condición necesaria para influir en el comportamiento de ahorro financiero (anteriormente los ahorros se convertían en bienes durables como mecanismo de protección del poder adquisitivo). Sin embargo, eso trae como consecuencia que los inversionistas tengan que contraer deuda, también indizada con el tipo de cambio, agregando entonces al riesgo normal de toda acción empresarial otro, de naturaleza cambiaria. Este sobre costo puede limitar el endeudamiento de largo plazo e inhibir la inversión, especialmente en las pequeñas y medianas empresas no directamente vinculadas a la exportación. También dificulta el manejo de la política monetaria y financiera a nivel del Banco Central. 17/ En los bancos comerciales, el efecto redundaba en restricción de los créditos por la necesidad de equiparar los activos y pasivos denominados en esas tres monedas.

Aun contando con políticas macroeconómicas favorables al ahorro y la inversión y al perfeccionamiento del Estado de Derecho, habría que llenar algunos requisitos complementarios. La rentabilidad de una inversión individualizada depende del comportamiento de los demás inversores: es alta si se conjuga a otras iniciativas productivas, baja o negativa si queda aislada. 18/ Queda planteada, así, la necesidad de definir quién tendrá la responsabilidad de iniciar, impulsar y coordinar el esfuerzo de formación de capital. Claramente, aquí el impulso del sector público tendría que venir aparejado al apoyo decidido a escala macro y microeconómica, de la comunidad empresarial nicaragüense, los trabajadores y el gobierno.

17/ Aunque presenta la gran ventaja de limitar la especulación, al eliminar los beneficios de un arbitraje en contra de la moneda nacional, realizando operaciones simultáneas de endeudamiento interno en córdoba y de inversión externa en divisas.

18/ Es ilustrativa la política conservadora de los bancos comerciales en cuanto a su estrategia de préstamos, creando escasez de crédito a los sectores productivos. En otras palabras, dada la debilidad de los mercados en la fase presente del desarrollo económico de Nicaragua, existe una situación de equilibrios dinámicos múltiples, lo que plantea el problema de transitar de un equilibrio "bajo" (estancamiento) a uno "alto" (crecimiento), en términos de la utilización de los recursos disponibles.

NICARAGUA: INDICADORES DEL PROCESO DE AJUSTE

(Porcentajes)

	1980	1985	1988	1990	1992
Inflación a/	35.3	219.5	14,315.8	7,485.2	23.7
Déficit fiscal b/	8.9	22.3	25.6	19.8	7.4
Deuda externa c/	422	1,435	2,645	2,708	3,493
Tasas de interés					
Activas d/	17.0	21.3	480.0	17.0	20.3
Pasivas e/	12.5	14.3	950.0	12.3	12.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Promedio anual.

b/ Gobierno Central, en relación al PIB.

c/ Pública, en relación a las exportaciones totales.

d/ Promedio operaciones a corto plazo.

e/ Promedio operaciones a plazo fijo.

1. El balance oferta demanda global y las brechas de ahorro interno privado y público

Nicaragua tiene más de un decenio de padecer fuertes desequilibrios, producto acumulativo de la combinación de *shocks* externos e internos y de los estilos de manejo de la política macroeconómica. Desde la segunda mitad de los años setenta se registra contracción del consumo privado, mientras que el gasto público crece (particularmente entre 1981 y 1986) para luego disminuir en términos reales. De hecho, en este período, se produce: 1) una caída del ahorro interno, que se torna estructuralmente negativo a partir de fines de los setenta; y 2) un cambio en la composición entre el ahorro privado y público.

EVOLUCION DEL EQUILIBRIO OFERTA-DEMANDA GLOBAL 1971-1990

(Porcentaje de variación anual) a/

	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990
Crecimiento promedio de la oferta	6.3	-2.0	0.9	-4.5
PIB	3.8	-2.3	0.5	-2.8
Importaciones de bienes y servicios	2.6	0.3	0.4	-1.7
Contribución de la demanda				
Demanda interna	4.9	0.4	1.7	-4.6
Inversión bruta interna	0.7	1.0	0.9	-0.7
Inversión bruta fija	1.0	-0.2	0.8	-1.0
Pública	0.4	0.8	0.6	-0.4
Privada	0.6	-0.1	0.3	-0.6
Variación de existencias	-0.3	1.2	0.1	0.3
Consumo total	4.2	-0.6	0.8	-3.9
Gobierno general	0.3	1.4	3.4	-1.8
Privado	3.8	-1.9	-2.6	-2.2
Exportaciones de bienes y servicios	1.4	-2.5	-0.8	0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de cifras en dólares constantes de 1980.

a/ Tasa de crecimiento ponderada por el peso relativo del rubro correspondiente en el total de oferta-demanda.

En 1988, el desahorro interno corriente (-13.5% del producto) reflejaba una situación en que los excedentes del sector privado (6% del producto) no compensaban el desahorro del gobierno (-19.5 del producto). Considerando que una porción de ahorro privado fuese resultado de la represión del consumo (y no excedentes reales del ingreso disponible), era de esperar que, al normalizarse los abastos a partir de 1990 del lado de las importaciones, la demanda privada de bienes de consumo registrara una importante recuperación. De hecho, con la regularización de las relaciones con los organismos financieros multilaterales y con los miembros del Club de París, se aflojaron las restricciones de liquidez externa que se tradujeron en un notable repunte de las importaciones de bienes y servicios. Varios factores influyeron en ese fenómeno, pero lo que interesa para el análisis de los equilibrios globales se puede reducir a dos constataciones: por un

lado, el aumento de la demanda efectiva no fue eficaz para elevar la producción nacional y se tradujo casi íntegramente en mayores compras externas; ^{19/} y por otro, la composición de la demanda interna favoreció al consumo, lo que, unido al estancamiento del producto, deterioró el ahorro privado hasta hacerlo profundamente negativo (16% del producto en 1992).

La mayor brecha de ahorro privado fue parcialmente compensada por un notable mejoramiento de las cuentas del sector público (entre 1988 y 1993 pasó de un desahorro del 20% a un pequeño saldo positivo de 3.5% del producto). El movimiento inverso del ahorro privado y del público dejó, sin embargo, un saldo negativo global que todavía representaba el 6% del producto en 1993.

Se trata de una situación insostenible por dos razones principales, estrechamente entrelazadas. La primera tiene que ver con el sesgo consumidor de la economía nicaragüense y el estancamiento correlativo de la inversión, limitativo de la capacidad de recuperación productiva de la economía. La segunda (que se trata en detalle en la sección siguiente), es la dependencia creciente con respecto a la ayuda y los préstamos externos, que aumenta la probabilidad de ejecutar tarde o temprano un ajuste muy intenso y doloroso a fin de restablecer los equilibrios externos.

ORIGEN Y COMPOSICIÓN DEL AHORRO TOTAL, 1975-1993

(Porcentaje del PIB corriente)

	1975	1980	1988	1990	1991	1992 ^{a/}	1993 ^{b/}
Ahorro interno	12.5	-2.3	-13.5	0.8	-10.1	-14.6	-6.4
Gobierno Central	2.0	0.8	-19.5	-15.8	-2.9	1.3	3.5
Otros sectores	10.5	-3.1	6.0	16.6	-7.2	-15.9	-9.9
Ahorro externo ^{c/}	8.9	19.0	40.3	18.5	29.8	32.1	23.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central.

a/ Preliminar.

b/ Estimaciones.

c/ Incluye ingresos netos del exterior.

^{19/} Lo que permitió, frente al estancamiento de la oferta interna y el aumento del salario del sector formal, moderar considerablemente las presiones inflacionarias.

2. El sector externo y la brecha de financiamiento

a) El comercio de bienes

Uno de los aspectos más importantes de las estrategias nicaragüenses de cambio estructural, se refiere a la política comercial y a dar prelación al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, se intenta orientar el aparato productivo hacia las exportaciones, en un marco de creciente neutralidad en los incentivos y en las medidas de protección del Estado.

A fin de forzar la reconversión industrial y estimular las exportaciones, en el transcurso de 1991, el gobierno desató un proceso de liberalización comercial articulado sobre los siguientes elementos principales:

- i) Desgravación arancelaria;
- ii) Reducción al 15% del impuesto selectivo de consumo, que se cobra a la mayoría de las importaciones, más el 3% de timbre fiscal;
- iii) Eliminación de las restricciones no arancelarias (excepto en unos cuantos productos, introduciendo "bandas de precios" en algunos de ellos; v.g., productos alimenticios básicos);
- iv) La promulgación de leyes de promoción de exportaciones y de inversiones, así como sobre desregulación y simplificación administrativa.

En general, las medidas de políticas adoptadas a partir de 1990 buscaron abrir la economía a la competencia de las importaciones, con los propósitos de: i) presionar a las empresas nacionales a mejorar la productividad y la asignación de los recursos; ii) reajustar los precios relativos, en favor de los transables, y iii) revelar mercados internos latentes no cubiertos anteriormente por la oferta doméstica. ^{20/}

La reforma requiere de ajustes dolorosos, ya que se trata de un proceso de "destrucción creativa" en el que ciertas actividades tienden a desaparecer o reconvertirse a fin de dar paso al crecimiento de otras con mejores perspectivas (i.e. el éxito del proceso está condicionado a que el valor agregado originado en la creación de nuevas actividades supere al de las que no lograron adaptarse). Los costos de la transición —quiebras, desempleo y desequilibrios comerciales—,

^{20/} Después de varios años de economía de guerra, existe una demanda potencial que sólo puede satisfacerse --en una situación de restricción de la oferta-- con productos importados. Una vez identificados los nuevos mercados, los productores nacionales tienen la oportunidad de sustituir poco a poco estas importaciones.

generalmente altos, alcanzan niveles excepcionales en el caso de Nicaragua debido al impacto de distintas causas desfavorables:

Primero, los bajos niveles de bienestar existentes al inicio del proceso de reconversión (gran parte de la población no satisfacía sus necesidades básicas), determina que los costos sociales del ajuste —aún siendo temporales— impliquen grandes sacrificios por esa alta proporción de los ciudadanos que sufre de pobreza extrema.

Segundo, el cambio fue muy rápido, se pasó de una situación en que las importaciones estaban sujetas a controles cuantitativos y a impuestos de más de 200% en muchos casos, a otra en que los derechos medios bajaron de 43.2% en 1990 al 15.2% en 1991 y al 14.8% en 1992. ^{21/}

Tercero, una apertura ejecutada en situación de sobrevaluación de la moneda y de años de consumo reprimido, es natural que desemboque en acrecentamiento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo.

Cuarto, como se mencionó, existen barreras institucionales, psicológicas y económicas que impiden a los mercados privados de capital (apenas creados) asumir un papel líder en el proceso de reactivación de la inversión productiva.

Como consecuencia, muchas empresas relativamente eficientes o sin mayores desventajas comparativas se vieron empujadas a una quiebra virtual, al no disponer de tiempo o de apoyos para ajustarse o reconvertirse. Las consecuencias macroeconómicas se tradujeron en un deterioro brutal del ahorro interno —pese a los ajustes fiscales— y la ampliación de la brecha comercial a niveles insostenibles, sobre todo en condiciones de estancamiento de las exportaciones y de deterioro de los términos del intercambio.

Las exportaciones del país se concentran en unos pocos productos primarios, en particular el café y la carne bovina, que representan casi el 40% del total. ^{22/} El precio unitario promedio de los bienes tradicionales ha conocido en los últimos cuatro años una caída anual del 4%; además en 1991 y 1992 los volúmenes colocados en los mercados internacionales bajaron 15% por año, sea

^{21/} La protección nominal subió de nuevo en 1993 para alcanzar 18.3%. A junio, la protección nominal sectorial máxima era de 85% para el tabaco y la mínima de 11.3% para las industrias metálica básica y la química. El vestuario y calzado se situaban respectivamente en 20.3% y 21.0%; la madera y los muebles en 19.8% y 30.0%; los productos agropecuarios en 21.1% y los alimentos y bebidas en 25.8% y 59.3%.

^{22/} Los productos industriales representan una pequeña parte de las exportaciones: las ventas de bienes primarios, alimenticios y materiales crudos no comestibles suman más del 85%. Para el 15% restante, el mercado centroamericano representa la principal fuente de demanda: 86% de los productos químicos, 88% de los artículos manufacturados, 52% de las ventas de maquinaria y otros artículos manufacturados diversos.

por la debilidad de la demanda o por dificultades de la producción doméstica. En consecuencia, el valor total de las exportaciones de bienes y servicios del país cayó de 392 millones de dólares a poco más de 300 millones entre 1990 y 1992 (véanse los cuadros 6 y 9). Las previsiones de 1993 muestran una ligera recuperación (364 millones) gracias en parte a nuevas exportaciones de oro y al dinamismo de los sectores de la pesca y de la ganadería.

b) La brecha de financiamiento externo

Al efecto desestabilizador de la brecha comercial, se agrega el servicio de la deuda externa, una de las más altas en el mundo, proporcionalmente considerada. La negociación con los organismos financieros multilaterales y bilaterales, si bien aseguró el re acceso a fuentes importantes de financiamiento, puso al país frente a nuevas obligaciones en cuanto a servir la deuda acumulada que antes no se cubría. 23/

Las necesidades de crédito externo (una vez tomados en cuenta los movimientos de las reservas), necesarios para financiar la actividad económica, casi se han duplicado entre 1990 y 1992 hasta representar la enorme cifra del 37% del producto. Excluyendo las entradas de capital privado y los cambios en las reservas internacionales, los requerimientos de divisas resultan ser todavía más altos (41% del producto interno). Pese al aumento efectivo de servicio de la deuda, en 1993 se esperaba un ligero alivio del desequilibrio externo por la reducción del déficit comercial de 586 millones de dólares a 449 millones. Sin embargo, las necesidades brutas de divisas seguirán representando el 35% del producto, y por lo tanto, se estima en más de 80 millones de dólares la caída de reservas internacionales.

En los últimos años, la ayuda externa aseguró el financiamiento de esa brecha. En conjunto, y utilizando los préstamos de desembolso rápido de los organismos internacionales, las disponibilidades líquidas permitieron aliviar la presión sobre la demanda de divisas y sostener el tipo de cambio nominal. Con todo, la vulnerabilidad de la economía nicaragüense quedó de manifiesto en 1992, cuando se precipitó una crisis cambiaria que desembocó en una devaluación de 20% (en enero de 1993) y multiplicó los factores de incertidumbre durante buena parte del año en curso (véase el cuadro 13). 24/

23/ La información registrada en los balances de pagos del país proporciona una visión distorsionada de los flujos financieros reales, dado que se registran los montos de servicio --interés y principal-- devengados y no los efectivamente pagados. La diferencia es muy grande, lo que dificulta el análisis de los flujos efectivos de divisas. El cuadro 10 reorganiza el balance de pagos según las fuentes y los usos efectivos de divisas para determinar la posición real de liquidez externa del país.

24/ Sin duda, factor importante fue la sobrevaluación del córdoba; coyunturalmente influyó también la suspensión temporal de la ayuda de los Estados Unidos.

Todavía persisten dudas sobre la voluntad de la comunidad internacional para sostener los niveles de ayuda a Nicaragua. Ya se han despejado algunos escollos que detenían las contribuciones de los Estados Unidos, pero surgen otros sobre el mantenimiento futuro de esa ayuda, ya sea en su composición o en su nivel. A fines de 1993 comenzaron gestiones con el FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para firmar sendos acuerdos clave que se traducirían en flujos de 200 a 300 millones de dólares a desembolsar en los próximos tres años.

También es de notar el cambio en la composición de la cooperación externa, con una marcada disminución del componente líquido y un aumento de los recursos atados a proyectos específicos o comprometidos en el pago a factores. Este cambio tiene una enorme importancia en la política macroeconómica, en especial en la estrategia de estabilización. El anclaje del tipo de cambio nominal frente a una situación de fuertes déficit comerciales y bajas reservas sólo es asequible contando con acceso a fondos líquidos de significación. En 1993, apenas 34% de los flujos de financiamiento externo correspondió a recursos líquidos, restando grados de libertad al manejo de la política cambiaria. (Véase el cuadro 11.) ^{25/}

Existen posibilidades de acrecentar los aportes foráneos si se celebran nuevos acuerdos con los países acreedores y se logran más condonaciones de deuda. No obstante, esas opciones son limitadas. En consecuencia, habría que modificar las modalidades del ajuste para incrementar el ahorro privado (el ahorro público mejoró significativamente en los últimos dos años, y enfrenta serias dificultades la viabilidad de acrecentarlo mucho más en el corto plazo). Aumentar el ahorro privado por la vía de disminuir el consumo no es deseable, excepto en materia de bienes suntuarios. Entonces, el único campo viable en términos políticos y económicos parece consistir en el diseño de un ajuste expansivo, sustentado en un acuerdo nacional de productores, gobierno y trabajadores, siguiendo los lineamientos expuestos a lo largo de este documento.

c) Restablecimiento de la productividad global

Como se mencionó anteriormente, tres factores influyen conjuntamente al explicar la ampliación de la brecha externa: la disponibilidad de recursos externos, el proceso de desmantelamiento de la protección —o en términos más generales, la debilidad de las instituciones de mercado— y la sobrevaluación del tipo de cambio. Ello hace todavía más urgente plantear los requisitos de una inserción exitosa en los mercados internacionales en cuanto a la recuperación de la productividad global y de sus vertebraciones con el manejo de la política macroeconómica, en particular del tipo de cambio y de la apertura externa.

i) Política cambiaria. La situación de sobrevaluación de la moneda —resultado de la utilización del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, pero también de los flujos abundantes de ayuda externa— difícilmente podría corregirse en el corto plazo mediante la devaluación real del

^{25/} Entre 1990 y 1993, la cooperación alimentaria del principal país donante (93 millones de dólares mediante el PL480) representó el 6% del total de su ayuda.

tipo de cambio. 26/ La experiencia de enero de 1993 puso en evidencia la poca efectividad de los procesos devaluatorios para lograr una depreciación monetaria. 27/ La causa reside en el alto grado de indización de la economía, en particular de los salarios por su asociación a una canasta de consumo compuesta principalmente de productos transables y crecientemente importados. El salario medio en el sector formal —pese a tener bajísimo poder adquisitivo— suele resultar mayor a la productividad marginal del trabajo; se crea entonces un círculo vicioso que resta efectividad a las medidas cambiarias de corte ortodoxo para reducir el ingreso real, restablecer la competitividad de las empresas y promover la inversión y el empleo.

Se entiende como tipo de cambio de equilibrio (poder de compra), el calculado a partir de la comparación de índices de precios nacionales y del mercado internacional. Sin embargo, en Nicaragua, país pequeño con mercados internos poco desarrollados y segmentados, y desequilibrio externo estructural, dicho concepto es de utilidad dudosa y puede orientar incorrectamente las decisiones económicas.

Un mejor indicador del tipo de cambio real quizás resultaría de comparar el nivel de productividad global del país con economías semejantes. Dado que los principales mercados de exportación manufacturera del país se encuentran dentro del área centroamericana de integración, convendría tomar como referencia a los miembros del MCCA. En esa perspectiva, es importante notar que desde 1988, los salarios del sector formal de Nicaragua han subido más rápidamente que el índice interno de precios al consumidor, y más que los salarios reales en los otros países de la región. Como es improbable que el alza de salario real haya estado acompañada por un aumento paralelo de la productividad global (véase el capítulo IV, punto 5. Capacitación y transferencia de tecnología), la competitividad del país se ha venido deteriorando en relación con la del resto de Centroamérica.

Entre los determinantes de la competitividad se cuenta la influencia de factores reales (productividad del capital y del trabajo) ligados al estado del aparato productivo y de factores asociados a la política monetaria y fiscal (tipo de cambio nominal, protección arancelaria efectiva). Por consiguiente, cuando no es factible recurrir a la política cambiaria para restablecer la competitividad externa, queda el expediente de utilizar las políticas de oferta y las comerciales. De aquí surgen claramente algunos caminos opcionales en el intento de cerrar la brecha externa y mejorar la competitividad del país:

- 1) Implantar una política heterodoxa de devaluación, con fuerte devaluación nominal acompañada del congelamiento de los salarios y de los principales precios, en particular de los productos de la canasta básica y de las tarifas públicas; o alternativamente,

26/ Se plantean dificultades metodológicas para calcular el tipo de cambio real en Nicaragua, sin embargo existe consenso en que se encuentra fuertemente sobrevaluado (por lo menos en un 50% según un informe del USAID).

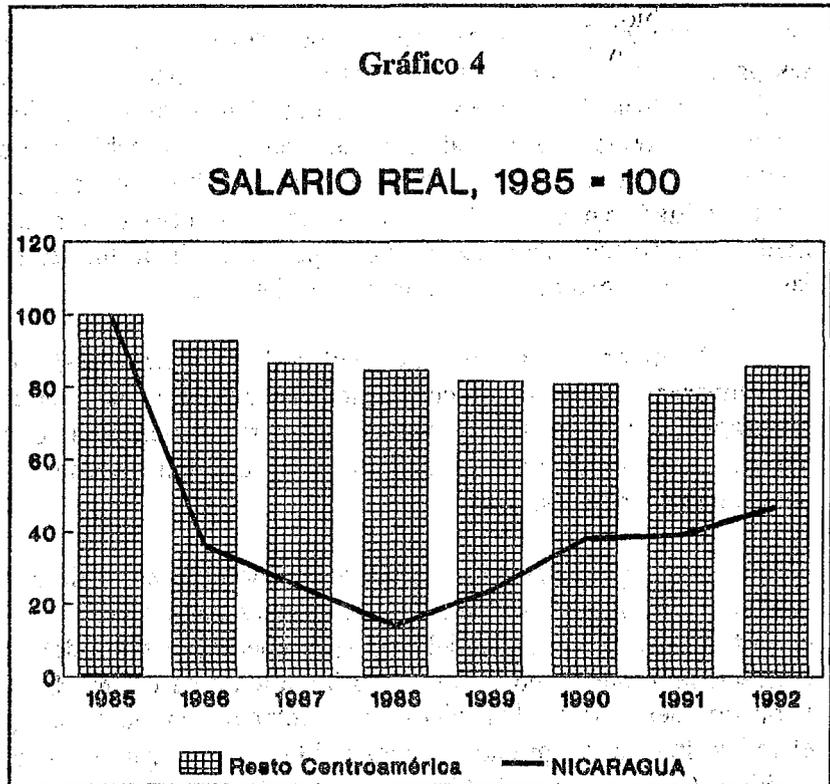
27/ Contribuyeron también al rebote inflacionario de enero-marzo los reajustes de las tarifas públicas (26.5% de la electricidad y 10% del agua).

2) Atemperar y extender en el tiempo la apertura comercial hasta que la combinación de una política monetaria de mini-devaluaciones (*crawling-peg*) y otra de carácter industrial, logre ajustar el tipo de cambio real (en término de competitividad). En este caso, se tendría que abandonar parcial o temporalmente la estrategia de dejar al mercado la función exclusiva de orientar la asignación de los recursos.

ii) Política comercial e industrial. En última instancia, la meta del programa de reforma estructural es acrecentar la productividad global de los factores hasta colocar a la economía en una trayectoria de crecimiento sostenido, sobre la base de una inserción dinámica en los mercados internacionales.

Una de las desventajas de facto del programa seleccionado de apertura externa consistió en apresurar demasiado el paso y permitir la eliminación de empresas que podrían resultar competitivas con ayuda de programas de reconversión industrial. En este sentido, se partió de la hipótesis de que las instituciones del mercado tenían un funcionamiento normal y que se habían despejado los factores especiales de incertidumbre que entorpecen la formación de capital y la transferencia de recursos entre actividades productivas.

Ya se mencionó la alternativa de restablecer algún tipo de protección y promover una política progresiva, pero firme, de desregulación interna. La desregulación, combinada con la privatización de las empresas paraestatales que no constituyen un monopolio natural, y con programas especiales de asistencia técnica —esto es, mediante una política industrial activa—, probablemente podrían alcanzar mejores resultados en plazos relativamente breves. Pero ello estaría condicionado a asegurar la eliminación de barreras artificiales de entrada, de los tratamientos preferenciales y de los privilegios fiscales o crediticios. Se trataría de alentar la formación de "líderes" nacionales conforme a un proceso de selección centrado en las empresas más competitivas en el mercado interno.



Posteriormente, se podría iniciar la segunda etapa de la política de reajuste productivo, mediante la armonización de los derechos arancelarios a las normas centroamericanas e internacionales. 28/

El éxito de las políticas de liberalización, depende de que se satisfaga una serie de prerequisites. En particular debieran existir un número suficiente de empresas por rama, sin que una sea dominante; utilidades suficientes para premiar a la inversión y fomentar la innovación técnica o administrativa; y una demanda sensible al precio de los productos ofrecidos. 29/ En caso de no disponer de esas condiciones mínimas —sobre todo frente a la existencia de monopolios y de barreras importantes de entrada— la disciplina de la competencia tendría que venir necesariamente de fuera —con mayores costos internos— o resolverse por medio de mecanismos regulatorios más atinados (leyes antimonopolio, normas de calidad, tarifas de nivel internacional).

De ser viable, el régimen transitorio de protección tendría efectos positivos en acrecentar los ingresos fiscales y de reducir el déficit comercial. 30/ Los mayores ingresos fiscales derivados del comercio externo podrían utilizarse en el financiamiento de una política de fomento a las exportaciones no tradicionales. Otra ventaja de esa política industrial, sería la de integrar una interfase entre las estrategias macro y microeconómicas, mientras se forman o fortalecen los mercados de bienes y servicios, en especial los de carácter financiero.

3. El sector social y la situación del empleo

a) La situación social

Corregir la desfavorable evolución social representa uno de los mayores retos del país. En 1992 el producto por habitante apenas llegó a 449 dólares, uno de los más bajos de América Latina, y apenas superior en términos reales a la mitad del monto que alcanzaba en 1980. Los indicadores sociales se degradaron por el efecto combinado de los desequilibrios económicos, de la guerra y del crecimiento demográfico (superior al 3% anual).

28/ El estilo de la política económica y social del último decenio y las modalidades recientes de las privatizaciones, determinan que la repartición del capital productivo en los sectores agrícolas e industriales sea bastante equitativa. Si eso puede representar un obstáculo técnico a la reactivación en el corto/mediano plazo, sin embargo, a mayor plazo podría permitir un modelo económico de desarrollo productivo basado en pequeñas y medianas empresas, muy parecido al de Taiwán o Italia, con repercusiones sociales benéficas.

29/ Considerando la planta productiva existente, los productores nacionales difícilmente podrían competir en calidad con los productos importados.

30/ A costa, sin embargo, de una reducción real del ingreso disponible y del consumo privado. Con todo, la distribución de las cargas de reducir la absorción interna no sería la misma que en el caso del ajuste ortodoxo.

El déficit de servicios sociales es abrumador, sólo el 54% de la población tiene acceso al agua potable (18% en áreas rurales) y 27% al servicio de alcantarillado (9% en el campo). El número de camas de hospital, 2.2 por mil en 1975, cayó a 1.2 en 1993, mientras que el déficit habitacional se estimaba en 450,000 viviendas, aumentando a razón del 6% al año. La mortalidad infantil es de 50 por mil, y la población escolar presenta un nivel de desnutrición del 24%.

El único indicador socioeconómico que se compara favorablemente con el resto de América Latina es la equidad en la distribución del ingreso y de la riqueza, atribuible a la difusión de la propiedad agrícola y de las empresas. Sin embargo, la verdadera democratización del capital y de la tierra implicaría perfeccionar el Estado de Derecho en un marco legal más moderno y mucho más proclive a favorecer la eficiencia y la formación de capital. Por lo demás, el deterioro reciente de los desequilibrios macroeconómicos compromete este logro y la misma estabilidad socio-política indispensable para la reactivación económica.

b) Evolución y perspectivas del empleo

En los últimos cinco años se ha registrado un fuerte aumento del subempleo, que excede la mitad de la población económicamente activa del país. En particular, el desempleo abierto subió nueve puntos entre 1990 y 1993, hasta llegar al 20% de la población activa. El deterioro del empleo en el sector formal de la economía es atribuible directamente a las políticas de reducción del tamaño del sector público y de la desmovilización de las fuerzas armadas. A su vez, el índice real de los sueldos y salarios reales revierte su tendencia decreciente para subir espectacularmente (más de 160% entre 1989 y 1990) y seguir haciéndolo en los años subsiguientes (aunque a una tasa menor del 3.2% y 19.6%, respectivamente), sin que se pueda determinar con certeza en qué proporciones tales alzas se puedan atribuir al aumento de las remuneraciones o al recorte del personal de menores calificaciones (véase de nuevo el cuadro 1).

El aumento de salario real empezó a cambiar de signo desde octubre de 1992, debido al repunte del índice de precios al consumidor (la caída continuó en el primer semestre de 1993, y acumuló una pérdida de poder de compra del 4.1% en 6 meses). Sin embargo, no se perciben signos de aumento paralelo del empleo formal, excepto en servicios comunales y sociales. ^{31/}

La población económicamente activa tuvo que buscar alternativas de empleo en el sector informal de la economía, y otro tanto hace la población normalmente inactiva (estudiantes, amas de casa) como medio de obtener fuentes complementarias al ingreso familiar.

^{31/} Entre diciembre de 1992 y septiembre de 1993, el número de asegurados activos bajó 2.5% y los empleos en el Gobierno Central disminuyeron 3.9%.

**CARACTERISTICAS DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL
AGOSTO-DICIEMBRE DE 1992**

(Porcentajes)

	Granada	León	Managua
Estructura de la ocupación			
Sector formal	32.4	41.9	43.6
Sector informal	67.6	58.1	56.4

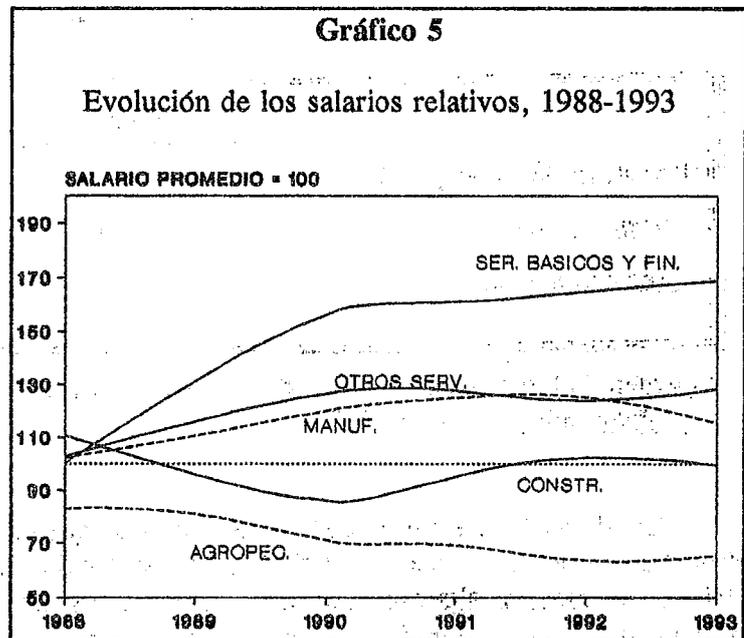
Fuente: Sobre la base de cifras del FIDEG, "Encuesta de Hogares", El Observador Económico, abril de 1993.

Los datos de la encuesta de hogares muestran que las mujeres aportan entre el 60% y el 80% del empleo informal. Además, el 50% de la población que trabaja en el sector informal urbano (SIU) apenas registra algún nivel de estudios primarios. Dicho porcentaje sube al 63% en Granada. En contraste, en el sector formal los empleados con niveles de educación técnica y universitaria representan el 44% en León, el 59% en Managua y el 29% en Granada. Con algunas excepciones, la mayoría de los empleos del SIU se encuentran en el comercio y forman una población volátil. La proporción de nuevos entrantes (menos de un año de trabajar) oscila entre 22% y 39%. El subempleo es más fuerte (entre 26% y 36%) que en la economía formal, donde oscila entre el 8% y el 14% y el ingreso percibido por los empleados informales es 37% inferior.

Pese al aumento del ingreso real del sector formal, el poder de compra de los salarios (diciembre de 1992), medido en términos del costo de la canasta básica urbana, era apenas del 91% para los empleados públicos y 150% para los otros asalariados (el promedio nacional es de 127%). ^{32/} Entre 50% y 60% de los trabajadores del sector formal ganaban por debajo del costo de la canasta, mientras que esa relación era del 80% en el caso de los integrantes del sector informal. La distribución de los costos y los beneficios del ajuste afectó de manera diferente a las diversas ramas de la actividad económica, conformando grupos de ganadores y perdedores mientras se ampliaba el diferencial de salarios. El sector más afectado fue el agropecuario, cuyo índice relativo de salarios se deterioró hasta representar el 65% del promedio nacional. Los salarios del sector manufacturero mejoraron ligeramente su posición, mientras que los del sector de la construcción quedaban en línea con el promedio nacional. Los ganadores se localizan en el sector de los servicios, especialmente en lo que corresponde a los servicios básicos (agua, gas y electricidad) y financieros.

^{32/} A septiembre de 1993, estas coberturas habían bajado a 81%, 130% y 118%, respectivamente.

El brusco aumento salarial del sector público financiero y no financiero, junto con la apertura comercial y la congelación del tipo de cambio, determinaron un marco macroeconómico donde los empleadores y trabajadores del sector productor de bienes y servicios no transables ganan, y pierden los que se ubican en actividades expuestas a la competencia internacional. Al grupo de perdedores, cabe agregar los trabajadores expulsados del sector formal a raíz de la crisis y del ajuste fiscal. Por consiguiente, cerrar la brecha del empleo dentro del programa de ajuste, exige un doble esfuerzo de creación neta de puestos de trabajo y de reorientación de los incentivos productivos.



El primer reto es considerable, si se toma en cuenta las presiones demográficas, que impulsaron un crecimiento de 5.2% de la población económicamente activa en 1993. En otras palabras, mantener sin retroceso los indicadores de subempleo, supone crear casi 69,000 nuevos puestos de trabajo al año, a lo cual deberían añadirse más de 218 mil puestos para absorber el desempleo abierto existente. Hasta ahora, la coyuntura económica no lo ha hecho posible; por lo contrario, se perdieron más de 2,500 empleos formales (1.2% del total) durante el primer semestre de 1993, a lo cual se suma una disminución de 2,000 puestos en el Gobierno Central (3.3% del total). Sin embargo, la política de "tratamiento social" al desempleo del Fondo de Inversión Social y del Ministerio de Acción Social logró atenuar las presiones sobre el mercado de trabajo, al crear más de 70,000 empleos temporales.

De aquí surge una conclusión importante: si se ha de reducir la brecha del desempleo, la economía nicaragüense necesita crecer de manera sostenida a una tasa superior al 5% en los próximos años, privilegiando el desarrollo de los sectores productores de bienes y servicios transables para cerrar en el mismo tiempo la doble brecha externa de liquidez e interna de ahorro. Dado que no se puede recurrir al expediente devaluatorio (al menos en el corto plazo), para mejorar la competitividad sin poner en peligro la estabilización, no existe otro remedio que optar por soluciones *second best* y ejecutar una política industrial activa de apoyo microeconómico, ya sea por el lado del crédito, los subsidios, o los precios.

El panorama se complica todavía más si se considera la necesidad de seguir elevando la productividad del trabajo y del capital para asegurar una inserción internacional exitosa de largo plazo. La información disponible indica que el grado de subocupación del capital productivo en el sector industrial no se puede atribuir íntegramente a factores coyunturales desfavorables, ni a la competencia de las importaciones, sino también a la obsolescencia de las instalaciones y las

tecnologías. De ahí se infiere que toda reactivación orientada hacia la promoción de exportación no tradicional exigirá un esfuerzo intenso de inversión en modernización que aumente la productividad del trabajo. ^{33/} Por eso mismo, la tasa de crecimiento requerida en los sectores industriales, a

fin de absorber los excedentes de mano de obra, sería muy superior al 5% antes mencionado. Queda claro, entonces, que el único sector que permite generar empleo productivo en el corto plazo es el agropecuario, sea en las agroexportaciones o en los granos básicos, considerando por un lado la disponibilidad de tierras, de capital productivo y de mano de obra y, por otro, la demanda potencial de sus productos.



^{33/} A lo cual se deben añadir las fluctuaciones cíclicas de la productividad aparente del trabajo, que, por efecto inercial, cae en las fases de depresión y sube en las fases de recuperación.

IV. LOS SECTORES PRODUCTIVOS: PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y REACTIVACION

El desarrollo de la capacidad productiva, en un proceso de transición hacia una economía de mercado, presenta características especiales debido a la incidencia de fenómenos de muy distinta naturaleza. En particular, debe tomarse en cuenta la destrucción causada por los conflictos armados, la presencia de tensiones sociales, ahora menos intensas pero todavía vivas, y los cambios estructurales de la economía nacional, así como del entorno regional e internacional.

Reconstruir las bases productivas y resanar las fisuras sociales hacen indispensable llevar adelante un proceso de reactivación, que procure al mismo tiempo el desarrollo y la equidad en la distribución de los ingresos, sin descuidar los grandes equilibrios macroeconómicos.

En la década de los ochenta se emprendieron procesos de reforma agraria y se dieron avances en mejorar el acceso a los sistemas de salud y educación. Esos logros, especialmente los relacionados con la tenencia de la tierra, constituyen un punto de partida para alcanzar equidad con crecimiento, como metas principalísimas de la acción gubernamental.

La posibilidad de satisfacer ese doble objetivo está sujeta a la formulación de políticas y medidas que escapen en varios aspectos a los modelos en boga. Promover el progreso técnico, el empleo productivo, la capacitación de los recursos humanos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de todos los estratos sociales, enfrenta escollos enormes, pero no representa en modo alguno una imposibilidad. ^{34/} Sin embargo, será necesario finiquitar un entendimiento político de alcance nacional que enmarque el inicio de un proceso de desarrollo compartido. Aquí debe tomarse en cuenta que se han modificado sustancialmente las condiciones que facilitaron el desarrollo económico del país entre 1950 y mediados de la década de los setenta. Actualmente, la especialización en productos tradicionales de exportación no sostendría un desarrollo satisfactorio y la misma integración regional presenta opciones diferentes a las de años anteriores.

En consecuencia, la tarea de adaptación es de magnitud considerable y de largo plazo, "será necesario finiquitar los procesos incompletos de estabilización y ajuste, acomodarse a regímenes mucho más abiertos a la competencia externa, desarrollar nuevos núcleos exportadores, reconvertir industrias y revitalizar la generación de ahorro e inversiones". ^{35/} No basta con crear un marco macroeconómico apropiado; también hay que configurar estrategias microeconómicas que revolucionen la cultura empresarial hacia la eficiencia y la productividad y que hagan viable la sobrevivencia de las unidades productivas en un régimen cada vez más abierto a la competencia.

^{34/} Véase, CEPAL, Equidad y transformación productiva. Un enfoque integrado (LC/G.1701/Rev.1-P), agosto de 1992.

^{35/} Véase, CEPAL, Centroamérica: El camino de los noventa (LC/MEX/L.223), 25 de mayo de 1993.

1. Reactivación y desarrollo de la agricultura

La reactivación del crecimiento agrícola, en que participen y se beneficien los distintos estratos de la población, requiere de políticas que atiendan simultáneamente a las nuevas exigencias del orden internacional y resuelvan los problemas del rezago interno (bajo nivel relativo en materia tecnológica y administrativa, problemas en el régimen de propiedad, inseguridad).

Con todo, la reanimación de la producción agropecuaria ofrece las mejores posibilidades de avance sectorial. Hay tierras ociosas y mano de obra desempleada, que sólo esperan el abasto de algunos insumos y servicios —el del crédito, singularmente— para elevar sustancialmente la oferta, acrecentar la productividad y multiplicar los puestos de trabajo. Los espacios y las posibilidades de consolidar resultados en el corto plazo son, en consecuencia, amplios; aunque hacer que la agricultura recobre el papel dinámico que tradicionalmente desempeñó como fuente de divisas y de valor agregado, es cuestión que exigirá empeñar esfuerzos persistentes de más largo término.

a) La producción destinada a mercados externos

Las exportaciones de Nicaragua se han deteriorado considerablemente. La producción de algodón ocupa apenas unas 3,500 hectáreas, cuando llegó a trabajar 150,000 en la década de los setenta. La oferta de azúcar y café se halla por debajo de las cifras de los años setenta y ochenta (véase el cuadro 18). Aparte de la incidencia en los ingresos de divisas, el empleo en las actividades primarias se ha reducido por esta razón de más de 400,000 personas que se ocupaban veinte años atrás, a 360,000 entre 1986 y 1988 y a unas 300,000 en 1992 (véase el cuadro 19). En el contexto internacional hay limitaciones que dificultan la reactivación de las actividades tradicionales de exportación, pero muchos escollos internos son susceptibles de resolverse con relativa rapidez.

Las actividades algodонера y azucarera atraviesan por una grave crisis, atribuible al proteccionismo de los países desarrollados. El problema se origina en los elevados subsidios a la producción y a las ventas en los mercados internacionales, que derrumban los precios y causan la generación de excedentes crónicos. En la Ronda Uruguay del GATT se han debatido estas cuestiones, sin que se haya podido llegar a soluciones satisfactorias. Mientras subsistan la protección a las importaciones de azúcar y los subsidios al algodón que se conceden en los Estados Unidos, así como las subvenciones al azúcar en algunos países europeos, sería imprudente tratar de promover el desarrollo de la oferta nacional, pese a las ventajas comparativas intrínsecas del país. Convendría, en cualquier caso, seguir luchando en los foros internacionales junto con las demás naciones latinoamericanas, tratando de eliminar esas prácticas que atentan contra la libertad de comercio y causan pérdidas importantes de bienestar a los países productores y a los consumidores de todos los países.

Por lo que se refiere al café, la situación del mercado internacional depende de la fuerza y de los alcances regulatorios de la nueva organización de productores, formada en sustitución de la Asociación Internacional del Café. De cualquier manera, es factible recuperar los niveles anteriores de producción, si se logra suprimir los movimientos armados en las principales regiones productoras, y se resuelvan problemas asociados al régimen de propiedad.

En los otros rubros tradicionales de exportación (carne y camarón), las perspectivas son positivas. En ambos casos hay mercados y un potencial de desarrollo, cuya concreción depende de

los esfuerzos tendientes a modernizar instalaciones y equipos o a superar tecnologías. Especialmente en el caso de la ganadería, esos rezagos impiden acrecentar la producción y deterioran el medio ambiente. También en este renglón, la pacificación del país y la seguridad en la tenencia son factores que revisten importancia.

La capacidad de captura de camarón lograda en la década de los setenta podría recuperarse en plazos relativamente cortos. Con alicientes y crédito a la inversión en barks, así como en la reactivación o en nuevas plantas procesadoras, podría avanzarse rápidamente. La cría y desarrollo de especies en estanques ofrece excelentes oportunidades de elevar el volumen y la capacidad competitiva de la oferta exportable.

Una de las más importantes ventajas comparativas nacionales se halla en la ganadería y la producción de carne. La incorporación de avances tecnológicos que mejoren significativamente los índices de parición y mortalidad del hato, así como los de pastoreo, constituyen un requisito esencial. El acervo ganadero se estima en 1.7 millones de cabezas de vacunos, que ocupan alrededor de dos millones de hectáreas y producen unos 200,000 terneros al año. En esa misma superficie, con tecnologías probadas, que sólo requirieran generalizarse, podrían tener cabida 4 millones de cabezas y producir 1.2 millones de terneros por ciclo. Ello permitiría ampliar considerablemente las exportaciones y los abastos internos de carne, la producción de lácteos y otros subproductos, utilizados como materia prima en la industria manufacturera. Además de sus efectos económicos directos, la tecnificación de la ganadería reduciría la erosión de tierras y la depredación de las zonas boscosas.

Sin embargo, revitalizar las exportaciones tradicionales no es suficiente para asegurar el desarrollo sostenido del futuro; habrá que promover rubros nuevos que enriquezcan la inserción en los mercados internacionales y que contribuyan al mismo tiempo a mejorar o diversificar los abastos destinados al mercado nacional. Existen abundantes tierras subutilizadas que podrían dedicarse a la producción de oleaginosas, hortalizas, frutas y plantas ornamentales susceptibles de colocarse en el exterior. El ingrediente que ha estado ausente es una política más activa y decidida de promoción, que comprenda acciones complementarias en materia de servicios de transporte, almacenaje y comercialización. También sería necesario reforzar las capacidades de gestión empresarial y realizar las inversiones en obras de infraestructura y en el control y erradicación de plagas —como la mosca de la fruta— que entorpecen la venta al exterior de algunas frutas y hortalizas.

Pese a su destacadísimo papel funcional en la nueva estrategia de desarrollo, la promoción deliberada de las exportaciones, aún considerando sus efectos indirectos en alentar el desarrollo paralelo de servicios y manufacturas, no podría resolver por sí misma, el problema del empleo de buena parte de la fuerza de trabajo. Por eso resulta indispensable comprometer también esfuerzos en el desarrollo de la agricultura de consumo interno —sobre todo la de granos— y hacer otro tanto con la pequeña y mediana industria.

b) La producción de abastos internos

La superficie cultivada de granos básicos llegó a alcanzar un máximo de 414,000 hectáreas en 1988 (374,000 hectáreas en el quinquenio 1985-1989). De aquí en adelante comenzó a reducirse hasta 363,000 hectáreas en 1992. La producción cayó en los primeros años de la presente década (véase el cuadro 20). El proceso de involución de la oferta obedece a distintos factores: la apertura

de fronteras a importaciones subsidiadas, la supresión de los sistemas gubernamentales de regulación de precios y comercialización de granos y las drásticas reducciones al flujo de crédito a los productores.

La depresión productiva se traduce en acrecentamiento insostenible de las compras al exterior y en deterioro de los estándares de consumo. En efecto, las importaciones de maíz, que se mantuvieron alrededor de las 25,000 toneladas a fines de la década de los ochenta, crecieron dos y media veces en 1990 y 1991, mientras que las de arroz alcanzaron 30,000 toneladas anuales desde 1985 (véase el cuadro 21).

Pese al aumento de las compras en el exterior, el consumo por habitante ha disminuido. En el caso del maíz, de 86 kilogramos anuales por persona a principio de la década de los ochenta, se llega a 73 en 1991; el frijol cayó de 21 a 15 kilogramos y el arroz de 34 a 18 kilogramos, en el mismo lapso (véase nuevamente el cuadro 21).

En el año 2000 la población del país totalizará 5 millones de habitantes. De reubicarse los consumos en los máximos históricos, se requerirían 350,000 toneladas de maíz, 100,000 de frijol y 175,000 de arroz. A fin de satisfacer esa demanda con abastecimientos nacionales, se tendría que acrecentar la producción con respecto a 1992 en 52%, 75%, y 30%, respectivamente, suponiendo los mismos rendimientos promedio; ello implicaría el ensanchamiento de las superficies cultivadas de granos básicos en 150,000 hectáreas; así podría beneficiarse con ocupación e ingresos a una población que se sitúa entre 250,000 y 300,000 personas.

Acrecentar la oferta de granos básicos es importante para reducir importaciones innecesarias y reactivar a la economía, pero también lo es en cuanto a lograr la reincorporación a la vida civil de los excombatientes. En cualquier otra actividad las exigencias de capital o entrenamiento por hombre ocupado rebasarían con creces las posibilidades inmediatas del país. A partir de ahí, tanto este núcleo de nuevos productores como los campesinos y pequeños agricultores tradicionales podrían mejorar sensiblemente los rendimientos medios si se crearan servicios de apoyo en capacitación, extensión agrícola, abasto de insumos, y financiamiento.

A su vez, la mejora de rendimientos elevaría los ingresos de los productores y facilitaría la integración de las actividades agrícolas con las pecuarias y las agroindustriales. En una tercera fase, tales procesos modernizadores conducirían a sustituir gradualmente las siembras de granos por cultivos más remunerativos, como frutales, hortalizas o ganadería intensiva.

c) Los recursos forestales y el medio ambiente

En Nicaragua ha tenido lugar un intenso proceso de destrucción de riqueza forestal. El promedio de superficie deforestada anualmente se estima en 120,000 hectáreas. El país dispone todavía cerca de 6 millones de hectáreas de vegetación leñosa (4 millones de hectáreas de bosques densos, y 2 millones de hectáreas de matorrales y barbechos). Conservar esos bosques, además de depender de la promulgación de un marco normativo apropiado (regulación de los cortes y de las talas inmoderadas, requisitos de reforestación), demanda de acciones correlativas en una serie de actividades que provoca el deterioro de los bosques o la deforestación directa.

La extracción de maderas preciosas se realiza por lo general con tecnologías obsoletas, limitándose a cortar unas cuantas especies de alto valor unitario. Junto al desperdicio de otras especies y sin replantar las extraídas, se suelen construir caminos rústicos que más tarde son utilizados por los productores de granos básicos o por los ganaderos. A la postre, estas últimas actividades, junto con el uso de madera como combustible, ocasionan la destrucción completa de los bosques. Dada la pobre calidad de las tierras tropicales, la producción de granos en tierras abiertas sólo se efectúa durante uno o dos años, después se dejan erosionar o se utilizan como praderas de ganadería extensiva de bajo rendimiento; mientras, el campesino inicia otro ciclo de tala destructiva.

De ahí la importancia de planear los asentamientos de la población rural. La distribución de tierras en torno a los programas de reforma agraria, así como la asignación de superficies a los excombatientes que tienda a arraigar la población en zonas agrícolas apropiadas, reducir la agricultura nómada y las presiones a la tala de los bosques del país. Efectos similares traería consigo la modernización y tecnificación de la actividad ganadera.

Las prácticas de explotación ganadera prevaletentes atentan por igual contra la ecología. Los ganaderos suelen ampliar actividades a expensas de los bosques y emplean técnicas deficientes en el manejo de los hatos. Importa entonces mejorar los índices de pastoreo mediante inversiones destinadas a elevar el rendimiento de los pastos y modernizar la infraestructura de manejo del ganado.

2. La reactivación industrial

La producción industrial en el período 1990-1993 fue inferior a la que se logró en la primera parte de la década de los ochenta. Cayeron la industria química, la de productos metálicos, la de la madera, la de vestuario y la de cuero y calzado, en tanto que mostraron signos positivos la de bebidas y la de petróleo y sus derivados (véase el cuadro 22).

La reactivación del sector manufacturero depende de un conjunto de acciones más complejas que las indicadas para la agricultura. En primer término, es fundamental promover un mayor grado de integración entre los recursos naturales y la producción, procurando la reestructuración y el establecimiento de empresas que en unos casos participen de los mercados internacionales, y en otros compitan a nivel nacional y regional. De cualquier manera, sería necesario instaurar políticas promocionales que estimulen a los empresarios para alcanzar mayor competitividad a la obtenida con el impulso del proceso de integración regional en décadas pasadas.

Lograr los propósitos descritos involucra la instrumentación de programas microeconómicos diseñados para elevar la utilización de las abundantes capacidades ociosas, así como promover la modernización de tecnologías e instalaciones, tanto como el entrenamiento y reentrenamiento del personal y el fortalecimiento de los cuadros empresariales. Asimismo, parece insoslayable facilitar accesos fluidos al crédito y servicios relacionados con la preparación de proyectos de reconversión, inversión y mejoramiento tecnológico. Atención especial merece el cuidado de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el núcleo central del empleo del sector secundario y el embrión a partir del cual habrían de desarrollarse negocios de mayor envergadura en el futuro.

En la instrumentación de esas políticas, se podrían utilizar con ventaja los servicios de los organismos de la integración regional. A título ilustrativo, el Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) y el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), estarían en capacidad de suministrar conjuntamente asesoría y financiamiento a los programas de modernización industrial, tanto como en la elaboración de proyectos concretos y en el diseño de los sistemas financieros de apoyo. Eso mismo serviría para agilizar el uso provechoso de los recursos de los organismos financieros multilaterales y de los organismos no gubernamentales, así como allanar el desarrollo firme de la banca privada en proceso de consolidación en el país.

Todo lo anterior desemboca en una conclusión importante. Mientras se logra la adaptación plena a los ajustes y cambios estructurales que sucesivamente se han venido impulsando, o puesto en términos distintos, mientras se termina el proceso de reconstrucción de las instituciones de una economía de mercado, será imprescindible crear un marco jurídico apropiado y poner en práctica estrategias macroeconómicas que se correspondan con las exigencias microeconómicas y con la reforma estructural. Más aún, entre los objetivos de estabilización, los de ajuste más profundo y los de la pacificación o modernización política, se suscitan con frecuencia oposiciones y tensiones que es indispensable conciliar.

Nótese al respecto cómo la supresión abrupta de los sistemas de protección, unida a los problemas específicos de los sectores productivos nicaragüenses —destrucción bélica, rezago tecnológico, incertidumbre política, volatilidad del régimen de propiedad, limitaciones crediticias, etc.—, traen consigo una destrucción exagerada, más que creativa, de las empresas establecidas. Hasta ahora, la apertura ha significado saldos negativos en la generación de valor agregado, esto es, son muchas más las unidades productivas que han cerrado o reducido producción que las beneficiadas y en ruta firme al crecimiento. Es cierto que políticamente no ha sido posible generar un clima propicio al florecimiento de la inversión del sector privado, pero también cabe reconocer el debilitamiento de las capas empresariales y la multiplicación de los *trade offs* —no siempre optimizados— entre los objetivos y metas antes señalados.

De ahí que la tarea fundamental consista en remodelar el diseño y los tiempos de instrumentación de las políticas macro y microeconómicas, hasta armonizarlas en función no de enfoques predominantemente doctrinarios, sino a la luz de las peculiaridades del caso nicaragüense.

Antes que cualquier otra meta, debe procurarse la reactivación deliberada del sector manufacturero, rompiendo los obstáculos que vienen determinando un proceso de franca involución productiva. A nivel macroeconómico es claro el caso en favor de poner en juego medidas proteccionistas temporales que den tiempo al ajuste y reconversión de capacidades productivas susceptibles de regenerarse y competir en mercados progresivamente abiertos, y que compensen —por ahora— la sobrevaluación del córdoba y otros riesgos anormales que encara el empresario nicaragüense. Diseñar programas integrales de reconversión industrial, facilitar el acceso normal al financiamiento bancario, regularizar el régimen de propiedad, prestar asesoría tecnológica y servicios de comercialización modernos, serían apenas unos cuantos de los apoyos que demandan con apremio los empresarios industriales nicaragüenses.

A más largo plazo, un primer hilo conductor —ya mencionado— de la política industrial consiste inevitablemente en la vertebración deliberada entre las actividades primarias y las manufactureras. Ahí se encuentran ventajas en acrecentar los multiplicadores de la inversión y el empleo que, como lo demuestra la historia de la posguerra, podrían dar lugar al fortalecimiento o incluso a la formación de nuevos nichos exportadores.

Una segunda directriz residiría en la identificación de actividades susceptibles de competir internacionalmente o de producir con eficiencia en el abasto de los mercados nacional y regional. Las posibilidades en ambos casos son amplias y algunos proyectos podrían iniciarse en plazos relativamente cortos.

Las manufacturas relacionadas con las exportaciones tradicionales ofrecen diversas oportunidades. En la medida en que se promueva la actividad ganadera, será necesario invertir en la ampliación de la capacidad de matanza, enfriamiento y empaque de carne. La expansión de la actividad camaronera deberá conducir al establecimiento de empacadoras, pudiendo llegar incluso a los enlatados y procesos de mayor valor agregado.

En segundo lugar estarían otras actividades industriales integradoras de la producción primaria, la cual podría competir tanto a nivel nacional como en los mercados regionales e internacionales. A título de ejemplo se puede indicar el caso de la industria de la madera, la leña y el carbón, la del cuero y el calzado, y la textil. También se debieran fomentar algunas líneas de la rama alimentaria, como los aceites vegetales y los jugos concentrados de frutas.

En cuanto a la industria de la madera, la lucha armada destruyó aserraderos localizados en la región del Atlántico, en donde se encuentran los mayores recursos forestales del país. Es, por tanto, urgente la reposición de instalaciones y, en un contexto de modernización, avanzar a la fabricación de maderas aglomeradas, terciadas y en láminas finas. En el aprovechamiento de los recursos forestales, es necesario adoptar criterios de explotación autosostenibles, meta que sólo podría alcanzarse en la medida que se establezcan empresas de dimensión suficiente que, por un lado, inicien actividades rentables de reforestación y, por otro, utilicen un mayor número de especies y aprovechen integralmente la madera cortada.

El carbón y la leña utilizados en los hogares, así como en industrias de diversa índole, representan alrededor del 60% del consumo total de energía. Por eso, ante la magnitud del problema y la lentitud natural del proceso de sustitución de combustibles, parece justificado mejorar las técnicas de acopio y utilización de la madera. La mayor parte de la producción de carbón proviene de hornos tipo "parva" de baja eficiencia que desperdician altos porcentajes de la materia prima y provocan la deforestación. Aquí convendría instalar carboneras y cocinas mejoradas, ya sea de barro o metálicas, con las cuales se ahorraría hasta un 50% de la leña utilizada.

Otra rama industrial a desarrollar prioritariamente se asocia con la producción pecuaria. Hay espacios para regenerar y modernizar la industria láctea, la de procesamiento de carne o subproductos (alimentos animales) y la industria del cuero y el calzado. Sin duda, la viabilidad de esas manufacturas, es función de su vertebración orgánica a los programas de modernización de la ganadería y la ampliación de la capacidad de matanza. Como es obvio, la industria del cuero y el calzado depende, en medida importante de la calidad y volumen de los abastos primarios.

En la industria alimentaria hay manufacturas que podrían competir con ventaja en los mercados internacionales, como es el caso de los aceites comestibles y jugos concentrados de frutas (naranja, piña y mango). La demanda internacional de estos productos es robusta y Nicaragua dispone de recursos naturales abundantes. Desde luego, el desarrollo de esos productos tendría que acompañarse con inversiones en plantas de procesamiento y sistemas modernos de comercialización.

En el mismo orden de ideas está la articulación de la industria con la producción primaria de granos básicos, como ya ocurre en otros países centroamericanos. En este rubro, Nicaragua cuenta con ventajas comparativas innegables al menos a escala regional. Por eso, en la medida que se logren excedentes sobre la demanda de consumo directo, se dispondría de materias primas para abastecer empresas manufactureras de harinas y de otros alimentos de consumo humano.

3. Los servicios

En relación con la infraestructura económica y los servicios básicos, resalta la situación difícil del subsector eléctrico, de la red vial y de las instalaciones portuarias. En ese sentido, el fuerte retraso en el programa de instalación de nuevas centrales de generación en la década pasada ha conducido a serios problemas en el abastecimiento de energía eléctrica en el país. Por lo tanto, la reactivación económica de Nicaragua requiere acciones conducentes a asegurar la demanda total de electricidad, tanto en cantidad como en calidad. Esto implica la instalación de nuevas centrales de generación, la rehabilitación de las centrales existentes, el mejoramiento de las redes de transmisión y distribución, la ampliación del nivel de electrificación, la agilidad en los aspectos de comercialización, etc. Cualquier desarrollo industrial necesitará de un servicio eléctrico que cumpla con las normas recomendadas de calidad, como el nivel de tensión, la frecuencia, etc. ^{36/}

Con respecto a la red vial y a las facilidades portuarias, se han ejecutado algunos proyectos de rehabilitación; sin embargo, existen todavía problemas críticos a resolver. El mejoramiento de la red de carreteras y caminos es de suma importancia para asegurar la reactivación económica del país, incluyendo la red de caminos secundarios que soporta la actividad agropecuaria.

Asimismo, hay posibilidades y necesidad imperiosa de modernizar el sector de los servicios comerciales. En primer lugar parece indispensable llenar vacíos de mercado, como los que se suscitan en torno a la comercialización de granos básicos y de otros rubros de consumo interno masivo, así como en la exportación y en el manejo o la distribución de rubros perecederos.

La organización de servicios de acopio y distribución de granos es una necesidad urgente frente a la disolución de la empresa gubernamental que cumplía anteriormente esas funciones y ante la prelación que reviste el acrecentamiento de la producción de granos básicos. En los hechos, los esfuerzos por elevar la producción y mejorar los niveles de vida e ingreso de los campesinos y de los pequeños agricultores, resultarían frustrados ante la ausencia de mecanismos eficaces de compraventa de los granos, transporte, almacenaje y de acopio de cosechas, y de distribución. Conviene observar que la capacidad de almacenamiento de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) —que se encuentra subutilizada en la actualidad— no sería suficiente en caso de que se ampliara la oferta. Por lo tanto, se justifica realizar las inversiones para lograr un equilibrio razonable entre la producción y el acopio en el que podrían participar empresarios, incluidas las asociaciones de pequeños productores y de cooperativas del país.

También es notoria la falta de empresas que atiendan la comercialización internacional de productos perecederos (como frutas y hortalizas), hecho que dificulta o imposibilita el impulso a la

^{36/} Véase, CEPAL, El subsector eléctrico del Istmo Centroamericano: Diagnóstico, perspectivas y propuestas (LC/MEX/R.378), 8 de diciembre de 1992.

producción. La CEPAL ha planteado en varias oportunidades la necesidad de llenar este vacío con la formación de empresas de alcance regional, con capacidades y economías de escala que difícilmente podrían organizarse a nivel nacional. ^{37/}

En otra vertiente, se encuentra el desarrollo de la hotelería. Según planes existentes, el país tiene potencial de ensanchar apreciablemente los servicios turísticos, singularmente integrando circuitos con los países cercanos, como México o los centroamericanos.

4. La participación de los distintos agentes económicos

La reactivación económica y el desarrollo requieren garantías a la propiedad, la seguridad civil y suprimir factores de incertidumbre que limitan la participación activa de los distintos estratos empresariales. Asimismo, habría que redoblar los esfuerzos encaminados a asegurar el combate a la pobreza y a la polarización social. Por lo demás, aún queda camino que recorrer en la consolidación del proceso de reforma agraria y en promover que las organizaciones de pequeños productores logren niveles aceptables de eficiencia, tanto en el sector agrícola como en el industrial y el de servicios. Solo de esa manera podrían vertebrarse los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil en términos que converjan hacia la reconstrucción del sistema económico.

a) La participación en actividades agrícolas

En el caso de las actividades agrícolas, la reactivación participativa de los diferentes estratos de productores precisa como punto focal de la normalización del régimen de la propiedad y de garantías a la seguridad personal, esto es, de la consolidación de la paz y de finiquitar acuerdos consensuales entre los partidos políticos y grupos principales de la sociedad.

i) El proceso de reforma agraria y la participación de pequeños agricultores. Al finalizar la década de los setenta, la concentración de la tierra y la riqueza alcanzaba cifras dramáticas: un 68% de los campesinos no contaba con tierras; el 65% de los dueños con fincas menores de 7 hectáreas disponían tan sólo del 3.5% de las tierras cultivadas; en el otro extremo, los grandes productores con el 1% de las fincas, concentraban el 40% de las tierras.

Durante la década de los ochenta, se instrumentaron medidas que cambiaron la estructura de tenencia de la tierra. Desde entonces se redistribuyeron 2.7 millones de hectáreas a empresas estatales, a los campesinos y pequeños agricultores de manera individual o colectiva. Las superficies repartidas correspondieron a fincas de gran dimensión, hecho que alteró significativamente la estructura de la tenencia de la tierra: ya en 1988 en el sector privado, la gran propiedad representó el 6%, mientras que la mediana y familiar sumaba el 26% de la tierra cultivable. En el sector reformado las cooperativas disponían del 14%, las empresas estatales 12% y el resto pertenecía a campesinos y pequeños productores individuales (véase el cuadro 23).

^{37/} Véase, CEPAL, Centroamérica: el fomento de las exportaciones de frutas, hortalizas y plantas ornamentales (LC/MEX/R.438), octubre de 1993.

Con todo, el reparto de tierras careció de regulaciones y de un entorno legal preciso. Algunos decretos confiscatorios de fincas y propiedades han sido cuestionados jurídicamente con posterioridad. Además, no se titularon todas las tierras entregadas, situación que ha engendrado conflictos de propiedad, que vienen a sumarse a otros litigios que ponen en peligro los logros de la reforma agraria. Por lo demás, la desmovilización de excombatientes —condición clave para la pacificación— ha creado nuevas presiones sobre la tierra, las cuales apenas comienzan a ser atendidas.

En 1990 se desmovilizaron más de 80,000 miembros del Ejército o de la Resistencia Nicaragüense. Hasta junio de 1992, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) había entregado 409,916 manzanas, beneficiando a un poco más de 11,000 desmovilizados. Como consecuencia, hay rezagos y descontento que suelen usarse como justificante de las acciones violentas que proliferan en el país. En este contexto merece especial atención hacer culminar en el menor plazo posible el proceso de reforma agraria que comprenda, por una parte, la entrega ordenada de tierras a los excombatientes y, por otra, garantice fehacientemente los derechos de propiedad. Sin esto último, resultará extremadamente difícil reanimar el necesarísimo proceso de inversión privada. Con todo, la reforma agraria, constituye un adelanto importante en nivelar la distribución de la riqueza que abre la posibilidad de modernizar económica y políticamente al sistema social nicaragüense.

ii) Las demandas de los productores. La multiplicidad y complejidad de las demandas del sector agropecuario en torno a la reactivación productiva, hacen indispensable encontrar respuestas específicamente diseñadas a cada estrato de productores.

En cuanto a los grandes agricultores privados, quizás la ampliación de los créditos de la banca oficial y privada, tanto como la búsqueda de soluciones pragmáticas al problema de las carteras vencidas, sean elementos clave en movilizar rápidamente mejoras o ampliaciones de la producción. Además, el crédito oficial y los sistemas de redescuentos o de topes de cartera, podrían usarse en promover la diversificación agrícola entre los propietarios de fincas aldoneras. De ese modo, cabría desarrollar cultivos o actividades productivas sucedáneas (frutas, hortalizas, granos, etc.) que conduzcan a poner en uso una zona de tierras de excelente calidad.

Los pequeños agricultores y campesinos también requieren del acceso al crédito, pero a la par necesitan de mecanismos *ad hoc* de protección de precios y comercialización, servicios legales, de extensión, almacenamiento y de tecnología, así como políticas limitativas de importaciones subsidiadas.

En cuanto al financiamiento de la producción, conviene estimular el establecimiento de cooperativas, cajas de ahorro, o uniones de crédito a nivel de municipios o comunidades, con los objetivos de perfeccionar las garantías bancarias, atenuar los problemas de la cartera morosa, promover el ahorro y dar sustento más firme a la capitalización del campo. En este caso, como en el de la asistencia técnica dirigida a los núcleos de pequeños productores, cabría otorgar participación destacada a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), y a otras federaciones de cooperativas, así como diversos organismos no gubernamentales con experiencia en organización campesina que carecen de recursos técnicos, administrativos y financieros para promoverla con éxito.

Especial prioridad tendría que darse a los núcleos desmovilizados de excombatientes que al recibir las tierras se han visto imposibilitados de trabajarlas por falta de capital de trabajo y, en

ocasiones, de medios de subsistencia para sobrevivir hasta la primera cosecha. También son frecuentes las carencias en capacitación técnica y de servicios de extensión agrícola. Hay aquí evidente necesidad económica y política de impulsar programas de apoyo y fomento, combinando los esfuerzos de las organizaciones de productores, las instituciones públicas, las agencias no gubernamentales y la asistencia de la comunidad internacional.

b) La participación en el área industrial

En el sector manufacturero, la regularización del régimen de propiedad plantea menores problemas, sobre todo al avanzar el proceso de privatizaciones. Por esta razón, la reactivación industrial depende fundamentalmente de acciones de fomento entre las cuales destacan medidas de orden microeconómico, así como la creación de un clima macroeconómico propicio. Se busca no sólo facilitar la reactivación económica, sino también multiplicar las oportunidades de empleo al alcance de empresarios grandes, pequeños y de los micronegocios.

La mayoría de las empresas grandes (ingenios azucareros, mataderos y empacadoras de carne y camarón u otras manufacturas) ya han sido privatizadas. En este segmento industrial suele haber capacidad técnica y administrativa para operar con un grado razonable de eficiencia, aunque necesitan de respaldo tecnológico y financiero, singularmente cuando deben emprender programas de reconversión o modernización productiva. Los nuevos empresarios posiblemente necesiten de apoyos específicos para mejorar sus sistemas administrativos o requieran de recursos frescos con fines de capitalización. En todo caso, debería procurarse el fortalecimiento deliberado de los cuerpos empresariales. A este respecto, se justifica promover la formación de consorcios nacionales, incluso con participación extranjera, a fin de aglutinar recursos en empresas de mayor tamaño, capaces de competir exitosamente en el exterior y de optimizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras, escasas en el país. En el mismo sentido, cabría interesar a inversionistas foráneos en el establecimiento de mecanismos de asociación en inversiones conjuntas que contribuyan a la tecnificación industrial y a enriquecer los cuadros empresariales nacionales.

En ese orden de ideas, se deberían sugerir cambios de orientación en la cooperación de los países donantes. Más específicamente, sería importante explorar la posibilidad de reorientar la ayuda en especie, para sustituirla por inversiones asociativas en empresas establecidas en Nicaragua, sobre todo las sujetas al proceso de desincorporación estatal. Los socios del exterior tomarían la responsabilidad de la modernización técnica, además de aportar recursos de capital (los arreglos sobre el control administrativo podrían variar en cada caso). De esa manera, la cooperación externa influiría directamente en crear capacidades productivas, en resolver exitosamente el proceso de privatizaciones, en incorporar tecnologías al día, sin correr el riesgo —como ha venido ocurriendo— de esfumarse sin dejar mayor huella en el financiamiento de la compra repetitiva de bienes de consumo en el exterior.

La empresa mediana y pequeña demanda con urgencia el diseño de apoyos de diversa índole. No sólo se trata del segmento más desprotegido y menos organizado o apto para acomodarse por sí mismo a los procesos de ajuste y de reforma estructural, sino también el que más ha resentido una crisis económica que ya se prolonga más de una década. En este sector los programas de protección y fomento tendrían que alcanzar una cobertura necesariamente amplia, comprendiendo elementos de apoyo financiero, administrativo, técnico y de capacitación. A la vez, habría que impulsar esfuerzos complementarios de índole organizativa para agrupar en núcleos solidarios a los microempresarios.

La formación de cooperativas de compras, uniones de crédito y ahorro o de unidades comunes de servicios, constituirían prelación importantes en la modernización y preparación de este estrato empresarial a enfrentar exigencias estrictas de eficiencia en un régimen cada vez más abierto a la concurrencia.

c) La reorganización de los servicios

Una de las más notorias lagunas institucionales en la economía nicaragüense es la ausencia de oferentes eficaces en un gran número de servicios complementarios de la producción. No se trata de la falta de mercados sofisticados (especializados, por ejemplo, en cubrir eventualidades o riesgos a futuro), sino en satisfacer necesidades mucho más elementales.

Ya se han mencionado deficiencias en el desarrollo de los servicios bancarios, de transporte, comercialización, preparación de proyectos o transferencia de tecnologías. En ocasiones resulta viable satisfacer esas necesidades mediante la contratación de empresas foráneas. Pero también las hay en que ello no resulta posible. El transporte terrestre, la infraestructura portuaria y de carreteras, caen en esta última categoría que demanda de la organización de proyectos nacionales, públicos o privados. Una situación análoga se presenta en el suministro de energía eléctrica, donde persiste una situación de oferta limitada y de instalaciones envejecidas que prestan servicios costosos y sujetos a frecuentes interrupciones limitativas de la competitividad de las empresas usuarias.

Otro caso sobresaliente, todavía a nivel más básico, lo constituye la carencia de sistemas de comercialización de las cosechas de granos, origen de serios perjuicios a los consumidores y a los pequeños productores. Los precios están sujetos a oscilaciones estacionales excesivas, y eso mismo tiende a desestimular la oferta interna. ^{38/} Son de sobra conocidos los sistemas de regulación de abastos y precios, así como los problemas que suelen encarar. Baste entonces señalar que en Nicaragua hay una necesidad imperiosa a satisfacer, pese a las dificultades que puedan enfrentarse, y observar de la misma manera que la Empresa Cooperativa de Productos Agropecuarios (ECODEPA) ha efectuado ensayos parciales exitosos, sólo limitados por restricciones presupuestarias y de recursos. La acción convergente de empresarios y productores agrícolas y de las instituciones públicas, los organismos no gubernamentales y las agencias internacionales de cooperación externa, mucho podrían contribuir a la solución de este problema específico, así como los de otros servicios que se han convertido en verdaderos cuellos de botella de la oferta.

5. Capacitación y transferencia de tecnología

Los niveles de la tecnología de las distintas actividades productivas de Nicaragua son, por lo general, bajos. En la agricultura los rendimientos resultan inferiores a los promedios de los países centroamericanos casi en todos los rubros, sean productos de consumo interno (maíz, frijol y arroz) o de exportación (café y caña de azúcar); en la ganadería son también pobres los índices de producción de carne y leche. En cuanto a manufacturas, es conocido el deterioro y obsolescencia

^{38/} Durante 1993, el precio al público del frijol varió de un córdoba por kilogramo en el mes de enero, a tres en julio y siete en septiembre. En contraste, el productor recibió en promedio ochenta centavos.

de buena parte de la planta manufacturera y la desaparición o empobrecimiento de las instituciones de enseñanza que preparaban técnicos y obreros especializados. También es baja la eficiencia en los servicios (por ejemplo, la comercialización de granos básicos ocasiona pérdidas cuantiosas en el manejo del maíz y el frijol).

En todos estos casos subyacen prácticas productivas atrasadas, así como deficiencias serias de los sistemas educativos. Es conocido el alto índice de analfabetismo del país y también las prácticas rudimentarias aplicadas en numerosos estratos de la agricultura y la ganadería. Esta situación ha sido acentuada por los efectos destructivos de la lucha armada, y porque varias generaciones de jóvenes combatientes al reincorporarse a la vida civil carecen del entrenamiento necesario en la producción, así como por el éxodo previo de muchos cuadros de técnicos y administrativos.

De lo anterior es fácil concluir la necesidad de reforzar y reformar el conjunto o, al menos varios, de los segmentos del sistema educativo nacional (incluyendo a la enseñanza técnica), como un prerrequisito de los esfuerzos encaminados a hacer eficiente y moderno al aparato productivo del país; o bien a mejorar los ingresos de los estratos más numerosos de la población trabajadora por la vía del acrecentamiento genuino de la productividad o los rendimientos.

Sin descartar en modo alguno ese esfuerzo estructural de largo plazo, también habría que actuar de inmediato, con urgencia, en la instrumentación de programas de capacitación y transferencia de tecnologías, que promoviesen en breve la productividad y protegiesen de la quiebra a muchos productores y de la desocupación a la fuerza de trabajo. Paradójicamente, la presencia simultánea de excedentes de mano de obra y de tierras e instalaciones ociosas, facilitaría en una primera etapa alcanzar elevaciones sustantivas en la eficiencia productiva.

Inscribir los esfuerzos de capacitación en las estrategias de reactivación económica, exige fortalecer a los centros e instituciones educativas del país—sobre todo las de enseñanza técnica— y volcar sus capacidades de investigación a resolver los puntos de obstrucción más acentuados de la economía. En tal sentido, cabría dar preferencia al entrenamiento de los excombatientes y al personal de todo tipo de las empresas medianas y pequeñas, y a los núcleos más numerosos de campesinos. En torno a estos proyectos, la familia de instituciones de las Naciones Unidas, los organismos regionales y otros países, podrían prestar una cooperación especialmente importante.

6. El financiamiento

En materia financiera, habría que combatir enérgicamente las prácticas que en el pasado han distorsionado la función del crédito y concentrado sus beneficios. En la década de los setenta, resultaba común la concesión privilegiada de préstamos a los grandes usuarios por montos que solían fluctuar y hasta exceder el 100% de los costos de producción. También fueron frecuentes las reestructuraciones que en ocasiones llegaron a convertirse en condonaciones de créditos a cargo del fisco, cuando los productores enfrentaban problemas de liquidez.

En la década de los ochenta, el crédito cambió de destino para favorecer a las empresas estatales y a las cooperativas de productores. Las condonaciones se hicieron frecuentes y prevalecieron tasas reales negativas de interés que, en el período de hiperinflación, significaron enormes subsidios a los beneficiarios de los préstamos. A ello se sumaron anomalías en el régimen

de propiedad, fuente de imperfecciones secundarias en las garantías otorgadas a las instituciones de crédito.

Con posterioridad, la lucha armada, la crisis económica y la caída de los precios de los productos tradicionales de exportación, unidos a las prácticas bancarias descritas, crearon un volumen importante de cartera vencida o morosa de la banca nacional, que todavía no logra depurarse en medida suficiente.

Más recientemente, la combinación de las exigencias derivadas de los programas de estabilización y de las reformas de liberalización financiera, han traído consigo una secuela nueva de consecuencias. Del lado positivo, el énfasis puesto en alentar la formación de instituciones bancarias y financieras privadas, ha tendido a establecer normas mucho más estrictas de recuperación en la concesión de los créditos. Asimismo, la política monetaria restrictiva y la reducción de los montos de préstamos otorgados al sector público, han hecho notorias contribuciones a la eliminación de las presiones inflacionarias.

Sin embargo, esos mismos logros han creado el enrarecimiento exagerado del crédito canalizado a las actividades productivas y paralelamente su concentración en los grandes usuarios y en sectores relacionados con la importación y el comercio. En la actualidad, el 39.8% de los financiamientos bancarios se dedica a la intermediación y sólo el 13.4% a la agricultura y el 24.9% a la industria (véase el cuadro 24). Además, visto por estratos empresariales, el 87% va a las negociaciones grandes y el 13% a los pequeños o medianos productores. Otro efecto ha sido la generación de presiones al alza de las tasas de interés y hacia el mantenimiento de excedentes ociosos en la capacidad de préstamo de la banca privada. Esto último es explicable en función de la coexistencia de depósitos denominados en distintas monedas, de cláusulas de indexación de los contratos, de la limitada dispersión geográfica de los servicios de la propia banca privada, de los riesgos asociados a la pacificación incompleta del país o a la incapacidad de los usuarios de otorgar garantías reales.

Sin negar la validez de los objetivos de largo plazo de la reforma financiera o los de corto término de la estabilización de precios, parece indispensable adoptar un conjunto de medidas complementarias de emergencia que vengán a restablecer los servicios del mercado financiero, del que ha quedado segregado el grueso de los productores.

Quiérase o no, la reactivación económica depende de acrecentar la canalización de fondos financieros en magnitud apropiada a las actividades directamente productivas. Ello no significa romper los candados estabilizadores de la política monetaria, pero sí alterar *ex profeso* la asignación de los recursos. Habría que restringir el crédito al comercio y a la importación y concederlo a la industria y la agricultura, y hacer otro tanto —aunque en menor medida— con las grandes empresas a fin de favorecer a los pequeños y medianos productores, tanto como a los programas de incorporación de los excombatientes. De la misma manera, convendría hacer fluir los préstamos al interior del país y limitar un tanto los que dan preferencia a las actividades ubicadas en Managua.

A la vez, se justifica modificar las regulaciones que inducen a los bancos a restringir innecesariamente su capacidad de crédito o a multiplicar los riesgos que deben asumir. De nuevo surgen aquí las recomendaciones de perfeccionar el régimen de propiedad, de alentar la organización de uniones de crédito o sistemas de ahorro-préstamo y poner en práctica algunos instrumentos de la banca central (redescuentos selectivos, topes de cartera). Asimismo, parece aconsejable modificar los tiempos de ejecución de la liberalización financiera, a fin de no crear innecesariamente vacíos en los servicios a la producción en las diversas zonas del país, tanto como evitar el desaprovechamiento de la limitada infraestructura bancaria de que se dispone en la actualidad.

El primer punto a considerar es el de la propiedad. En el momento actual, la propiedad de los bancos es casi exclusivamente estatal. Esto ha permitido que el Estado ejerza un control directo sobre la actividad bancaria, lo que ha sido una ventaja en términos de estabilidad y de control de los riesgos. Sin embargo, a largo plazo, la propiedad estatal puede ser una limitación para el desarrollo de una banca competitiva y eficiente. Se recomienda, por lo tanto, que se permita la entrada de capital privado en el sector bancario, lo que puede lograrse a través de la venta de acciones o de la creación de nuevas entidades financieras con capital mixto.

En cuanto a la regulación, es necesario revisar las normas que limitan la capacidad de crédito de los bancos. Estas limitaciones, que a menudo se basan en criterios de liquidez o de solvencia, pueden ser demasiado restrictivas y reducir el acceso al crédito de las empresas productivas. Se sugiere que se establezcan límites más flexibles y que se permitan a los bancos determinar su propia capacidad de crédito en función de sus recursos y de la demanda del mercado. Asimismo, es importante revisar las regulaciones que afectan a los riesgos que los bancos deben asumir, como el límite de cartera o el porcentaje de depósitos que pueden ser prestados. Estas regulaciones deben ser revisadas periódicamente para asegurar que no estén generando distorsiones en el sistema financiero.

Finalmente, es necesario considerar los tiempos de ejecución de la liberalización financiera. La liberalización debe ser un proceso gradual y ordenado, que permita a las instituciones financieras adaptarse a las nuevas condiciones de competencia. Se recomienda que se establezcan plazos claros para la implementación de las reformas, lo que permitirá a las autoridades evaluar el impacto de cada medida y hacer ajustes cuando sea necesario.

En conclusión, la liberalización financiera en Nicaragua debe ser un proceso que busque mejorar la eficiencia del sistema bancario y aumentar el acceso al crédito de las empresas productivas. Para ello, es necesario modificar las regulaciones que restringen innecesariamente la capacidad de crédito de los bancos y permitir la entrada de capital privado en el sector. Asimismo, es importante revisar los tiempos de ejecución de la liberalización para evitar vacíos en los servicios a la producción y el desaprovechamiento de la infraestructura bancaria existente.

Anexo estadístico

Cuadro 1
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

	1960	1970	1975	1980	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Indices (1980 = 100.0)								
A. Indicadores económicos básicos								
Producto interno bruto a precios de mercado	49.5	96.6	123.7	100.0	86.0	85.8	86.1	85.5
Ingreso nacional bruto	...	99.7	123.7	100.0	81.2	73.9	69.6	...
Población (miles de habitantes)	1,493	2,063	2,426	2,802	3,676	3,808	3,952	4,105
Producto interno bruto por habitante	92.9	131.2	143.0	100.0	65.5	63.1	61.1	58.4
Déficit fiscal/PIB b/	...	1.3	5.8	8.9	19.8	7.2	7.3	5.8
Tasa de subutilización laboral c/	...	14.8	16.1	18.3	44.6	53.5	49.1	51.3
Tasas de crecimiento								
B. Indicadores económicos de corto plazo								
Producto interno bruto d/	5.3	6.9	5.1	-4.2	-1.5	-0.2	0.4	-0.7
Producto interno bruto por habitante d/	-1.7	3.5	1.7	-6.9	-4.1	-3.7	-3.3	-4.4
Ingreso nacional bruto d/	4.4	-4.2	-2.1	-9.0	-5.8	...
Precios al consumidor Diciembre a diciembre	70.4	13,490	865.6	3.5	25.0
Sueldos y salarios reales e/	-8.1	-17.4	61.5	3.2	19.6	...
Valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios d/	7.6	10.4	15.9	2.1	-2.3	-13.8	-8.6	17.8
Valor corriente de las importaciones de bienes y servicios d/	10.7	10.0	20.8	9.0	-2.8	20.8	8.6	-9.2
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios d/	-0.8	-1.0	-2.2	1.5	0.3	-2.7	2.7	...
Millones de dólares								
C. Sector externo								
Saldo del comercio de bienes y servicios	-9	-15	-142	411	-290	-486	-586	-449
Pago neto de utilidades e intereses (devengados)	3	30	60	125	217	636	495	430
Saldo de la cuenta corriente	-11	43	-198	-534	-507	-834	-1,071	-855
Saldo de la cuenta de capital	11	51	238	332	468	935	1,066	774
Variación de las reservas internacionales netas	-	-11	-41	196	-39	83	-5	-81
Deuda externa pública desembolsada f/	...	155	600	1,825	10,616	10,312	10,792	10,907

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Porcentajes.

c/ Desocupados abiertos y desempleados equivalentes por subempleo como fracción de la fuerza de trabajo.

d/ Años 1960, 1970, 1975, 1980 y 1990, corresponden a las tasas promedio anual de los períodos 1950-1960, 1960-1970, 1970-1975, 1975-1980 y 1980-1990, respectivamente.

e/ Salario promedio a nivel nacional.

f/ Incluye, a partir de 1990, los intereses moratorios acumulados.

Cuadro 2
NICARAGUA: ALGUNOS INDICADORES SOCIALES BASICOS

	1960	1970	1980	1985	1990
Poblacion urbana (porcentajes)	41.7	47.0	53.4	56.6	59.8
Esperanza de vida (años)	48.5	55.2	59.3	62.4	66.6
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos)	130.9	100.0	85.6	71.1	52.2
Tasa de escolaridad a/ (porcentajes)	28.8	39.9	53.3	52.3	53.5
Habitantes por médico	...	2,147	2,067	1,887	1,789 b/

Fuente: CEPAL, Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el Caribe, 1950-1992.

a/ Porcentajes de la población matriculada de 6 a 23 años con respecto a grupo de población correspondiente.

b/ Corresponde al año 1988.

Cuadro 3
NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS CONSTANTES DE 1980

(Tasas de crecimiento promedio anual)

	1950- 1960	1960- 1970	1970- 1975	1975- 1980	1970- 1980	1980- 1990	1990- 1992 a/	1993 a/
Producto interno bruto	5.3	6.9	5.1	-4.2	0.3	-1.5	0.1	-0.7
Bienes	4.3	7.7	5.5	-4.4	0.4	-2.0	-0.1	-0.3
Agricultura b/ Minería	3.0 2.5	6.2 1.3	4.9 -4.5	-4.7 -22.8	-0.0 -14.1	-0.9 -3.7	-0.5 7.5	0.6 2.1
Industria manufacturera	7.3	11.1	5.9	-0.9	2.4	-3.2	0.5	-1.6
Construcción	12.4	11.7	13.9	-15.2	-1.7	-1.3	-1.8	1.3
Servicios básicos	11.9	7.4	5.3	-2.1	1.5	-1.4	2.7	0.8
Electricidad, gas y agua	16.8	11.2	5.6	1.3	3.4	2.0	1.7	4.0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	11.2	6.5	5.2	-3.2	0.9	-3.0	3.2	-1.0
Otros servicios	5.6	5.9	4.5	-4.3	0.0	-0.9	-0.2	-1.5
Comercio restaurantes y hoteles	5.9	6.5	5.2	-6.5	-0.9	-2.3	3.2	...
Establecimientos financieros y servicios	8.1	4.4	1.8	-2.7	-0.5	-0.9	-0.1	...
Viviendas	7.9	2.4	-1.4	-3.9	-2.6	-0.4	0.7	...
Servicios comunales sociales y personales	3.6	5.9	5.1	-1.5	1.7	0.8	-3.8	...
Gobierno general	17.3	3.0	6.3	5.6	5.9	2.5	-6.4	...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.

Cuadro 4

NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO
(Porcentajes del PIB corriente)

	1960	1970	1975	1980	1988	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Producto interno bruto	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Consumo gobierno general	8.7	9.5	9.2	19.7	32.2	32.6	20.0	19.2	17.8
Consumo privado	78.9	74.5	78.6	82.5	81.3	66.6	90.1	95.4	88.6
Variación de existencias	2.2	2.2	-1.7	2.2	-1.3	-0.9	1.8	-0.2	...
Formación bruta de capital fijo	12.8	16.2	22.9	14.6	28.1	20.2	17.9	17.6	16.9
Pública	...	4.1	6.7	10.5	23.8	9.0	7.2	8.5	8.0
Privada	...	12.1	16.3	4.1	4.3	11.2	10.7	9.1	8.9
Exportaciones de bienes y servicios	22.5	26.4	28.5	24.2	18.0	25.0	21.2	16.5	18.6
Importaciones de bienes y servicios	25.1	28.9	37.5	43.3	58.3	43.5	51.1	48.6	41.8
Brecha comercial (bienes y servicios)	-2.6	-2.4	-9.0	-19.0	-40.3	-18.5	-29.8	-32.1	-23.3

Fuente: CEPAL, sobre base de cifras del Banco Central.

a/ Cifras preliminares.

Cuadro 5

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

	1988	1989	1990	1991	1992 a/	Tasas de crecimiento			
						1988	1990	1991	1992 a/
Indice de la producción agropecuaria (1980=100.0) b/	86.5	93.1	91.8	88.0	90.9	7.6	-1.4	-4.1	3.3
Agrícola	92.5	101.0	100.5	95.5	96.5	9.2	-0.5	-5.0	1.0
Pecuaria	75.5	78.7	77.1	73.9	79.0	4.2	-2.0	-4.2	6.9
Silvícola	103.2	106.8	109.4	110.5	111.8	3.5	2.4	1.0	1.2
Pesca	46.2	54.2	40.7	59.1	70.9	17.3	-24.9	45.2	20.0
Producción de los principales cultivos c/									
De exportación									
Café	43.4	42.9	27.6	47.5	33.2	-1.2	-35.5	71.9	-30.2
Algodón	26.1	24.7	29.8	24.7	1.5	-5.3	20.6	-17.2	-94.0
Caña de azúcar	1,771.0	2,200.3	2,570.7	2,323.7	2,041.5	24.2	16.8	-9.6	-12.1
Banano	95.3	101.0	108.5	133.5	84.8	6.0	7.4	23.1	-36.5
Ajonjolí	3.3	14.5	12.9	8.5	7.8	339.1	-10.7	-34.1	-8.3
Tabaco	1.7	2.1	2.5	1.7	1.3	25.5	19.3	-30.0	-23.7
De consumo interno									
Maíz	225.9	235.5	201.3	233.7	230.0	4.2	-14.5	16.1	-1.6
Frijol	61.3	62.6	55.2	58.7	56.8	2.1	-11.8	6.3	-3.2
Arroz oro	64.5	68.7	73.5	71.3	84.5	6.4	7.0	-2.9	18.5
Sorgo	103.3	78.1	71.1	86.5	91.3	-24.4	-8.9	21.6	5.6
Soya	4.4	9.0	-	4.6	4.9	103.9	-	-	6.5
Indicadores de la producción pecuaria									
Beneficio									
Vacunos d/	276	352	377	324	343	27.5	7.1	-14.1	5.9
Porcinos d/	176	159	146	134	146	-9.7	-8.2	-8.2	9.0
Avícolas e/	29.9	18.0	21.9	30.0	44.2	-39.8	21.7	37.0	47.3
Otras producciones									
Leche f/	46.6	43.4	43.5	44.0	45.7	-6.9	0.2	1.1	3.9
Huevos g/	36.9	28.3	29.3	33.0	33.2	-23.3	3.5	12.6	0.6
Indicadores de la producción pesquera									
Captura de mariscos h/									
Camarón	2,137	2,100	1,751	2,222	1,818	-1.7	-16.6	26.9	-18.2
Langosta	467	908	584	955	1,872	94.4	-35.7	63.5	96.0
Captura de pescado h/	2,767	2,521	1,429	3,980	3,447	-8.9	-43.3	178.5	-13.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Índice del valor agregado.

c/ Miles de toneladas.

d/ Miles de cabezas.

e/ Millones de libras.

f/ Millones de galones.

g/ Miles de docenas.

h/ Miles de libras.

Cuadro 6

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992 a/	1993 a/
	Tasas de crecimiento								
Exportaciones fob									
Valor	-26.0	-15.5	14.5	-20.1	35.2	4.1	-19.3	-16.8	17.5
Volumen	-21.3	-18.3	10.5	-21.6	39.5	7.2	-14.5	-13.2	14.9
Valor unitario	-6.0	3.4	3.6	1.9	-3.1	-2.9	-5.6	-4.1	2.3
Importaciones fob									
Valor	8.0	-14.7	8.4	-2.2	-23.8	4.1	20.7	-9.2	-11.2
Volumen	4.1	-11.1	1.5	-3.2	-18.0	-3.8	15.9	11.1	-12.1
Valor unitario	3.7	-4.0	6.8	1.0	-7.1	8.2	4.1	-1.7	1.0
Relación de precios del intercambio (fob/cif)	-8.9	6.6	-3.0	0.4	4.2	-10.2	-7.9	-5.7	1.3
	Indices (1980 = 100.0)								
Poder de compra de las exportaciones de bienes	71.4	62.2	66.7	52.5	76.3	73.7	58.0	47.4	55.2
Quántum de las exportaciones	76.3	62.4	68.9	54.0	75.4	80.9	69.2	60.0	68.9
Quántum de las importaciones	107.9	95.8	97.3	94.2	77.3	74.4	86.3	95.8	84.2
Relación de precios del intercambio (fob/cif)	93.6	99.8	96.8	97.2	101.3	91.0	83.8	79.0	80.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.

Cuadro 7
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

	Millones de dólares					Composición porcentual		Tasas de crecimiento			
	1989	1990	1991	1992 a/	1993 a/	1980	1993 a/	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Total	319.0	332.0	268.0	223.0	262.0	100.0	100.0	4.1	-19.3	-16.8	17.5
Centroamérica	28.8	47.7	51.9	64.4	...	17.7	...	65.6	8.8	24.1	...
Principales exportaciones tradicionales	214.7	236.1	198.3	161.2	151.3	71.1	57.7	10.0	-16.0	-18.7	-6.1
Algodón oro	27.9	37.2	44.4	26.2	0.4	6.8	0.2	33.3	19.4	-41.0	-98.5
Café	89.7	71.0	36.2	45.3	32.8	37.2	12.5	-20.8	-49.0	25.1	-27.6
Azúcar	17.2	38.6	31.3	19.1	19.0	4.6	7.3	124.4	-18.9	-39.0	-0.5
Carne	46.0	57.0	37.5	40.8	53.3	13.2	20.3	23.9	-34.2	8.8	30.6
Mariscos	10.9	8.7	12.9	15.5	34.7	6.0	13.2	-20.0	47.8	20.4	124.1
Ajonjolí	2.9	6.5	7.3	4.3	5.4	1.4	2.1	124.1	12.3	-41.1	25.6
Banano	20.1	17.1	28.7	10.0	5.7	1.9	2.2	-14.9	67.8	-65.2	-43.0
Resto	104.3	95.9	69.7	61.8	110.7	28.9	42.3	-8.1	-27.3	11.4	79.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/. Cifras preliminares.

Cuadro 8
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF

	Millones de dólares					Composición porcentual		Tasas de crecimiento			
	1989	1990	1991	1992 a/	1993 a/	1980	1993 a/	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Total	614.9	637.4	751.4	830.8	729.3	100.0	100.0	3.7	17.9	10.6	-12.2
Centroamérica	48.7	72.4	166.9	207.5	...	35.1	...	48.7	130.5	24.3	...
Bienes de consumo	107.8	158.7	223.5	279.6	201.8	27.4	27.7	47.2	40.8	25.1	-27.8
Duraderos	17.6	29.9	44.9	46.5	33.8	3.2	4.6	69.9	50.2	3.6	-27.3
No duraderos	90.2	128.8	178.6	233.1	168.0	24.2	23.0	42.8	38.7	30.5	-27.9
Materias primas y bienes intermedios	307.2	281.5	337.3	345.7	328.9	58.6	45.1	-8.4	19.8	2.5	-4.9
Petróleo y combustibles	94.5	123.0	114.5	122.0	106.0	19.6	14.5	30.2	-6.9	6.6	-13.1
Otros	212.7	158.5	222.8	223.7	222.9	39.0	30.6	-25.5	40.6	0.4	-0.4
Para la agricultura	64.9	35.0	44.9	15.9	24.3	7.0	3.3	-46.1	28.3	-64.6	52.8
Para la manufactura	125.0	103.5	149.3	173.6	164.4	28.0	22.5	-17.2	44.3	16.3	-5.3
Para la construcción	22.8	20.0	28.5	33.5	34.0	3.3	4.7	-12.3	42.5	17.5	1.5
Diversos	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.7	-	-	-	-	-
Bienes de capital	199.9	197.2	190.6	205.5	198.6	14.0	27.2	-1.4	-3.3	7.8	-3.4
Para la agricultura	12.2	12.3	14.0	14.8	10.2	2.7	1.4	0.8	13.8	5.7	-31.1
Para la manufactura	95.0	79.0	93.1	114.8	112.6	6.9	15.4	-16.8	17.8	23.3	-1.9
Para el transporte	92.7	105.9	83.5	75.9	75.8	4.4	10.4	14.2	-21.2	-9.1	-0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.

Cuadro 9
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Balance en cuenta corriente	-839	-803	-814	-846	-531	-507	-834	-1,071	-855
Balance comercial	-579	-549	-570	-583	-326	-290	-486	-586	-449
Exportaciones de bienes y servicios	344	287	325	273	341	392	338	309	364
Bienes fob	305	258	295	236	319	332	268	223	262
Servicios reales b/	39	30	30	37	22	60	70	86	102
Transporte y seguros	6	5	6	5	6	7	12	12	...
Viajes	7	8	9	5	4	12	17	23	...
Importaciones de bienes y servicios	924	837	895	857	667	682	824	895	813
Bienes fob	794	677	734	718	547	570	688	751	667
Servicios reales b/	130	159	161	138	119	112	136	144	146
Transporte y seguros	73	76	83	80	55	58	47	92	...
Viajes	6	4	6	2	1	15	28	30	...
Servicios de factores	-273	-254	-244	-262	-205	-217	-363	-495	-430
Utilidades	-5	-	-	-	-	-	-	-12	...
Intereses recibidos	2	1	1	2	7	12	10	8	...
Intereses devengados	-270	-254	-245	-264	-212	-229	-373	-490	...
Trabajo y propiedad	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Transferencias unilaterales privadas	14	-	-	-	-	-	15	10	25
Balance en cuenta de capital	856	592	820	889	595	468	935	1,066	774
Transferencias unilaterales oficiales	113	115	135	130	169	202	844	379	254
Capital de largo plazo	783	387	80	203	-99	-168	190	-458	-303
Inversión directa	-	-	-	-	-	-	-	13	...
Inversión de cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	...
Otro capital de largo plazo	783	387	80	203	-99	-168	190	-471	...
Sector oficial c/	786	391	73	202	-88	-135	240
Préstamos recibidos	973	1,078	507	536	280	228	1,395	486	...
Amortizaciones	-188	-688	-434	-334	-369	-362	-1,146	-1,019	...
Bancos comerciales c/	-	-	-	-	-5	-17	-13
Préstamos recibidos	-	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-5	-17	-13
Otros sectores c/	-2	-3	8	2	-5	-16	-37	62	...
Préstamos recibidos	1	2	8	5	6	-	-
Amortizaciones	-4	-5	-	-4	-11	-16	-37
Balance básico	58	-301	-598	-512	-460	-473	200	-1,150	-903
Capital de corto plazo	146	273	684	504	594	615	-184
Sector oficial d/	185	285	689	527	557	657	-78
Bancos comerciales	2	1	7	-10	7	22	10
Otros sectores	-41	-13	-13	-13	30	36	-115
Errores y omisiones netos	-187	-184	-79	52	-69	-181	85
Balance global e/	17	-211	6	44	64	-39	101	-5	-81
Variación total de reservas (- significa aumento)	-17	211	-6	-44	-56	40	-83	5	81
Oro monetario	-5	54	2	-2	8	1	2
Derechos especiales de giro	-	-	-	-	-	-	-
Posición de reserva en el FMI	-	-	-	-	-	-	-
Activos en divisas	-5	149	-1	-52	-63	41	-95
Otros activos	2	8	-7	9	-1	-2	-14
Uso del crédito del FMI	-9	-	-	-	-	-	24

Fuente: Para 1985-1990, CEPAL, sobre la base de información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional, y para 1991-1992, CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye otros servicios no factoriales.

c/ Incluye préstamos concedidos y otros activos y pasivos.

d/ Incluye mora corriente.

e/ Es igual a la variación total de reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.

Cuadro 10
NICARAGUA: USOS Y FUENTES DE DIVISAS
(Millones de dólares)

	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Importaciones de bienes y servicios	682.0	824.0	895.0	813.0
Exportaciones de bienes y servicios	-392.0	-338.0	-309.0	-364.0
Pago de intereses	12.0	22.5	91.1	102.0
Ingresos de intereses	-11.8	-10.1	-7.5	-4.6
Otros servicios netos	-	12.0	12.0	10.0
Memo: Intereses no pagados	216.8	350.5	399.2	322.6
Necesidad corriente de divisas	290.2	510.4	681.6	556.4
Amortizaciones efectivas b/	5.1	38.9	70.0	156.6
Memo: Amortización no pagada	391.4	521.4	746.0	512.8
Necesidad total de divisas	295.3	549.3	751.6	713.0
Movimientos de acervos:				
Capital privado	-256.5	-38.1	58.4	175.8
Variación de reservas internacionales netas	197.8	-13.4	4.9	81.0
Necesidad neta de divisas	354.0	600.8	688.3	456.2
Transferencias privadas	...	15.0	10.0	25.0
Transferencias oficiales c/	201.6	584.9	378.6	253.5
Necesidad neta de crédito	152.4	0.9	299.7	177.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua (pueden no coincidir con las cifras del cuadro 9).

a/ Cifras preliminares.

b/ Excluye renegociaciones y préstamos puentes.

c/ Excluye condonaciones de deuda.

Cuadro 11

NICARAGUA: FLUJOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

	1990	1991	1992 a/	1993 b/	1990	1991	1992 a/	1993 b/
	(Millones de dólares)				(Porcentajes)			
Transferencias oficiales	202	585	379	332	100.0	100.0	100.0	100.0
Líquidas	93	355	142	97	46.0	60.7	37.5	29.2
Atados	109	230	237	235	54.0	39.3	62.5	70.8
Préstamos	228	229	333	213	100.0	100.0	100.0	100.0
Líquidos	...	156	253	89	...	68.2	75.9	41.7
Atados	...	73	80	124	...	31.8	24.1	58.3
Total financiamiento	429	814	712	545	100.0	100.0	100.0	100.0
Líquidos	...	511	395	186	...	62.8	55.5	34.1
Atados	...	303	317	359	...	37.2	44.5	65.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Mundial; puede no coincidir con cifras de Balanza de Pagos.

a/ Preliminar.

b/ Estimaciones.

Cuadro 12
NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992 a/	1993 a/
Millones de dólares										
Deuda externa pública b/	3,788	4,936	5,760	6,270	7,220	9,741	10,616	10,312	10,792	10,907
Largo y mediano plazo	3,263	4,496	5,321	5,733	6,773	7,544	8,064	8,496	10,352	...
Corto plazo c/	525	440	439	537	447	535	701	434	440	...
Intereses moratorios acumulados	1,662	1,851	1,382	1,530	1,642
Desembolsos netos c/	689	597	837	522	955	2,529	880	-275	538	115
Servicio	103	68	32	25	11	12	17	49	97	242
Amortizaciones d/	40	23	13	12	5	8	5	29	44	154
Intereses pagados e/	63	45	19	13	6	4	12	20	53	88
Porcentajes										
Relaciones										
Deuda externa pública/exportaciones de bienes y servicios	760.6	1434.9	2,007.0	1,929.2	2,644.7	2,856.6	2,708.2	3,050.9	3,492.6	2,996.4
Servicio/exportaciones de bienes y servicios	20.7	19.8	11.1	7.7	4.0	3.5	4.3	14.5	31.4	66.5
Intereses devengados f/ /exportaciones de bienes y servicios	42.2	78.4	88.5	75.4	96.7	62.2	58.4	110.4	158.6	...
Servicio/desembolsos netos	14.9	11.4	3.8	4.8	1.2	-	1.9	-17.8	18.0	210.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Saldos a fin de año.

c/ Incluye la deuda comercial.

c/ Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, más la amortización del año de estudio.

d/ Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.

e/ Intereses efectivamente desembolsados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.

f/ Corresponden a los intereses ocasionados por la deuda externa, que se consigna en el balance de pagos, sin que hayan sido pagados necesariamente.

Cuadro 13
NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
(Córdobas oro por dólar)

	Tipo de cambio nominal		Brecha cambiaria (%)	Indice de tipo de cambio real efectivo a/ (1988=100.0)	
	Oficial	No oficial		Oficial	No oficial
1991	4.85	5.16	6.4	155.9	166.3
I	4.38	4.70	7.3	152.4	163.7
II	5.00	5.30	6.0	153.1	162.5
III	5.00	5.31	6.2	164.2	174.5
IV	5.00	5.34	6.8	154.0	164.6
1992 b/	5.00	5.39	7.8	152.8	164.9
I	5.00	5.22	4.4	152.1	159.0
II	5.00	5.30	6.0	152.3	161.6
III	5.00	5.51	10.2	155.1	171.1
IV	5.00	5.53	10.6	151.7	167.9
1993 b/	6.03	6.15	1.9	157.0	160.4
I	5.95	6.09	2.2	156.4	160.3
II	6.11	6.22	1.7	157.5	160.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense. Se tomó como base un tipo de cambio de paridad de 600 córdobas nuevas por dólar en 1988, intermedio entre el mercado oficial y el paralelo.

b/ Cifras preliminares.

Cuadro 14
 NICARAGUA: PANORAMA MONETARIO Y FINANCIERO
 (Millones de córdobas)

	1990	1991	1992 a/	1993 b/
Panorama monetario				
Reservas internacionales netas	108.8	552.5	528.0	363.4
Crédito interno neto	-40.3	-5.2	131.8	302.5
Sector público no financiero	186.7	1,082.6	18,890.5	18,990.4
Gobierno Central	182.3	1,050.8	18,864.8	18,942.9
Crédito al sector bancario	180.1	1,100.5	1,535.6	807.2
Bancos Estatales	180.1	1,100.5	1,507.2	775.2
Otros activos y pasivos netos	-407.1	-2,188.3	-20,294.3	-19,495.1
Base monetaria	68.5	547.3	659.8	665.9
Panorama financiero				
Reservas internacionales netas	112.5	617.8	631.7	555.6
Activos internos netos	23.8	644.2	1,018.9	1,491.6
Crédito interno neto	652.7	3,876.4	21,729.7	22,243.6
Sector público no financiero	557.5	2,677.4	19,704.0	19,815.3
Gobierno Central	179.2	1,016.1	18,805.9	18,896.0
Sector Privado	95.2	1,199.0	2,025.7	2,428.3
Otros activos y pasivos netos	-628.9	-3,232.2	-20,710.8	-20,752.0
Pasivos	136.3	1,262.0	1,650.6	2,047.2
Moneda Nacional	95.3	905.1	1,096.5	1,192.0
Circulante	75.2	722.6	841.2	866.8
Cuasi dinero	20.1	182.5	255.3	325.2
Moneda extranjera	41.0	356.9	554.1	855.2
Tipo de cambio	1.00	5.00	5.00	6.14

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras preliminares a junio de 1993.

Cuadro 15

NICARAGUA: INDICADORES BANCARIOS AL 31 DE MAYO DE 1993

	Banca estatal	Banca privada	Total banca comercial
	(Porcentajes)		
Activo total	100.0	100.0	100.0
Disponibilidades a/	13.8	37.8	20.6
Moneda nacional	4.7	9.3	6.0
Moneda extranjera	9.1	28.5	14.6
Préstamos	62.5	44.3	57.3
Corto plazo ctes.	32.7	39.3	34.6
Largo plazo ctes.	28.7	5.0	22.0
Corto plazo congelados	7.6	0.5	5.6
Largo plazo congelados	0.7	0.0	0.5
Menos reservas p. dudos.	7.1	0.5	5.3
Intereses por cobrar	5.3	1.5	4.2
Otros b/	18.4	16.4	17.8
Pasivo total	100.0	100.0	100.0
Depósitos	40.6	83.5	52.4
Moneda nacional	25.6	39.5	29.4
Moneda extranjera	15.1	44.0	23.0
Otras exigibilidades	12.2	5.9	10.5
Moneda nacional	11.3	1.7	8.7
Moneda extranjera	0.9	4.2	1.8
Otros c/	47.2	10.6	37.1
Cartera vencida/cartera total	11.9	1.1	9.7
Cartera vencida/patrimonio d/	64.3	4.7	49.6
Ingresos financieros/activos período e/	21.6	9.7	16.8
Gastos financieros/activo período e/	12.5	4.8	9.4
Otros gastos/activo período e/	52.5	39.1	47.1
Margen financiero/activos período e/	9.1	4.9	7.4
Pasivo/Patrimonio neto	1,660.6	892.7	1,343.4
Resultado/activo período e/	6.4	7.5	6.9

Fuente: Superintendencia de bancos, Informe mensual, mayo 1993

a/ Incluye caja y depósitos en bancos del país o del exterior.

b/ Incluye otros activos, muebles e inmuebles y cargos diferidos.

c/ Incluye obligaciones por préstamos, otros pasivos y deuda subordinada.

d/ Incluye patrimonio neto más reservas.

e/ Acumulado desde el 1 de enero.

Cuadro 16

NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL GOBIERNO CENTRAL

(Porcentajes del P.I.B.)

	Sector Público a/					Gobierno Central						
	1980	1990	1991	1992 b/	1993 b/	1970	1975	1980	1990	1991	1992b/	1993 b/
1. Ingresos corrientes	29.0	25.5	32.8	37.5	35.6	10.4	12.1	21.7	15.2	19.6	20.7	21.0
Ingresos tributarios	19.8	13.2	17.8	19.3	19.2	9.3	10.5	19.8	13.2	17.8	19.3	19.2
Directos	1.9	2.4	5.7	3.7	3.4	3.4	2.7
Indirectos	7.4	8.1	14.1	9.5	14.4	15.9	16.5
Sobre el comercio exterior	3.1	3.2	...	2.9	3.8	4.4	...
Ingresos no tributarios	5.0	8.2	9.3	10.6	11.5	1.1	1.6	1.9	2.0	1.8	1.4	1.8
2. Ingresos de capital	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	-	0.2	0.1	0.1
3. Ingresos totales (1+2)	29.5	25.6	33.1	37.7	35.8	22.2	15.2	19.8	20.8	21.1
4. Gastos corrientes	28.5	40.7	35.3	35.3	29.4	8.7	10.2	23.0	33.4	23.5	22.1	19.7
Remuneraciones	9.1	12.8	9.6	10.6	9.5	4.8	4.1	7.4	7.2	5.9	7.3	6.6
Intereses	2.4	0.2	1.2	2.9	3.8	0.3	...	2.4	-	1.1	2.9	3.5
Otros gastos corrientes	17.0	27.7	24.5	21.8	16.1	3.6	6.2	13.2	26.2	16.5	11.9	9.6
5. Ahorro corriente (1-4)	0.5	-15.2	-2.5	2.2	6.2	1.7	1.8	-1.3	-18.2	-3.9	-1.4	1.3
6. Gastos de capital	9.7	2.1	4.9	10.7	12.3	3.0	7.7	8.1	1.6	3.5	6.0	7.2
Inversión real	6.2	2.0	4.6	9.3	8.0	2.0	2.7	5.8	1.0	3.0	3.6	2.8
Otros gastos de capital	3.5	0.1	0.3	1.4	4.3	1.0	5.0	2.3	0.6	0.5	2.4	4.4
7. Gastos totales (4+6)	38.2	42.8	41.2	46.4	41.9	11.7	17.9	31.1	35.0	27.0	28.1	26.9
8. Déficit o superávit (3-7)	-8.7	-17.2	-8.1	-8.7	-6.1	(1.3)	(5.8)	-8.9	-19.8	-7.2	-7.3	-5.8
9. Financiamiento del déficit	8.7	17.2	8.1	8.7	6.1	1.3	5.8	8.9	19.8	7.2	7.3	5.8
Financiamiento interno neto	4.1	-5.4	-4.4	-6.5	-6.7	0.3	0.4	4.4	-5.2	-4.9	-6.4	-4.3
Banco Central	...	13.5	1.6	-7.8	...	0.5	0.4	7.0	13.5	1.3	-6.7	-2.8
Otros	...	-18.9	-6.0	1.3	-2.6	-18.7	-6.2	0.3	-1.5
Financiamiento externo neto	4.6	22.6	12.4	15.2	12.8	1.1	5.4	4.5	25.0	12.1	13.7	10.1
Crédito recibido	-4.6	20.6	6.8	4.3	0.6	1.5	5.4	-3.2	23.6	8.8	7.8	3.2
Donaciones	9.2	2.0	5.6	10.9	12.2	7.7	1.4	3.3	5.9	6.9
Otras Relaciones (porcentajes)												
Ahorro corriente/gastos de capital	5.2	(723.8)	(51.0)	20.6	50.4	55.4	24.0	-16.0	-1137.5	-111.4	-23.3	18.1
Déficit fiscal/gastos totales	(22.8)	(40.2)	(19.7)	(18.7)	(14.6)	11.4	32.6	-28.7	-56.6	-26.7	-26.0	-21.6
Financiamiento interno/déficit	47.1	(31.4)	(54.3)	(74.7)	(109.8)	25.2	7.7	49.4	-26.3	-68.1	-87.7	-74.1
Financiamiento externo/déficit	52.9	131.4	153.1	174.7	209.8	84.6	93.3	50.6	126.3	168.1	187.7	174.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Nicaragua.

a/ Sector público no financiero consolidado.

b/ Cifras preliminares.

Cuadro 17

NICARAGUA: GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR FUNCIONES

	1978	1988	1989	1990	1991	1992 a/1993 a/	
Relaciones con el PIB							
Total	20.2	45.9	29.9	35.0	27.0	28.1	26.9
Servicios sociales	4.1	8.3	7.4	11.0	10.3	10.2	11.2
Educación	2.6	3.4	2.7	5.1	4.9	4.7	4.4
Salud	1.0	4.2	3.9	5.0	4.2	4.1	4.1
Vivienda	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2
Otros	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1	1.2	2.4
Infraestructura y Producción	4.8	7.7	5.0	3.6	3.5	4.8	5.1
Actividades primarias	0.3	2.6	1.6	0.6	0.8	1.3	2.4
Industria y Comercio	0.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.5	0.7
Construcción y Transporte	4.4	4.4	3.1	2.6	2.4	2.0	1.9
Otros	-	-	-	0.2	0.1	0.9	0.1
Defensa y Seguridad	3.2	15.6	11.8	14.0	4.7	6.0	3.7
Servicios generales	5.9	14.1	5.7	6.4	7.4	4.3	3.3
Servicio de la deuda	2.2	0.1	-	-	1.1	2.9	3.5
Relaciones con el gasto total							
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Servicios sociales	20.3	18.1	24.7	31.4	38.1	36.3	41.6
Educación	12.9	7.4	9.0	14.6	18.1	16.7	16.4
Salud	5.0	9.2	13.0	14.3	15.6	14.6	15.2
Vivienda	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7
Otros	2.5	1.5	2.3	2.6	4.1	4.3	8.9
Infraestructura y Producción	23.8	16.8	16.7	10.3	13.0	17.1	19.0
Actividades primarias	1.5	5.7	5.4	1.7	3.0	4.6	8.9
Industria y Comercio	0.5	1.3	0.7	0.3	0.4	1.8	2.6
Construcción y Transporte	21.8	9.6	10.4	7.4	8.9	7.1	7.1
Otros	-	-	-	0.6	0.4	3.2	0.4
Defensa y Seguridad	15.8	34.0	39.5	40.0	17.4	21.4	13.8
Servicios generales	29.2	30.7	19.1	18.3	27.4	15.3	12.3
Servicio de la deuda interna	10.9	0.2	-	-	4.1	10.3	13.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas.
a/ Cifras preliminares.

Cuadro 18

NICARAGUA: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACION

	Promedios				1990	1991	1992 a/	1993 b/
	1970- 1974	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989				
Superficie c/	261.1	283.3	246.0	174.1	163.7	154.6	118.9	116.2
Café	83.9	89.0	96.1	77.5	74.2	74.6	75.0	75.0
Algodón	142.9	153.1	101.8	56.2	44.9	35.6	2.3	3.5
Caña de azúcar	32.0	38.8	45.3	37.8	42.4	42.0	39.2	35.0
Banano	2.3	2.4	2.7	2.5	2.2	2.4	2.4	2.7
Producción d/								
Café oro	38.8	56.5	57.1	41.9	27.6	47.5	33.2	46.0
Algodón	322.0	273.2	211.3	100.3	83.8	69.4	4.7	7.7
Caña de azúcar	1,845.3	2,516.0	2,715.7	2,149.7	2,570.7	2,323.7	2,041.5	2,070.0
Banano	42.5	139.3	134.4	111.8	108.5	133.5	84.8	93.1
Rendimiento e/								
Café	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6
Algodón	2.3	1.8	2.1	1.8	1.9	1.9	2.0	2.2
Caña de azúcar	57.6	65.2	59.9	56.5	60.6	55.3	52.1	59.1
Banano	18.7	57.8	49.1	44.5	49.3	55.6	35.3	34.5

Fuente: SIECA, VII Compendio Estadístico Centroamericano, 1975 y Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ Miles de hectáreas.

d/ Miles de toneladas.

e/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 19
NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION
(Miles de personas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992 a/
Población total	2,957	3,058	3,163	3,230	3,384	3,501	3,622	3,745	3,871	3,999	4,131
Población económicamente activa	939	974	1,010	1,077	1,086	1,126	1,225	1,277	1,331	1,386	1,310
Total ocupados b/	752	789	802	828	846	852	858	768	737	645	665
Sector primario c/	281	302	304	339	367	365	361	315	309	266	305
Sector secundario	103	109	109	105	105	108	113	99	86	72	65
Industria	86	90	90	85	85	86	90	84	76	61	54
Construcción	14	15	16	17	17	19	20	12	8	9	9
Minas	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Sector terciario	368	379	389	384	373	379	384	354	342	307	295
Comercio	102	103	101	103	95	96	96	90	86	75	79
Gobierno central d/	58	65	75	76	77	78	78	71	72	98	91
Transportes y comunicaciones	28	28	27	23	22	22	22	20	19	16	12
Establecimientos financieros e/	9	9	14	15	17	16	16	15	14	13	11
Energía y agua	6	7	7	8	8	8	8	8	8	7	6
Servicios	164	167	165	159	155	159	164	150	143	97	96
PIB/Población ocupada f/	26.8	28.8	27.9	25.9	25.1	24.8	21.5	23.6	24.6	28.0	27.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares, sobre la base de datos a junio.

b/ Puestos plenos.

c/ Estimaciones por cultivo y área sembrada.

d/ A partir de 1991 incluye Defensa y Gobernación.

e/ A partir de 1991 se deja de incluir Defensa y Gobernación.

f/ PIB en millones de córdobas de 1980.

Cuadro 20

NICARAGUA: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS

	Promedios				1990	1991	1992 a/
	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989			
Superficie b/	339.5	350.2	370.9	374.1	363.1	379.0	362.6
Maíz	210.2	210.0	198.6	173.3	175.0	197.5	175.0
Frijol	54.4	63.7	84.7	91.9	105.0	95.0	91.0
Arroz	30.9	25.0	40.5	39.1	38.2	38.5	44.1
Sorgo	44.0	51.5	47.1	69.7	44.9	48.0	52.5
Producción c/							
Maíz	181.2	198.4	202.9	219.2	201.3	233.7	230.0
Frijol	36.5	47.0	52.4	53.6	55.2	58.7	56.8
Arroz	87.8	76.5	135.4	118.2	117.6	114.1	135.2
Sorgo	44.5	57.1	88.4	126.4	71.1	86.5	91.3
Rendimiento d/							
Maíz	0.9	0.9	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3
Frijol	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
Arroz	2.8	3.1	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1
Sorgo	1.0	1.1	1.9	1.8	1.6	1.8	1.7

Fuente: SIECA, VII Compendio Estadístico Centroamericano, 1975 y Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Miles de hectáreas.

c/ Miles de toneladas

d/ Toneladas por hectárea.

Cuadro 21
NICARAGUA: CONSUMO APARENTE Y POR HABITANTE DE GRANOS BASICOS
(Miles de toneladas)

	Promedio		1990	1991	1992 a/
	1980-1984	1985-1989			
Producción					
Maíz	202.9	219.2	201.3	233.7	230.0
Frijol	52.4	53.6	55.2	58.7	56.8
Arroz limpio	84.6	73.9	73.5	71.3	84.5
Sorgo	88.4	126.4	71.1	86.5	91.3
Importaciones b/					
Maíz	52.1	25.2	54.6	57.0	...
Frijol	10.9	12.7	8.4	3.0	...
Arroz	16.5	33.0	38.7
Sorgo	-	-	-	-	...
Exportaciones					
Maíz	0.2	0.6	-	-	...
Frijol	0.9	0.3	1.8	1.0	...
Arroz	0.3	-	-	-	...
Sorgo	-	-	-	-	...
Consumo aparente					
Maíz	254.8	243.8	255.9	290.7	...
Frijol	62.5	66.0	61.8	60.7	...
Arroz	100.8	106.9	112.2	71.3	...
Sorgo	88.3	126.4	71.1	86.5	...
Consumo por habitante c/					
Maíz	86.0	69.6	66.10	72.68	...
Frijol	21.1	18.8	15.97	15.17	...
Arroz	34.1	30.7	28.99	17.83	...
Sorgo	29.8	36.6	18.36	21.62	...

Fuente: Banco Central de Nicaragua y FAO, Anuario de Comercio, 1992.

a/ Cifras preliminares.

b/ Incluye importaciones comerciales y donaciones.

c/ Kilogramos por persona por año.

Cuadro 22

NICARAGUA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(Millones de córdobas de 1980)

	Promedio			1990	1991	1992 a/	1993 b/
	1975- 1979	1980- 1983	1985- 1989				
Total	13,706.4	12,146.6	11,163.2	9,300.0	9,814.8	9,505.1	9,610.4
Alimentos	5,212.9	4,626.0	3,783.5	3,780.7	3,845.3	3,773.3	3,947.1
Bebidas	919.3	1,115.9	1,040.4	798.9	1,290.0	1,419.7	1,496.5
Tabaco	377.5	459.6	492.0	321.8	503.4	435.4	389.3
Textiles	565.0	493.7	580.1	408.1	290.4	219.2	158.3
Vestuario	403.9	447.8	387.4	90.2	45.1	13.5	2.7
Cuero y producción de cuero	119.6	80.0	51.9	15.7	19.9	22.0	22.5
Calzado c/	-	430.4	201.0	68.9	80.4	88.0	89.2
Madera y corcho	391.9	212.8	149.7	156.1	164.0	165.0	170.6
Muebles y accesorios	90.5	63.7	50.2	29.9	44.7	40.8	34.8
Papel y producción de papel	298.9	39.7	78.3	55.7	74.9	63.5	66.9
Imprentas y editoriales	224.4	242.2	293.4	153.2	136.2	132.5	135.6
Productos químicos	1,852.4	1,197.1	1,066.2	810.2	606.2	391.0	328.4
Caucho y producción de caucho	44.7	35.2	28.5	13.2	8.8	8.7	8.9
Producción y derivados del petróleo	1,645.5	1,623.3	1,688.0	1,703.5	1,787.0	1,865.0	1,879.0
Minerales no metálicos	351.9	423.4	472.5	352.7	458.3	505.1	532.2
Productos metálicos	470.7	384.3	511.3	280.9	224.1	105.3	68.7
Maquinaria, artículos eléctricos y no eléctricos	209.5	83.9	104.8	126.9	51.3	21.6	19.1
Material de transporte	24.9	27.3	32.4	10.1	10.8	21.7	20.3
Diversos	502.6	160.2	151.7	123.3	174.0	213.8	240.3

Fuente: Secretaría de Planificación y Presupuesto (SPP) y Banco Central de Nicaragua.

a/ Cifras preliminares.

b/ Cifras estimadas.

c/ La rama de calzado se incluyó en la del vestido de 1975 a 1978.

Cuadro 23

NICARAGUA: REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA, 1952, 1978 Y 1988

Tamaño de las explotaciones	Superficie			Tasas de crecimiento 1978-1988
	1952	1978	1988	
	Hectáreas			
Total	2,387,766	5,651,100	5,651,100	
Sector privado	2,387,766	5,651,100	2,595,947	-54.1
Microfincas a/	82,797	119,000	96,183	-19.2
Subfamiliares b/	318,883	868,700	650,552	-25.1
Familiares c/	681,202	1,701,700	981,114	-42.3
Medianas d/	357,813	917,700	507,855	-44.7
Grandes e/	949,071	2,044,000	360,243	-82.4
Sector Reformado			2,733,356	
Empresas de la Reforma Agraria			663,761	
Cooperativas f/			780,976	
Asignación individual			146,982	
Titulación especial			1,021,997	
Titulación a comunidades indígenas			119,640	
Area en abandono g/			321,797	
	Porcentajes			
Total	100.0	100.0	100.0	
Sector privado	100.0	100.0	45.9	
Microfincas	3.5	2.1	1.7	
Subfamiliares	13.3	15.4	11.5	
Familiares	28.5	30.1	17.4	
Medianas	15.0	16.2	9.0	
Grandes	39.7	36.2	6.4	
Sector Reformado			48.4	
Empresas de la Reforma Agraria			11.7	
Cooperativas			13.8	
Asignación individual			2.6	
Titulación especial			18.1	
Titulación a comunidades indígenas			2.1	
Area en abandono			5.7	

Fuente: Oficina de Tenencia de la Tierra y Dirección General de Estadística, sobre la base de datos de la Encuesta Agropecuaria de 1952 y Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA), "La Reforma Agraria en Nicaragua, 1979-1989", Vol. IX, Managua, Nicaragua, Julio de 1989.

a/ De menos de 7 hectáreas.

b/ De 7 a menos de 35 hectáreas.

c/ De 35 a menos de 140 hectáreas.

d/ De 140 a menos de 350 hectáreas.

e/ De más de 350 hectáreas.

f/ Cooperativa Agrícola Sandinista (CAS), Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS), Colectivo de Trabajo (CT) y Cooperativa de Surco Muerto (CSM). Sólo incluye área entregada por la Reforma Agraria.

g/ Comprende área de diferentes sectores de propiedad.

Cuadro 24

NICARAGUA: CREDITO BANCARIO POR TIPO DE ACTIVIDAD
(Millones de córdobas)

	Entregas brutas			Recuperaciones			Porcentaje entregas brutas		
	1991	1992	1993 a/	1991	1992	1993 a/	1991	1992	1993 a/
Total	2,223	2,451	1,293	1,622	1,893	1,033	100.0	100.0	100.0
Comercial	409	738	515	383	575	321	18.4	30.1	39.8
Agropecuario	767	991	430	388	553	397	34.5	40.4	33.2
Agrícola	462	456	173	314	325	194	20.8	18.6	13.4
Ganadero	305	535	257	75	228	204	13.7	21.8	19.8
Industrial	393	601	322	177	569	246	17.7	24.5	24.9
Vivienda	7	-	3	1	-	1	0.3	-	0.2
Otros	5	4	11	1	3	6	0.2	0.2	0.9
Préstamos especiales	642	118	16	671	194	51	28.9	4.8	1.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares a mayo de 1993.